

CUMBRE DE JOHANNESBURGO 2002



RESEÑA DE ARGENTINA



NACIONES UNIDAS

INTRODUCCION - RESEÑAS DE LOS PAISES DEL 2002

El Programa 21, aprobado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), Río de Janeiro en 1992, subrayó el importante papel que desempeñan los Estados en la aplicación del Programa en el plano nacional. Recomendó que los Estados consideraran la posibilidad de preparar informes nacionales y que comunicaran la información en ellos contenida a la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible (CDS), incluidas las actividades que desempeñen para ejecutar el Programa 21, los obstáculos y desafíos que enfrenten y otras cuestiones relativas al medio ambiente y el desarrollo que consideren pertinentes.

Como resultado, en 1993 los gobiernos comenzaron a preparar informes nacionales para presentarlos a la CDS. Después de dos años de seguir esta práctica, la CDS decidió que sería útil presentar una versión resumida de los informes nacionales que se habían presentado hasta la fecha. Posteriormente, en 1997 la secretaría de la CDS publicó la primera serie de reseñas de los países con motivo del examen quinquenal de la Cumbre para la Tierra (Río + 5). En la serie se resumieron, país por país, todos los informes nacionales presentados entre 1994 y 1996. Cada reseña abarcó el estado de cumplimiento de todos los capítulos del Programa 21.

El objetivo de las reseñas de los países es:

- Ayudar a los países a supervisar sus propio avance;
- Compartir experiencias e información con los demás; y
- Servir de memoria institucional para seguir y registrar las medidas nacionales emprendidas para ejecutar el Programa 21.

Se está publicando una segunda serie de reseñas de los países con motivo de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (CMDs) que se celebrará en Johannesburgo del 26 de agosto al 4 de septiembre del 2002. En cada reseña se incluyen los 40 capítulos del Programa 21 y las cuestiones que la CDS ha abordado por separado desde 1997, entre ellas, el comercio, la energía, el transporte, el turismo sostenible y la industria.

La serie de reseñas de los países del 2002 proporciona el panorama más amplio hasta la fecha del estado de aplicación del Programa 21 en el plano nacional. Cada reseña se basa en la actualización de la información que figura en los informes nacionales presentados anualmente por los gobiernos.

La preparación de informes nacionales a menudo es difícil. También puede ser productiva y gratificante, ya que permite reflexionar sobre lo que se ha logrado y aumentar la comunicación, la coordinación y la cooperación entre diversos organismos, instituciones y grupos nacionales. Se espera que la información que figura en esta serie de reseñas de los países sirva como instrumento útil para aprender de las experiencias y de los conocimientos adquiridos en cada país en búsqueda del desarrollo sostenible.

NOTA A LOS LECTORES

Al momento del cierre de esta publicación, Argentina había entregado el Perfil en un formato distinto al solicitado por la Secretaría. Debido a que el formato difiere de aquel utilizado por la mayoría de los países, es posible que en el momento de colocar la información en la base de datos que está siendo elaborada, ésta no quede debidamente consignada. Es por ello que instamos a los países a que presenten el Perfil de País de conformidad con el formato empleado por la Secretaría y que ha sido incluido en este CD-Rom como punto de referencia. Una vez que el Perfil de País siga el formato apropiado, el Perfil aparecerá en la página de Internet: <http://www.un.org/esa/agenda21/natlinfo>

LISTA DE SIGLAS DE USO FRECUENTE

AEC	Asociación de los Estados del Caribe
AMCEN	Conferencia Ministerial Africana sobre Medio Ambiente
APEC	Cooperación Económica Pacífico-Asiática*
ACNUR	Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
AOD	Asistencia oficial para el desarrollo
ASEAN	Asociación de Naciones Unidas del Asia Sudoriental
CAPI	Comisión de Administración Pública Internacional
CARICOM	Comunidad del Caribe
CDB	Convención de Diversidad Biológica
CDS	Comisión sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas
CEDEAO	Comunidad Económica de los Estados de Africa Occidental
CEEAC	Comunidad Económica de los Estados de Africa Central
CEI	Comunidad de Estados Independientes
CEPA	Comisión Económica para Africa
CEPAL	Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CEPE	Comisión Económica para Europa
CESPAO	Comisión Económica y Social para Asia Occidental
CESPAP	Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico
CGIAR	Grupo Consultivo sobre Investigaciones Agrícolas Internacionales
CILSS	Comité Interestatal Permanente de Lucha contra la Sequía en el Sahel
CITES	Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
CIUC	Consejo Internacional de Uniones Científicas
CMA	Consejo Mundial de la Alimentación
CMDs	Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible
CNUAH	Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
CNULD	Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación
CNUMAD	Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
COI	Comisión Oceanográfica Intergubernamental
COMESA	Mercado Común de Africa Sur-Occidental*
DAES	Departamento de Asuntos Económicos y Sociales
DELP	Documentos de estrategia de lucha contra la pobreza
EIA	Evaluación de impacto ambiental
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
FIDA	Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
FIDA	Fundación para la Asistencia Internacional para el Desarrollo*
FISQ	Foro Intergubernamental de Seguridad Química
FMAM	Fondo para el Medio Ambiente Mundial
FMI	Fondo Monetario Internacional
FNUAP	Fondo de Población de las Naciones Unidas
FNUB	Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques
GATT	Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
GEACCM	Grupo de Expertos sobre los Aspectos Científicos de la Contaminación del Mar
GEI	Gases efecto invernadero
GLOBE	Organización Mundial de Legisladores en pro de la Protección del Medio Ambiente
GRID	Base de Datos sobre Recursos Mundiales
IGAD	Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo
ICSC	Comisión Internacional de Servicios
ICTSD	Centro Internacional para el Comercio y el Desarrollo Sostenible
IEEA	Contabilidad Económica y Ambiental Integrada*
IPCC	Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático

IPCS	Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas
IPM	Manejo Integrado de Plagas*
ISDR	Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres*
ISO	Organización Internacional de Normalización
LA21	Programas 21 locales*
MARPOL	Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques
MEAs	Acuerdos ambientales multilaterales*
NEAPs	Planes nacionales de acción ambiental*
NEPAD	Nueva Alianza para el Desarrollo de Africa
NSDS	Estrategias nacionales de desarrollo sostenible*
OCDE	Organización de Cooperación y Desarrollo Económico
OEA	Organización de los Estados Americanos
OIEA	Organismo Internacional de Energía Atómica
OIMT	Organización Internacional de las Maderas Tropicales
OIT	Organización Internacional del Trabajo
OMC	Organización Mundial del Comercio
OMI	Organización Marítima Internacional
OMM	Organización Meteorológica Mundial
OMS	Organización Mundial de la Salud
ONG	Organizaciones no gubernamentales
ONU	Organización de las Naciones Unidas
ONUDI	Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
ONUSIDA	Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el Virus de la Inmunodeficiencia Humana y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH/SIDA)
OUA	Organización de la Unidad Africana
PEID	Pequeños Estados insulares en desarrollo
PMA	Países menos adelantados
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PNUMA	Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
RIQPT	Registro Internacional de Productos Químicos Potencialmente Tóxicos
SACEP	Programa de Cooperación Ambiental Sur-Asiático
SADC	Comunidad del Africa Meridional para el Desarrollo
SARD	Desarrollo agrícola y rural sostenible*
SIG	Sistema de Información Geográfica
SIMUVIMA	Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente (PNUMA)
SMO	Sistema Mundial de Observación (OMM/VMM)
SPREP	Programa Regional del Pacífico Sur para el Medio Ambiente
TIC	Tecnología de la información y las comunicaciones
UE	Unión Europea
UICN	Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos
UMA	Unión del Magreb Árabe
UNCLOS	Convención de las Naciones Unidas sobre la Ley del Mar
UNCTAD	Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
UNDRO	Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre
UNESCO	Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
UNICEF	Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
UNIFEM	Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer
UNFCCC	Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
UNU	Universidad de las Naciones Unidas
VAG	Vigilancia de la Atmósfera Global (OMM)
VIH/SIDA	Virus de la inmunodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida
VMM	Vigilancia Meteorológica Mundial

WWF	Fondo Mundial para la Naturaleza
ZEE	Zona Económica Exclusiva

La mayoría de los términos y de las siglas han sido oficialmente traducidos por la ONU del inglés al español. Sin embargo, se dan casos en los cuales no existe una traducción oficial del término y, por tanto, la traducción es libre. Estos casos aparecen señalados con un asterisco. En otros casos, aunque el término se encuentre traducido al español, la sigla en inglés es la que se utiliza comúnmente.

ORGANISMOS PUBLICOS QUE PARTICIPARON EN LA ELABORACION DEL INFORME NACIONAL

Presidencia de la Nación (PN)

Secretaría para la Tecnología, la Ciencia y la Innovación Productiva (STCyIP)

Secretaría de Turismo /ST)

Administración de Parque Nacionales (APN)

Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM)

Dirección Nacional de la Mujer (DNM)

Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente (MDSyMA)

Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental (SDSyPA)

Subsecretaría de Ordenamiento y Política Ambiental (SSOyPA)

Dirección Nacional de Ordenamiento Ambiental (DNOA)

Dirección Nacional de Desarrollo Sustentable (DNDS)

Dirección Nacional de Ambiente Humano (DNAH)

Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)

Ministerio de Defensa (MD)

Policía Aeronáutica Nacional (PAN)

Ministerio de Infraestructura y Vivienda (MIV)

Subsecretaría de Recursos Hídricos (SSRH)

Ministerio de Economía (ME)

Secretaría de Agricultura Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGyP)

Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA)

Ministerio del Interior (MI)

Prefectura Naval Argentina (PNA)

Gendarmería Nacional (GN)

Ministerio de Salud

Secretaría de Atención Sanitaria (SAS)

INDICE GENERAL

INTRODUCCION

A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PAÍS

- A.1. Ubicación geográfica y organización político – institucional**
- A.2. Características Naturales**
- A.3. Población**

B. EVALUACIÓN GENERAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA XXI

- a. Logros**
- b. Factores que contribuyeron a esos logros**
- c. Limitaciones**
- d. Planeamiento estratégico a favor del desarrollo sustentable**
- e. El proceso de desarrollo de la estrategia**
- f. Metas y Desafíos**
- g. Correcciones en el rumbo**
- g.1. Nacional**
- g.2. Regional**
- g.3. Internacional**

C. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE CADA UNA DE LAS SECCIONES DE LA AGENDA XXI

C.I. Sección I: Dimensiones Económicas y Sociales

C.I.1. Lucha Contra la Pobreza

- a. Contexto Económico – Cuadro social
- b. Acciones y Desafíos**

C.I.2. Protección y Fomento de la Salud Humana

- a. Logros
- b. Factores que contribuyeron a esos logros
- c. Limitaciones
- d. Metas y Desafíos**

C.II. Sección II: Conservación y Gestión de los Recursos para el Desarrollo

C.II.1. Recursos Forestales

- a. Logros
- b. Factores que contribuyeron a esos logros
- c. Limitaciones
- d. Metas y Desafíos**

C.II.2 Fauna y Flora Silvestres

- a. Logros
- b. Factores que contribuyeron a esos logros
- c. Limitaciones

d. Metas y Desafíos**C.II.3. Recursos Ictícolas y Acuícolas**

- a. Logros
- b. Factores que contribuyeron a esos logros
- c. Limitaciones

d. Metas y Desafíos**C.II.4. Suelos**

- a. Logros
- b. Factores que contribuyeron a esos logros
- c. Limitaciones

d. Metas y Desafíos**C.II.5. Areas Protegidas**

- a. Logros
- b. Factores que contribuyeron a esos logros
- c. Limitaciones

d. Metas y Desafíos**C.II.6. Recursos Hídricos**

- a. Logros
- b. Factores que contribuyeron a esos logros
- c. Limitaciones

d. Metas y Desafíos**C.II.6.1. Servicios de Agua Potable y Saneamiento**

- a. Logros
- b. Factores que contribuyeron a esos logros
- c. Limitaciones

d. Metas y Desafíos**C.II.7. Biodiversidad**

- a. Logros

b. Limitaciones**c. Metas y Desafíos****C.II.8. Bioseguridad**

- a. Logros
- b. Limitaciones

c. Metas y Desafíos**C.II.9. Agricultura**

- a. Logros
- b. Limitaciones
- c. Desafíos

C.II.10. Sustancias y Productos Químicos Tóxicos

- a. Logros
- b. Factores que contribuyeron a esos logros
- c. Limitaciones

d. Metas y Desafíos**C.II.11. Residuos Peligrosos**

- a. Logros
- b. Factores que contribuyeron a esos logros
- c. Limitaciones

d. Metas y Desafíos**C.II.12. Desechos Sólidos Urbanos**

- a. Logros
- b. Factores que contribuyeron a esos logros
- c. Limitaciones

d. Metas y Desafíos**C.II.13. Protección de la Atmósfera****C.II.13.1. Aire**

- a. Logros
- b. Factores que contribuyeron a esos logros
- c. Limitaciones

d. Metas y Desafíos**C.II.13.2. Capa de Ozono**

- a. Logros
- b. Factores que contribuyeron a esos logros
- c. Limitaciones

d. Metas y Desafíos**C.II.1.3.3. Cambio Climático**

- a. Logros
- b. Factores que contribuyeron a esos logros
- c. Limitaciones

d. Metas y Desafíos**C.III. Sección III: Fortalecimiento de los Grupos Principales**

- a. Logros
- b. Factores que contribuyeron a esos logros
- c. Limitaciones

d. Metas y Desafíos**C.III.1. ONGs****C.III.2. Mujeres****C.III.3. Infancia y Juventud****C.III.4. Grupos Indígenas****C.III.5. Iniciativas de las Autoridades Locales****C.III.6. Industria y Comercio**

C.IV. Sección IV: Medios de Ejecución

C.IV.1. Recursos y Mecanismos de Financiación

- a. Logros
- b. Factores que contribuyeron a esos logros
- c. Limitaciones
- d. Metas y Desafíos

C.IV.2. Tecnologías Ecológicamente Racionales

- a. Logros
- b. Factores que contribuyeron a los logros
- c. Limitaciones
- d. Metas y desafíos

C.IV.3. Ciencia y Tecnología

- a. Logros
- b. Factores que contribuyeron a esos logros
- c. Limitaciones
- d. Metas y Desafíos

C.IV.4. Educación

- a. Logros
- b. Factores que contribuyeron a esos logros
- c. Limitaciones
- d. Metas y Desafíos

C.IV.5. Arreglos Institucionales Internacionales

- a. Logros
- b. Factores que contribuyeron a esos logros
- c. Limitaciones
- d. Metas y Desafíos

C.IV.6. Instrumentos Jurídicos Internacionales

- a. Logros
- b. Factores que contribuyeron a esos logros
- c. Limitaciones
- d. Metas y Desafíos

C.IV.7. Información para la Toma de Decisión

- a. Logros
- b. Limitaciones
- c. Metas y Desafíos

ANEXOS

D. EJEMPLOS Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN EL PAÍS RESPECTO DE CADA UNA DE LAS SECCIONES DE LA AGENDA XXI

D.I. SECCIÓN I: Dimensiones Económicas y Sociales

D.I.1. Lucha Contra la Pobreza **a. Planes, Programas y Proyectos**

D.I.2. Protección y Fomento de la Salud Humana **a. Planes, Programas y Proyectos**

D.II. SECCIÓN II: Conservación y Gestión de los Recursos para el Desarrollo

D.II.1. Recursos Forestales **a. Planes, Programas y Proyectos** **b. Congresos, Seminarios, Talleres** **c. Normativa** **d. Acuerdos Institucionales e Interjurisdiccionales**

D.II.2. Fauna y Flora Silvestres **a. Planes, Programas y Proyectos** **b. Asistencia Técnica** **c. Normativa** **d. Registros Nacionales** **e. Acuerdos Institucionales e Interjurisdiccionales** **f. Actividades de Control**

D.II.3. Recursos Ictícolas y Acuícolas **a. Planes, Programas y Proyectos** **b. Congresos, Seminarios, Talleres** **c. Asistencia Técnica** **d. Normativa**

D.II.4. Suelos **a. Planes, Programas y Proyectos** **b. Congresos, Seminarios y Talleres** **c. Acuerdos Institucionales e Interjurisdiccionales** **d. Normativa**

D.II.5. Areas Protegidas **a. Listado de Areas Protegidas Nacionales, Provinciales y Privadas** **b. Reservas de Biosfera** **c. Programa MAB-UNESCO en la Argentina**

D.II.6. Recursos Hídricos**D.II.6.1. Estrategias Sobre los Recursos Hídricos en el Ambito Nacional****D.II.6.2. Servicios de Agua Potable y Saneamiento**

- a. Estrategias, Planes y Programas
- b. Cobertura de Servicios Urbano/rural
- c. Tecnologías y Tratamiento de Depuración de los Efluentes Cloacales
- d. Modalidades de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
- e. Régimen Tarifario
- f. Participación del Sector Privado en la Prestación de los Servicios

D.II.7. Biodiversidad

- a. Proceso Participativo para la Elaboración de la Estrategia Nacional de Biodiversidad – Borrador de la Estrategia
- b. Planes, Programas y Proyectos
- c. Acuerdos Interinstitucionales

D.II.8. Bioseguridad

- a. Normativa
- b. Planes y Programas
- c. Actividades de la CONABIA
- d. Campañas de Difusión

D.II.9. Agricultura

- a. Planes, Programas y Proyectos

D.II.10. Sustancias y Productos Peligrosos

- a. Planes y Programas
- b. Normativa

D.II.11. Residuos Peligrosos

- a. Planes Programas y Proyectos
- b. Congresos, Seminarios y Talleres
- c. Normativa
- d. Acuerdos Institucionales e Interjurisdiccionales
- e. Asistencia Técnica
- f. Mecanismos de Información y Participación

D.II.12. Desechos Sólidos Urbanos

- a. Planes, Programas y Proyectos
- b. Congresos, Seminarios y Talleres

D.II.13. Protección de la Atmósfera**D.II.13.1. Capa de Ozono**

- a. Programas

D.II.13.2. Cambio Climático

- g. Políticas, Estrategias, Planes, Programas y Proyectos
- h. Acuerdos Institucionales e Interjurisdiccionales
- c. Estudios sobre Cambio Climático

D.III. Sección III: Fortalecimiento de los Grupos Principales

D.III.1. ONGs

- a. Mecanismos de Participación, Información y Financiación
- b. Aportes de las ONGs al Informe Nacional

D.III. 2. Mujeres

- a. Planes, Programas y proyectos
- c. Congresos y Talleres
- d. Participación en toma de decisión
- e. Normativa

D.III. 3. Infancia y Juventud

- a. Programas y Proyectos
- b. Actividades de Divulgación

D.III. 4. Poblaciones Indígenas

- a. Planes, Programas y Proyectos
- b. Congresos, Seminarios y Talleres
- c. Normativa

D.III. 5. Iniciativa de las autoridades locales

- a. Acuerdos Institucionales
- b. Planes y Programas

D.IV. Sección IV: Medios de Ejecución

D.IV.1. Recursos y Mecanismos de Financiación

- a. Planes, Programas y Proyectos

D.IV.2. Tecnologías Ecológicamente Racionales

- a. Fortalecimiento Institucional
- b. Planes y Programas

D.IV.3. Ciencia y Tecnología

- a. Planes, Programas y Proyectos

D.IV.3. Educación

- a. Actividades Educativas en General
- b. Actividades por Areas Temáticas
- c. Documento Base de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental

D.IV.4. Arreglos Institucionales

- a. Regionales e Internacionales
- b. Comisiones Binacionales

D.IV.5. Instrumentos Jurídicos Internacionales
a. Instrumentos Jurídicos Internacionales Ratificados

D.IV.6. Información para la Toma de Decisión

- a. Sistema de Información Ambiental**
- b. Páginas WEB de los Organismos que Participaron del Informe Nacional**

D. EJEMPLOS DE ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR LAS PROVINCIAS QUE APORTARON INFORMACION PARA LA ELABORACION DEL INFORME NACIONAL

INTRODUCCION

Desde la celebración en junio de 1992 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la República Argentina ha venido desarrollando múltiples acciones en el campo de la política y la gestión ambiental, tanto en el nivel interno como externo para dar cumplimiento con algunos de los compromisos políticos que surgen de la Agenda XXI.

A partir del mandato de la 55ª Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Comisión de Desarrollo Sustentable en su VIII Período de Sesiones, el país inició el proceso de evaluación y examen crítico de las acciones desarrolladas para lograr la implementación de la Agenda XXI.

En tal sentido, el presente Informe Nacional refleja los resultados de tal evaluación, considerando las acciones implementadas, en función del grado de ejecución de los compromisos allí asumidos, lo cual implica un reto indiscutible para el país.

Como resultado de tal examen, el presente Informe, además de contribuir con el proceso preparatorio de Río + 10, pretende convertirse en una herramienta para la política y la gestión del desarrollo sustentable, ya que aporta información sustantiva y sistematizada, sobre los logros alcanzado en el país en materia de protección del ambiente y conservación de los recursos naturales y sobre las principales metas y desafíos que deberá afrontar la República Argentina, si asume el compromiso de alcanzar un desarrollo económicamente sano, socialmente equitativo, y ambientalmente sustentable.

Este examen también resultará un insumo básico en la tarea de definir, en un marco ampliamente participativo, el perfil del desarrollo que se quiera adoptar y el planteamiento estratégico para construirlo, determinando las oportunidades de inserción en el contexto regional e internacional.

Con el objeto de facilitar la lectura de este Informe Nacional, la evaluación ha sido efectuada sobre la base del Marco Propuesto por el Secretario General Adjunto de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, con algunas adecuaciones en función de la realidad que hoy impera en el país.

La coordinación y elaboración del mismo, estuvo a cargo de la SDS y PA del MDS y MD. Las áreas del Gobierno nacional que tienen competencia en algunos de los capítulos de la Agenda XXI, colaboraron con los informes sectoriales, al igual que las provincias. En la página de presentación, se mencionan los organismos que respondieron a la convocatoria y participaron en su elaboración.

De acuerdo con las instrucciones recibidas por la coordinación, se adoptó una estructura metodológica compuesta por cuatro ítem, organizados y sistematizados de la siguiente forma:

El ítem A, describe en forma sucinta las características del país considerando: ubicación geográfica, organización político - institucional de toma de decisión en materia ambiental; características del medio natural y de la población.

El ítem B, de carácter político, contiene un examen general de las acciones desarrolladas para lograr la implementación de la Agenda XXI, dividido en los siguientes objetivos evaluados: logros alcanzados por el país respecto del conjunto de ejes temáticos que involucra la Agenda XXI; factores que facilitaron dichos logros; limitaciones para cumplir con los objetivos de dicha Agenda; planeamiento estratégico adoptado en favor del desarrollo sustentable; proceso de desarrollo de la estrategia; metas y desafíos que se propone el país; sugerencias sobre correcciones en el rumbo en los ámbitos nacional, regional e internacional, para avanzar hacia el desarrollo sustentable.

El ítem C, de carácter descriptivo sectorial, comprende los siguientes objetivos evaluados: logros alcanzados en la aplicación de la Agenda XXI; factores que contribuyeron a los mismos; limitaciones; estrategias adoptadas y principales metas y desafíos para alcanzar el desarrollo sustentable en el país. A su vez, dichos objetivos son examinados en cada una de las secciones en que se divide la Agenda XXI, y con relación a los principales ejes temáticos contenidos en los capítulos que integran la misma.

El ítem D, corresponde a los ANEXOS. En éstos se mantiene una estructura metodológica similar a la del ítem C y se describen las actividades desarrolladas en los ámbitos provincial, regional, nacional e internacional, a través de planes, programas, proyectos, talleres, procesos de capacitación, interacción con las ONGs y con la sociedad en su conjunto. También se mencionan, sucintamente, las principales herramientas de gestión y la normativa disponible para dar cumplimiento con la Agenda XXI.

Por último la información reflejada en los ANEXOS, puede ser complementada con la existente en las páginas WEB de los organismos que participaron en este Informe, las que constan en ANEXO D.IV.6.

A. INFORMACION GENERAL DEL PAIS

A.1. Ubicación Geográfica

La República Argentina está ubicada en el extremo sur del continente americano, limitando al norte con las Repúblicas de Bolivia y Paraguay, al este con la República Federativa de Brasil, la República Oriental del Uruguay y el Océano Atlántico, y hacia el oeste con la República de Chile.

De los 3.761.274 Km² que representa la superficie total del país; 969.464 Km² pertenecen al continente Antártico incluyendo las Islas Órcadas del Sur; y las islas Australes, (Georgias del Sur y Sandwich del Sur).

Dada su posición en el continente sudamericano, Argentina es un país de fácil acceso por el este, debido a su extenso frente oceánico. Sin embargo, su situación en un hemisferio predominantemente marítimo como es el austral, la margina de los grandes centros mundiales de la historia contemporánea, que se desarrollan fundamentalmente a orillas del Atlántico Norte y, en general, en el hemisferio boreal.

En el conjunto mundial de las Naciones, la Argentina ocupa el séptimo lugar por su extensión territorial.

A.2. Organización político – institucional ambiental

La organización político-institucional de la República Argentina responde a un Estado Federativo, en el cual las provincias son los Estados Miembros. Dentro de estos Estados Miembros, la Constitución Nacional y las constituciones provinciales garantizan las autonomías municipales.

Los estados provinciales son 23, con la provincialización del anterior Territorio Nacional de Tierra del Fuego.

La Capital de la República Argentina se encuentra situada en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo la sede de los poderes que gobiernan la República: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Dentro del marco de las políticas públicas implementadas de 1992 a la fecha, la política ambiental ha logrado construir espacios de mayor relevancia, tanto en el nivel nacional como en el de las provincias, como puede observarse de la lectura del ítem B.a.

Actualmente, la República Argentina mediante la Ley de Ministerios N° 22.520, modificada por las Leyes Nros. 24.190 y 25.233 del 10 de diciembre de 1999, organiza la estructura de la Administración Pública Nacional. De ésta, se desprende la organización institucional ambiental, asignándose las principales competencias primarias sobre la materia, en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental.

Respecto de la organización institucional ambiental en las provincias, ésta se encuentra estructurada actualmente a través de Ministerios, Secretarías, Direcciones Generales, Departamentos o Unidades Ambientales.

A.2. CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO NATURAL

La Argentina es un país que se caracteriza por poseer un extenso territorio y una gran variedad de climas y ecosistemas asociados.

Desde el punto de vista biogeográfico Argentina reúne regiones muy diferentes, producto de sus variados climas y relieve. Según el esquema presentado en la publicación "Eco-Regiones de la Argentina" (Presidencia de la Nación – Programa de Desarrollo Institucional Ambiental), pueden describirse las siguientes unidades ambientales o Regiones Biogeográficas:

Altos Andes formado por las altas cumbres de los diferentes cordones montañosos de la Cordillera de los Andes, su clima es frío y en general las cumbres más altas presentan nieves permanentes; la heliofanía es alta y la amplitud térmica muy grande. Las precipitaciones son del orden de los 100 a 200 mm anuales. El relieve, la actividad morfodinámica y el clima severo inhiben la evolución de los suelos. La vegetación predominante es la estepa graminosa o arbustiva, baja y rala, adaptada a la rigurosidad del clima. La fauna altoandina está igualmente adaptada a las duras condiciones ambientales de la montaña.

Puna: en esta ecorregión se asocian caracteres geológicos, morfológicos y ecológicos muy particulares. Comienza en la frontera noroeste del país, dando continuidad al altiplano boliviano. El sistema de drenaje, generalmente endorreico, forma numerosas cuencas cerradas donde el escurrimiento descarga en salares y a veces en lagunas. Las altitudes son generalmente superiores a los 3.000 m, el clima es frío y seco, y presenta gran amplitud térmica diaria. Las lluvias son estivales y promedian los 100 a 200 mm anuales. Los suelos, de escaso desarrollo, a veces pedregosos o salinos, y escasamente cubiertos por la vegetación, son muy susceptibles a la erosión. La vegetación dominante es la estepa arbustiva.

Monte de Sierra y Bolsones: constituye una región árida con amplia diversidad biológica, geomorfológica y altimétrica. El clima es subtropical seco con escasas precipitaciones, en general entre los 80 y 200 mm. La radiación es intensa y la nubosidad baja. La temperatura de verano es cálida, el resto del año el frío es más o menos intenso. La aridez limita la evolución de los suelos, los que son predominantemente arenosos, pobres en materia orgánica y salinos. La fisonomía vegetal del monte es una estepa arbustiva alta (de 1 a 3 metros de altura), a veces muy abierta.

Yungas: se presentan en las laderas orientales de los Andes del norte de nuestro país. Su amplia extensión en Sudamérica permite reconocer esta ecorregión desde Venezuela hasta el noroeste argentino. El clima es cálido y húmedo a subhúmedo. Las condiciones de temperatura y humedad varían en razón de la

altitud, latitud y exposición de las laderas. Estas sierras conforman una barrera orográfica que condensa las corrientes húmedas que provienen del anticiclón del Atlántico Sur, lo que permite la existencia de una espesa cubierta selvática. Las altitudes varían entre los 400 y 3000 metros s.n.m., y la precipitación anual es del orden de los 800 a 2000 mm. Los suelos predominantes presentan desarrollo incipiente y abundante materia orgánica. El fuerte gradiente altitudinal origina importantes variaciones climáticas y, en consecuencia, diferentes formaciones vegetales.

Chaco Seco: comprende una vasta planicie que presenta una suave pendiente hacia el este. El clima es continental, cálido subtropical, con áreas que presentan las máximas temperaturas absolutas del continente. Las precipitaciones varían entre 500 y 700 mm anuales y son marcadamente estivales. En la mitad norte de la ecorregión se encuentran suelos más o menos evolucionados, ricos en nutrientes minerales y de textura media a fina, mientras que hacia el centro y sur predominan suelos arenosos con bajo contenido de materia orgánica. El tipo de vegetación característica es el bosque xerófilo. También abundan bosques serranos sabanas y pastizales.

Chaco Húmedo: es una ecorregión con pendiente muy suave hacia el este, en la que predominan ambientes deprimidos. El clima es subtropical cálido. Las lluvias poseen valores del orden de 1.300 mm anuales en el borde oriental y disminuyen hacia el oeste. La vegetación presenta mayor diversidad que la del Chaco Seco y la fauna es muy variada como consecuencia de la heterogeneidad de hábitat.

Selva Paranaense: Conforman la selva subtropical húmeda que cubre la cuencas altas de los ríos Paraná y Uruguay, en el sur de Brasil, este de Paraguay y el extremo noreste de la Argentina. En Argentina, ocupa casi todo el territorio de la Provincia de Misiones, donde sus límites están representados por tres ríos: el Uruguay, el Paraná y su tributario, el Iguazú. El clima es cálido y húmedo; las lluvias varían desde 1.600 mm hasta unos 2.000 mm y están relativamente bien distribuidas en el año. La temperatura media anual es del orden de 20°C. Presenta suelos lateríticos. La vegetación presenta una densa cobertura arbórea, conformada por 4-5 estratos verticales, alcanzando el superior 30 a 40 m de altura. Posee en toda su extensión 2.000 plantas vasculares y el sector argentino exhibe la diversidad biológica más alta de todas las ecorregiones del país. A título ilustrativo, se han citado unas 550 especies de aves sólo para la provincia de Misiones, lo que representa más del 50 % de la avifauna argentina.

Esteros del Iberá: ocupan el centro norte de la Provincia de Corrientes. Los diversos componentes del paisaje son reconocidos como lagunas, embalsados de vegetación flotante, esteros y bañados. Los diversos esteros están separados entre sí por extensos cordones arenosos. Los suelos son frecuentemente orgánicos, hidromórficos y arenosos; los de albardones son también arenosos y poco evolucionados, casi siempre con napa freática poco profunda. La vegetación propia de los diferentes ambientes presenta vegetación palustre arraigada; embalsados con camarotes y otros vegetales que forman islas flotantes a la deriva; pajonales en cañadas y bañados; prados; anegadizos en bancos de arena; isletas de bosque constituido por especies de la selva.

Campos y Malezas: abarca el sector periférico de la Selva Paranense y se continúa en los llanos vecinos del sur de Brasil y este del Paraguay; hasta el norte de la Argentina. Su paisaje predominante es el de vastos pastizales de llanura, de relieve ondulado en el norte y plano en el sur. El clima es subtropical húmedo con lluvias de alrededor de 1.500 mm anuales, uniformes a lo largo del año. La vegetación está conformada en el norte por pastizales y pajonales compuestos por diversas comunidades herbáceas. En conjunto forman los llamados "campos" que, por su condición subtropical y húmeda, albergan una gran riqueza en especies de pastos y otras hierbas. Diversificando la fisonomía vegetal, aparecen cinturones de selva en galería, acompañando los cursos fluviales, e isletas de bosque. En el sur, la fisonomía vegetal se vuelve de pajonales casi puros y muy uniformes sobre suelos encharcados.

Delta e Islas del Paraná: comprende los valles de inundación de los trayectos medios e inferiores de los ríos Paraná y su tributario, el Paraguay, los que recorren la llanura chaco-pampeana, encajonado en una gran falla geológica. La vegetación conforma bosques y arbustales, siempre en delgadas franjas ribereñas sobre los albardones; pajonales y pastizales en los interiores de isla sin espejo de agua abierta; comunidades hidrófilas y acuáticas sobre las riberas de ríos y canales y en lagunas del interior de islas. La fauna es particularmente rica debido a la variedad de ambientes y la presencia de refugios naturales.

Espinal: es una ecorregión de la llanura chaco-pampeana. El paisaje predominante es de llanura plana a suavemente ondulada, ocupada por bosques bajos, sabanas y pastizales, hoy convertidos en gran parte a la agricultura. Los suelos son de características muy variables. El clima es, en razón de la extensión de la región, extremadamente variable: cálido y húmedo en el norte, templado y seco con marcados déficit hídricos, hacia el oeste y sur. Las formaciones vegetales características son los bosques bajos de especies leñosas xerófilas, densos o abiertos, de un solo estrato, y las sabanas, alterando con pastizales puros.

Pampa: también llamada Llanura o Pradera Pampeana, ocupa una vasta zona del centro del país. El clima es templado-húmedo a subhúmedo, con veranos cálidos. Las lluvias, distribuidas durante el año, varían desde aproximadamente 600 mm en el suroeste, hasta 1.100 mm en el noreste. Los suelos presentan altos contenidos de materia orgánica y nutrientes y con horizontes subsuperficiales arcillosos. La formación vegetal originaria característica es el pastizal.

Monte de Llanuras y Mesetas: se extiende al este de la Cordillera de los Andes. El clima es templado-árido y las escasas precipitaciones se distribuyen, en el norte, a lo largo del año. Los suelos son predominantemente aridisoles, en correspondencia con el clima árido. La salinidad y pedregosidad son rasgos frecuentes. La vegetación es más pobre en comunidades y especies que la del Monte de Sierras Bolsones.

Estepa Patagónica: es una ecorregión casi exclusiva de la Argentina, que abarca la porción sur del país. Representa las cuencas medias e inferiores de los ríos de la vertiente atlántica y ciertas cuencas endorreicas, con lagos y lagunas en las depresiones. El clima es frío y seco, con características de semidesierto, con precipitaciones menores a los 250 mm de promedio anual en casi toda la región,

aumentando cerca de la Cordillera. Son característicos los fuertes vientos del oeste, las lluvias o nevadas de invierno, los veranos secos y heladas durante casi todo el año. Presenta un relieve de mesetas escalonadas hacia el este, montañas y colinas erosionadas, dunas, acantilados costeros y valles de ríos. La vegetación se caracteriza por presentarse bajo la forma de matorrales achaparrados, adaptados a las condiciones de déficit de humedad, bajas temperaturas, heladas y fuertes vientos: son arbustos bajos (de menos de 50 cm de altura), muchos con forma de cojín, otros espinosos, con hojas diminutas o sin hojas.

Bosques Patagónicos: también llamados Subantárticos o Andinos-

Patagónicos, se extienden como una estrecha franja recostada sobre el macizo cordillerano desde el norte del Neuquén hasta Tierra del Fuego e Isla de los Estados. El paisaje es de montaña, de relieve abrupto y escarpado, con picos nevados, valles glaciares, geoformas de origen volcánico en el norte, numerosos cursos de agua y lagos que desaguan a través de distintos ríos a las vertientes del Atlántico o del Pacífico. Las alturas máximas llegan a 3.000-3.700 ms.n.m. y van disminuyendo hacia el sur. El clima es templado a frío y húmedo, con copiosas nevadas o lluvias invernales, heladas durante casi todo el año y fuertes vientos del oeste. Hacia el este, desciende rápidamente la precipitación promedio y el bosque se empobrece en géneros y especies.

Islas del Atlántico Sur: La ecorregión está representada en las Islas

Malvinas, Islas Georgias del Sur, Islas Sandwich del Sur e islas subantárticas al norte del paralelo 60° de latitud Sur. Por las extremas condiciones climáticas y la naturaleza rocosa del terreno, los suelos están escasamente desarrollados encontrándose inceptisoles, suelos orgánicos y turberas. El clima dominante es oceánico, frío y húmedo. No hay bosques naturales y los tipos de vegetación dominante son las estepas gramíneas.

Mar Argentino: La ecorregión marina incluye la Plataforma Continental Argentina que puede subdividirse en una subregión "costera", representada por la franja de costas hasta la profundidad de 40 m y la subregión de la "plataforma exterior", que se extiende desde la profundidad de los 40 m hasta la de los 200 m. La diversidad de la flora y la fauna de la ecorregión está relacionada con la diversidad de los ambientes y la latitud geográfica.

Antártida: Abarca todo el continente Antártico e islas al sur del paralelo de 60', como las Orcadas y Shetland del Sur. En la Argentina corresponde al Sector Antártico Argentino. Las precipitaciones, en su totalidad en forma de nieve, alcanzan registros de 1.000 mm anuales. Las temperaturas en la Antártida son siempre muy bajas, llegando a -42°C en la noche polar y en el mes más caluroso, la media anual no supera en general los 0°C. Debido a la rigurosidad del clima y por estar la mayoría de las áreas terrestres cubiertas con nieve y hielo la mayor parte del año, la flora es muy escasa y está limitada a los sectores próximos al mar.

A.3. Población

En el presente ítem se transcriben las cifras estimadas de la población del país y de las provincias. Las mismas son proyecciones efectuadas sobre la base del último Censo Nacional de Población y Vivienda efectuado en 1991 por el INDEC.

**POBLACION TOTAL ESTIMADA AL 30 DE JUNIO DE 2000
TOTAL DEL PAIS Y PROVINCIAS**

JURISDICCION	TOTAL
TOTAL NACIONAL	37031802
Capital Federal	3046662
Buenos Aires	14214701
Catamarca	318147
Córdoba	3090803
Corrientes	921933
Chaco	951795
Chubut	448028
Entre Ríos	1113438
Formosa	504185
Jujuy	604002
La Pampa	306113
La Rioja	280198
Mendoza	1607618
Misiones	995326
Neuquen	560726
Río Negro	618486
Salta	1067347
San Juan	578504
San Luis	363345
Santa Cruz	206897
Santa Fe	3098661
Santiago del Estero	725993
Tucumán	1293349
Tierra del Fuego	115538

FUENTE: INDEC :CENSO NACIONAL DE POBLACION Y
VIVIENDAS 1991, SERIE ANALISIS DEMOGRAFICO N° 7, DT N°
78 DEL PROGRAMA DE ANALISIS DEMOGRAFICO NACIONAL

El cuadro que se transcribe a continuación mide el NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) del país, (medido sobre la base de cinco indicadores). El mismo constituye un indicador combinado que califica en situación de pobreza a todos los hogares que poseen al menos una de las siguientes características:

- Vivienda inconveniente: Tener piso de tierra u otro material que no sea cerámica, mosaico, madera, alfombra, plástico, cemento o ladrillo fijo.
- Condiciones sanitarias: Vivienda sin retrete con descarga de agua.
- Hacinamiento: Más de tres personas por cuarto.

- No asistencia escolar: Hogares en que algún miembro de seis a doce años no va a la escuela.

- Capacidad de subsistencia: Hogares en que hay tres miembros desocupados por cada miembro ocupado, en los casos en que el jefe de hogar tenga dos años o menos de escolaridad.

NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS

DIVISION POLITICO TERRITORIAL	Población en Viviendas particulares	Población NBI	%
TOTAL	32.243.851	6.426.708	19,9
CAPITAL FEDERAL	2.871.519	232.203	8,1
BUENOS AIRES	12.482.007	2.128.727	17,1
CATAMARCA	261.783	73.944	28,2
CORDOBA	2.734.630	413.573	15,1
CORRIENTES	790.786	248.144	31,4
CHACO	834.087	329.126	39,5
CHUBUT	350.158	76.608	21,9
ENTRE RIOS	1.009.940	207.794	20,6
FORMOSA	394.863	154.545	39,1
JUJUY	507.096	180.025	35,5
LA PAMPA	256.315	34.705	13,5
LA RIOJA	219.322	59.311	27
MENDOZA	1.400.118	246.789	17,6
MISIONES	782.131	262.812	33,6
NEUQUEN	380.300	81.391	21,4
RIO NEGRO	500.774	116.323	23,2
SALTA	858.251	318.532	37,1
SAN JUAN	525.488	103.865	19,8
SAN LUIS	283.550	61.057	21,5
SANTA CRUZ	155.791	22.860	14,7
SANTA FE	2.776.388	489.854	17,6
SANTIAGO DEL ESTERO	666.857	254.830	38,2
TUCUMAN	1.135.383	314.828	27,7
TIERRA DEL FUEGO	66.314	14.862	22,4

Fuente: Censo Nacional de Población
y Viviendas. INDEC, 1991.
SIEMPRO – 1995

B. EVALUACIÓN GENERAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA XXI

B. a. Logros:

La presente es una evaluación crítica de los resultados alcanzados en el país respecto de los compromisos políticos que derivan de la Agenda XXI. Para ello, se han considerado los principales avances en materia de protección del ambiente y conservación de los recursos naturales, como parte de un proceso de transición, que puede o no conducir hacia la sustentabilidad del desarrollo.

Expresar tal diferencia resulta fundamental, en tanto permite caracterizar el modelo de desarrollo que prevalece en el país, a pesar de los logros que se enuncian.

Desde la celebración de la CNUMAD al presente, no puede desconocerse que Argentina ha implementado múltiples iniciativas de indudable repercusión positiva en el marco del desarrollo político, institucional y jurídico ambiental. Aún así, éstas denotan haber atendido más a las cuestiones formales involucradas en el diverso abanico de ejes temáticos contenidos en los capítulos de la Agenda, que a sentar las bases para hacer la transición hacia la sustentabilidad.

Las recomendaciones de la CNUMAD fueron un llamado a producir grandes reformas estructurales orientadas a la promoción de la sustentabilidad del proceso de desarrollo tales como, entre otras: satisfacer las necesidades humanas básicas; mejorar la calidad de vida y la calidad del crecimiento económico; atender adecuadamente los problemas demográficos; seleccionar opciones tecnológicas adecuadas; aprovechar, conservar y restaurar los recursos naturales y tender a una distribución mas equitativa de los beneficios que se deriven del desarrollo.

Sin embargo, la implementación de dichas reformas estuvo condicionada por los nuevos paradigmas del mundo globalizado de modo que el país no pudo permanecer aislado de ese proceso. Sobre la base del modelo de desarrollo existente, debió gestarse y adecuarse la política ambiental, quedando fuera de discusión temas tan relevantes como las relaciones entre ajuste, empleo, pobreza, crecimiento económico y medio ambiente.

A pesar de los fuertes condicionantes, la política ambiental tuvo en el nivel interno un importante respaldo en 1994 cuando se reforma la Constitución Nacional. En la misma se introducen artículos que incorporan la preservación del medio ambiente; el concepto de desarrollo sustentable; la participación de la sociedad; el acceso a la justicia; el derecho a la información y a la educación ambiental y el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas.

Tal previsión en el texto constitucional marcó una tendencia positiva en lo que refiere al reconocimiento del conjunto de derechos y obligaciones de los habitantes y de las responsabilidades del Estado en materia ambiental. Dicha normativa, de carácter programática, debía ser traducida en proyectos normativos que permitieran su efectiva operatividad y ejecución.

En tal sentido, desde el Poder Legislativo Nacional surgieron varias iniciativas de normas de presupuestos mínimos, pero hasta la fecha ninguna de éstas han sido aprobadas.

En el año 2000, con el cambio de gestión de gobierno, se inició el proceso de elaboración de la normativa ambiental para dar cumplimiento con el mandato constitucional. A tal efecto, se están realizando en el ámbito del organismo ambiental nacional anteproyectos de leyes de presupuestos mínimos que tienen como objetivo sustancial establecer un umbral mínimo de protección del ambiente y uso sustentable de los recursos naturales, aplicable en todo el territorio de la Nación, atendiendo al conjunto de derechos reconocidos en los artículos 41° y 43 de la Constitución Nacional.

También las constituciones de las provincias reformadas, algunas antes que la nacional, incluyeron cláusulas específicas en materia de preservación del ambiente y desarrollaron normativa sectorial al respecto, que incluso superaron a las iniciativas de la Nación.

Respecto de los logros alcanzados en materia institucional ambiental puede señalarse que la República Argentina tiene una rica historia. En este sentido, en la década del 70° tuvo una actitud pionera en América Latina con la creación de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano en el ámbito nacional.

El proceso militar dismanteló a la entonces Secretaría, interrumpiendo de esta forma el desarrollo de la política llevada a cabo por la misma. Tras largos años de dictadura, en 1983 se restablece la democracia y el país intenta seguir consolidando la institucionalidad ambiental. No obstante, el fortalecimiento de la democracia demandó atender otras prioridades y la política ambiental no estuvo en el eje de las políticas públicas impulsadas durante dicha etapa.

En 1991 se recrea la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano, y la República Argentina comienza a consolidar su política ambiental y su organización institucional, tanto en el ámbito nacional como en el provincial.

En el 2000, la Argentina inicia una nueva etapa en materia de política ambiental en el ámbito nacional, al crear el Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente y, dentro de éste, la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental, como respuesta a la compleja problemática social y ambiental del país.

En lo que refiere al desarrollo institucional de las provincias, debe remarcarse la importante federalización de las cuestiones ambientales y los mecanismos institucionales creados a tal efecto, como el Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA). Este fue concebido como un organismo para generar instancias de construcción de consensos para las políticas ambientales, entre la Nación y las provincias; en él se encuentran

representados todos los organismos provinciales con competencia en materia ambiental.

Asimismo fueron institucionalizados otros organismos que contribuyeron a la federalización de la temática ambiental, más orientados a los aspectos sectoriales de la gestión (pesca, hídricos etc.).

En líneas generales puede señalarse que desde 1992 a la fecha el país ha mejorado sustancialmente la relación con las provincias en cuanto al manejo y gestión coordinada de los recursos naturales y se ha potenciado la implementación de foros de discusión federales.

En el ámbito regional y concomitante a los procesos aludidos, el país inició con el advenimiento de la democracia, un importante acercamiento con algunos países de la región para construir un proceso de integración comercial con miras a gravitar en el comportamiento de los mercados internacionales que le permitiera formular una estrategia de desarrollo.

El 26 de marzo de 1991, el país suscribió el Tratado de Asunción que daba nacimiento al Mercado Común del Sur (MERCOSUR), junto con Brasil, Paraguay y Uruguay. Dentro de éste, la temática ambiental fue incorporada de forma muy genérica en los Considerandos del Tratado.

Su institucionalización se realizó a través de la Reunión Especializada de Medio Ambiente (REMA).

En el año 1995, la temática ambiental fue jerarquizada a partir de que la REMA, se constituyó en Subgrupo de Trabajo N° 6 – Medio Ambiente – MERCOSUR, por Res. N° 38/95 del GMC.

A la fecha la República Argentina ha participado activamente de las reuniones del referido Subgrupo, a través de las diferentes áreas de gobierno, y con la participación de sectores privados y ONGs. El organismo ambiental nacional ha ejercido la Coordinación Nacional tanto de la REMA como del Subgrupo N° 6.

Los logros alcanzados por el Subgrupo son positivos y se describen en el ANEXO D.IV.4. de este Informe.

En el ámbito internacional, desde la CNUMAD a la fecha el país ha tenido una fuerte presencia en los distintos foros llevados a cabo. Se logró reforzar la posición Argentina dentro de la comunidad de naciones, como así también afianzar su rol en la Región de América Latina y el Caribe.

Esta presencia fue traducida en acciones hacia adentro, dado que los compromisos asumidos en el ámbito internacional fueron reflejados en la normativa interna, con la ratificación de importantes AMAs, (ver ítem D.IV.). Ello tiene fuertes repercusiones en la política ambiental del país dado que con la reforma de la Constitución Nacional, los tratados internacionales de naturaleza ambiental ratificados por el Congreso de la Nación tienen jerarquía suprallegal sobre las demás leyes nacionales.

Tal reforma ubica al país dentro de la corriente de naciones más avanzadas en el derecho internacional. Aún así, requiere de un amplio ejercicio de consenso y procesos de consultas en el orden interno, previo a cualquier negociación internacional, toda vez que los compromisos asumidos en ese ámbito, indirectamente condicionan la política y la legislación ambiental nacional.

B. b. Factores que contribuyeron a los logros:

En el período 1991 - 1999 se implementó en la República Argentina un proceso de concentración de responsabilidades políticas y de gestión en materia ambiental en un solo organismo dependiente directamente del PEN. Este, desde la perspectiva del desarrollo institucional ambiental resultaba desde lo formal, ampliamente satisfactorio, poniendo como ejes sustancial de su gestión a la política ambiental internacional.

A partir de 1999, con el cambio de gestión de gobierno, la política ambiental nacional se jerarquiza con la creación del MDS y MA, pero se pierden algunas competencias, las que son incorporadas a otras áreas del gobierno, tal el caso de la APN.

En síntesis, la política ambiental que impulsó el país, en el período examinado en el presente Informe, resultó consistente y coherente con la importancia que en igual período ha correspondido al tema ambiental en el escenario internacional, regional y subregional como una respuesta a las crisis ambientales de escala planetaria como: cambio climático, adelgazamiento de la capa de Ozono, pérdida de diversidad biológica, entre otros, y la correlativa mayor difusión de temas ambientales en los medios masivos de comunicación.

Los factores mencionados han operado reforzando las demandas de la sociedad en los ámbitos local, provincial y nacional, orientadas hacia la creación y desarrollo de formas de producción y consumo menos agresivas en términos ambientales, canalizadas generalmente a través de organizaciones no gubernamentales.

Como resultado de ello, la última década muestra una preocupación creciente de la población por la problemática ambiental, con una mayor conciencia y compromiso de la sociedad alentados, en parte, por los medios de comunicación y la existencia de una mayor literatura específica.

Desde el sector público, algunas de las respuestas se implementaron a través de diversas normativas, preferentemente en las provincias y en los municipios. Estas sin duda constituyeron una interesante plataforma para avanzar en materia de política ambiental.

No obstante ello, será necesario trabajar desde diferentes ámbitos para que el elevado nivel de conciencia ambiental que tienen ciertos sectores de la sociedad, preferentemente las ONGs, también sea orientado hacia la sustentabilidad ambiental, social y económica.

Otro factor de incuestionable gravitación es la vinculación entre comercio y medio ambiente, y las contradicciones que tal vínculo sigue generando. Instalado cada vez con mayor fuerza en el centro del debate internacional, gran parte de los logros en términos de sustentabilidad social, económica y

ambiental, dependerán de cómo se avance en los foros de negociación, multilateral, particularmente en el ámbito de la OMC.

También debe reconocerse que la mayor capacitación alcanzada en estos últimos años, por los cuerpos técnicos integrados al ámbito de las administraciones públicas, en los diversos niveles de gobierno, contribuyó con ciertos logros.

El desarrollo de la tecnología asociada a la información, ha permitido aumentar el conocimiento y hacer disponible la misma en tiempos cada vez más ágiles, siendo una herramienta fundamental para los tomadores de decisión.

Con relación al mismo desarrollo, la incorporación de tecnologías más limpias en ciertos procesos productivos contribuyen, en cierta medida, con algunos de los logros enunciados. Aún así, debe señalarse que estas prácticas sólo son accesibles para las grandes industrias, mientras que para el sector PyMES, resultan todavía muy difíciles de implementar.

Los mecanismos de financiamiento interno e internacional han sido incorporados en este Informe, dentro de las limitaciones y cambios en el rumbo. No obstante, es necesario reconocer que desde la celebración de la CNUMAD, particularmente a partir de 1994, el financiamiento internacional orientado a programas y proyectos de naturaleza ambiental fue más significativo y contribuyó en parte a los logros enunciados en el ítem C, si se compara o se efectúa una mirada retrospectiva a dicha Conferencia.

A lo señalado precedentemente se agregan, como contribución indirecta, las que pudieron derivarse de las obligaciones asociadas a los términos de referencia de los programas o proyectos financiados por organismos multi o bilaterales de crédito. En éstos, se incluyeron cláusulas orientadas a la preservación del ambiente y a la gestión racional de los recursos naturales. Pese a ello, dichas cláusulas y su implementación, han sido objetadas por su carácter meramente formal.

Por último, otro factor que incidió positivamente fue el proceso de reformas del Estado, en lo referente a la descentralización de las decisiones. En este sentido, al fortalecerse el papel de los municipios, se facilitaron ciertos aspectos de la gestión, lo que permitió la puesta en marcha de un conjunto de acciones orientadas a la preservación del ambiente y al uso racional de los recursos naturales.

B. c. Limitaciones:

Tras los efectos del encantamiento producido por el hito que marcó la CNUMAD bajo los postulados del desarrollo sustentable, el país debió asumir que el orden mundial planteaba múltiples obstáculos y desafíos al mismo.

En verdad, la globalización más allá de algunas ventajas que se le pueden adjudicar, ha generado para muchas naciones en desarrollo diferentes obstáculos.

Si bien este Informe no pretende analizarlos en particular, ello no significa desconocer algunos de sus efectos y de cómo éstos han condicionado el desarrollo de la Argentina, acentuando la exclusión social, la pobreza y la inequidad. Bajo tales condiciones, de por sí incompatibles con el desarrollo sustentable, se cercenan las bases de cualquier proceso de transición hacia el mismo.

A pesar de tales condicionantes, la Argentina fue insertándose en el comercio internacional, ajustándose plenamente a las reglas multilaterales. Sin embargo, el uso por parte de algunos países de medidas proteccionistas, subsidios y otros instrumentos de intervención en el mercado, siguen produciendo en el país costos muy altos en términos económicos y de sustentabilidad social y ambiental.

A lo señalado debe sumarse la presión ejercida por algunos países desarrollados que, para fortalecer su hegemonía en el campo científico y tecnológico, generan al país problemas difíciles en el relacionamiento externo. Tal es el caso del régimen de propiedad intelectual, y en el campo del desarrollo biotecnológico; ambas áreas muy sensibles para la Argentina y objeto de presiones cada vez mas fuertes.

Lo expresado, a modo de ejemplo en párrafo precedente, puede adjudicarse en forma directa a la esfera de decisión del país. Pero, es importante tener en cuenta que ninguna nación puede alcanzar los objetivos de un desarrollo sustentable por sí sola y que, en el nivel global, las condiciones indispensables para promover la sustentabilidad del proceso de desarrollo distan bastante aún de ser las ideales y necesarias.

Muy por el contrario, subsisten y se han acentuado las disparidades entre las naciones ricas y pobres, y dentro de las naciones, se han agravado la pobreza, el hambre, las enfermedades, el analfabetismo y se continúan degradando los ecosistemas de los que depende el bienestar del hombre.

En la práctica, se ha avanzado poco y nada en consolidar esa asociación mundial para un desarrollo sustentable que se acordó como indispensable en 1992, durante la CNUMAD, donde también las naciones reconocieron un principio básico: frente al nivel de degradación del ambiente mundial, los Estados tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas.

La pregunta que surge entonces es: ¿cómo puede un país en desarrollo, por sí solo, avanzar en la promoción de la sustentabilidad, sin que se haya promovido un verdadero debate y una revisión profunda sobre los reales alcances del vapuleado concepto que engloba el desarrollo sustentable?.

Dentro de tal contexto, las limitaciones y los obstáculos internos y externos para llevar adelante los “objetivos” del desarrollo sustentable, tal como hoy se presentan, son de gran magnitud y diversidad tal como se expresa, en el ítem C., respecto de cada sección de la Agenda XXI.

En el orden interno, la tendencia estaría indicando que pueden llegar a aumentar si no se los atiende con políticas activas que incorporen efectivamente la dimensión de la sustentabilidad ambiental, social y económica dentro de todas las áreas de gobierno, en particular en las de economía.

A su vez, tal falta de inserción real de la temática ambiental en las políticas públicas, acentúa las dificultades de articulación y coordinación en el nivel interinstitucional e interjurisdiccional.

A lo expresado en el párrafo precedente, debe sumarse la falta de financiamiento adecuado para llevar a cabo políticas de desarrollo sustentable en los diferentes niveles de gobierno. Esto se traduce fundamentalmente en partidas presupuestarias muy bajas para los organismos públicos responsables primarios en materia de sustentabilidad ambiental y social.

A su vez, como los índices de desempleo, pobreza y exclusión social aumentan, las políticas públicas en su lucha por atender este fenómeno, a más de quitar financiamiento al sector, recurren en diversas ocasiones a prácticas insustentables.

A lo dicho debe sumarse que en muchos casos, y como consecuencia de los efectos que derivan de lo anterior, se recurre al crédito, con lo cual el pago de los servicios de la deuda externa aumenta, produciendo impactos diversos en la economía del país.

Algunos de esos impactos están íntimamente vinculados a la materia ambiental y se reflejan en las regiones del país, las cuales bajo ciertas circunstancias se ven obligadas a la sobreexplotación de sus recursos naturales como es el caso de los bosques y la pesca.

En ese mismo aspecto, tierras ecológicamente frágiles no apropiadas para la agricultura son sometidas a cultivos y sobrepastoreo intensivo, favoreciendo la erosión de los suelos, disminuyendo la productividad y provocando desertificación.

Lo expresado precedentemente a su vez genera un círculo vicioso que aumenta la exclusión y la pobreza, dado que muchos pobladores de las áreas rurales o semi rurales, ante ecosistemas altamente deteriorados, migran hacia los principales conglomerados urbanos. En estos ámbitos, el hacinamiento, la falta de vivienda, de educación, de servicios ambientales básicos como agua potable, electricidad y recolección de basura, crean condiciones favorables para las enfermedades y hacen cada vez mas inviable construir el desarrollo sustentable.

Otras limitaciones fundamentales a señalar, dada la economía de mercado en que el país esta inserto, son las practicas distorsionantes del comercio que aplican algunos países, preferentemente al sector agrícola. Estas producen repercusiones diversas que impactan también sobre el medio ambiente y los recursos naturales.

Dichas prácticas, vía barreras paraarancelarias, subsidios a los insumos (fertilizantes, herbicidas, agua para riego etc.), al ser volcadas sobre el sector agrícola tienen un claro efecto distorsionante sobre los precios internacionales.

Si la escasez relativa de un determinado producto o factor es ocultada, se impide conocer la capacidad del sistema de mantener una determinada producción a lo largo del tiempo, lo que hace que la producción agrícola se haga de forma insustentable.

A lo mencionado en párrafo precedente, debe agregarse que para que la producción agrícola sea sustentable también los precios del producto deben reflejar las

externalidades ambientales generadas durante su producción, distribución y consumo y asumidas por quienes las producen.

Como la Argentina participa activamente en el mercado agrícola, estas prácticas, al distorsionar los precios reales, colocan al país en condiciones desventajosas, acentuando sus dificultades y tornando ilusorio el desarrollo sustentable.

Por último, debe tenerse en cuenta que los tiempos del desarrollo sustentable comprenden lapsos que superan los períodos de gestión de gobierno electivos, lo cual muchas veces atenta contra el interés de las autoridades políticas, que deben atender y dar respuestas a los problemas inmediatos. Ante tal desfase, si no hay suficientes estímulos, *lobbys* eficientes, buena información y presión social, el tema resulta totalmente postergable.

B.d. El planteamiento estratégico adoptado a favor del desarrollo sustentable:

En términos generales, la sustentabilidad implica el cumplimiento de ciertas condiciones básicas esenciales, ya descritas, enunciadas y reorientadas en innumerables documentos *pre y post* Río.

Si se toman en cuenta las condiciones básicas que debe reunir la sustentabilidad y se analiza detalladamente el período transcurrido desde la CNUMAD hasta el presente, puede decirse que Argentina ha establecido una estrategia tendiente a la protección ambiental, más que un planteamiento estratégico a favor del desarrollo sustentable.

Esta distinción no es meramente semántica, sino que responde a una realidad. En efecto, el planteamiento estratégico se orientó y limitó al objetivo de atenuar algunos de los impactos ambientales originados en el proceso de desarrollo, más que a sentar las bases que posibilitarían un radical cambio en el actual modelo de desarrollo, caracterizado por su insustentabilidad.

Fuertemente inmerso en el paradigma imperante, el país dio entonces los primeros pasos en materia ambiental, adoptando un planteamiento estratégico a favor de la protección ambiental, tal como surge del presente Informe Nacional, pero muy alejado aún de la meta deseable para toda la humanidad, que implica el desarrollo sustentable.

La visión, predominantemente centrada en la protección ambiental, tomó como imperativo dominante a la aparente contradicción entre desarrollo económico y calidad ambiental y a partir de ello, definió cuáles eran las principales amenazas ambientales: los impactos de las diferentes formas de contaminación sobre la salud humana y las pérdidas registradas en la diversidad biológica.

Se adoptó en consecuencia una actitud curativa/defensiva, mediante diferentes instrumentos de gestión, intentando permanentemente legalizar el cuidado del ambiente como externalidad económica y se transfirió a toda la sociedad, la carga de los costos de remediación ambiental, lo que en la práctica ha impedido internalizar las externalidades o costos ambientales entre los verdaderos responsables de dichos costos.

En el campo teórico, las tecnologías dominantes se inclinaron hacia los estudios de impacto ambiental, la mitigación de eventuales impactos y las técnicas de remediación. En este aspecto, las estrategias se apoyaron preferentemente en mecanismos regulatorios y algunos mecanismos de mercado muy indefinidos y no integrados a una planificación estratégica de desarrollo sustentable.

Dentro del esquema de planeamiento estratégico al que se alude en párrafo precedente, la Argentina logró cambios en su política ambiental como ya se hizo referencia en el Item B.a.

Así por ejemplo en el marco de las Bases de la Política Ambiental para la República Argentina, llevado a cabo a través del Programa Desarrollo Institucional Ambiental (PRODIA) aprobado por Resolución N° 311/99, se definieron dos objetivos de carácter general.

El primero fue establecer un proceso de planificación de la gestión ambiental que lleve progresivamente a la participación interactiva de todos los involucrados para lograr su perfeccionamiento.

El segundo propuso desarrollar acciones para solucionar los problemas críticos y formuló los objetivos y acciones sectoriales de la política ambiental para las distintas áreas de acción y otras acciones transversales para la totalidad de las áreas temáticas.

Recientemente, la creciente captación en el ámbito del máximo organismo ambiental nacional de un enfoque comprensivo de los problemas ambientales y sociales más relevantes, aparece como una herramienta propicia para la generación de una estrategia orientada a la sustentabilidad.

De todos modos, falta integrar una visión realmente orientada a la promoción de la sustentabilidad del proceso de desarrollo desde otras áreas de gobierno, lo cual implica un fuerte condicionante para llevar a la práctica un planeamiento estratégico nacional de desarrollo sustentable.

Por otra parte, debe señalarse que no hubo cambios significativos en los mecanismos de toma de decisiones, a partir de la planificación estratégica orientada a la protección del ambiente. No obstante, para algunos temas puntuales que hacen a la preservación del ambiente y de los recursos naturales, se han establecido mecanismos de búsqueda de consensos para la toma de decisiones, implementadas a través de audiencias públicas o mecanismos equivalentes de participación ciudadana, preferentemente orientadas a las ONGs.

Se registraron cambios en la administración de los recursos naturales y el medio ambiente, a través del deslinde de competencias ambientales previstas en la reforma constitucional, respecto de las que corresponden al Gobierno Nacional y a los Gobiernos Provinciales, en el marco de la estructura federal. También se registraron algunos avances en materia de descentralización en la gestión de los recursos naturales, con un notable y creciente poder decisorio por parte de los gobiernos provinciales y municipales.

Además se ha dado un alto nivel de descentralización y transferencia al sector privado en lo referente a la gestión y prestación de servicios e

infraestructura básica ambiental (agua potable, saneamiento, electricidad, recolección de residuos etc.).

Respecto del financiamiento para el desarrollo sustentable, no se registraron cambios significativos al influjo de la política ambiental y de promoción de la sustentabilidad. El mismo siguió siendo escaso, inconstante y fundamentalmente basado en fondos públicos. Ello no significa desconocer que para algunos temas sectoriales se haya obtenido financiamiento privado, como por ejemplo el pago al Estado de cánones por parte de los concesionarios de servicio de saneamiento que cobran a los usuarios tarifas para el abastecimiento de agua potable. Pero algunas tendencias aisladas no son suficientes para medir un cambio en el rumbo del financiamiento desde el sector público al privado.

B. e. Proceso de desarrollo de la estrategia:

Con el objetivo de diseñar y ejecutar políticas y acciones destinadas específicamente a la promoción de la sustentabilidad del proceso de desarrollo, se creó en 1998 la DNDS, de la ex SRNyDS.

A fin de llevar adelante los objetivos de la aludida Dirección, se impulsó el proceso tendiente a establecer la Estrategia Nacional de Desarrollo Sustentable; para lo cual se trabajó en el diseño del mecanismo de participación, indispensable para la formulación de la referida estrategia y en la elaboración de la documentación base para la discusión (ver ítem D.II.7. "Documento Base para la Estrategia Nacional de Desarrollo Sustentable").

En razón de las etapas previas en que se encuentra el proceso antes descripto, no resulta posible dar respuesta en relación a quiénes participaron y cómo se organizó el proceso consultivo entre sectores; las medidas institucionales para el desarrollo de la estrategia nacional y las medidas para garantizar su continuidad.

Respecto de las repercusiones del planteamiento estratégico adoptado y los resultados tangibles del mismo, con sus evoluciones y retrocesos, sólo se pueden percibir en el campo institucional y normativo.

Señalar quiénes se beneficiaron del mismo, resulta una tarea bastante difícil de evaluar, debido al tan limitado planteamiento estratégico. Lo que no resulta difícil es constatar que en ningún caso, los posibles beneficios hayan alcanzado a todos los integrantes de la sociedad, que es una de las condiciones básicas del desarrollo sustentable.

B.f. Metas y Desafíos:

En materia de políticas públicas que tiendan al desarrollo sustentable los desafíos para la República Argentina, en los diferentes niveles de gobierno, deberían orientarse a:

- Promover urgentemente un debate profundo en toda la sociedad sobre el desarrollo sustentable deseable y alcanzable y, de ser necesario, revisar las contradicciones que el mismo genera;

- desarrollar una alianza estratégica entre sectores públicos, privados y ONGs ambientalistas, con los sectores económicos proteccionistas;
- generar instrumentos normativos que reúnan condiciones efectivas de aplicabilidad desde el punto de vista de la técnica legislativa empleada y de los instrumentos de gestión previstos para su implementación, compatibles con el desarrollo sustentable;
- fortalecer la presencia del sector ambiental en los foros multilaterales vinculados al comercio y viceversa;
- promover la exportación de productos que permitan ventajas comparativas como es el de los alimentos (la demanda de estos productos se estima que aumentara considerablemente y en los próximos años lleguen a representar un 10 % de la demanda internacional);
- sostener ciertos esquemas vigentes, entre ellos el libre comercio internacional, reorientando algunos de los efectos perniciosos de su rumbo para avanzar hacia la sustentabilidad social, ambiental y económica;
- generar empleo, disminuir los índices de pobreza y exclusión social;
- fortalecer una dirigencia política para que oriente su gestión hacia políticas activas que prioricen la calidad del crecimiento y no sólo los aspectos cuantitativo del mismo;
- eliminar la corrupción y el favoritismo en el sector público en todos los niveles de gobierno;
- apoyar y generar políticas activas que permitan revertir las tendencias inequitativas de distribución de la renta;

En materia de políticas públicas orientadas específicamente a la protección del ambiente y a los recursos naturales, los desafíos para la República Argentina, en los diferentes niveles de gobierno deberían orientarse a:

- Elaborar la normativa ambiental de presupuestos mínimos y lograr su efectiva implementación. A tal efecto antes del 2002, la SDS y PA prevé presentar al Poder Ejecutivo Nacional, tres anteproyectos de normas de presupuestos mínimos. Para su elaboración se ha previsto un amplio proceso de consulta con las provincias y con los demás sectores involucrados;
- redoblar los esfuerzos en el sector público para aumentar su capacidad de control, invirtiendo en su capacitación, y en el financiamiento de las actividades de fiscalización priorizadas por los organismos ambientales. En este sentido, la SDS y PA ha iniciado gestiones para aumentar las acciones en materia de control de la contaminación, como puede observarse de la lectura del Item D.II.10;
- crear mecanismos institucionales que permitan una efectiva participación democrática del mayor número de sectores de la sociedad. En tal sentido, el organismo ambiental nacional ha previsto reanudar en el presente año el proceso de elaboración de

la Estrategia Nacional de Desarrollo Sustentable, con participación del COFEMA y de las ONGs. También para avanzar en esta meta se siguen fortaleciendo los espacios de participación tal como surge del Item C.III.;

- diseñar una combinación adecuada de instrumentos jurídicos y económicos que le permitan al sector privado asumir los costos del efectivo cumplimiento de la normativa ambiental, en particular generar a la brevedad un régimen de incentivos económicos para las PyMES a fin de que puedan invertir en tecnologías más limpias. En el presente año, la SDS y PA, ha iniciado gestiones para iniciar experiencias piloto respecto de esta meta, tal como se desprende de las actividades descritas en los Items D.II. y D.IV.;

- fortalecer al organismo ambiental nacional y a los organismos provinciales y crear mecanismos institucionales que permitan la efectiva articulación de los mismos, con las demás áreas de gobierno. En este sentido, se encuentra a la firma el proyecto de Decreto que modifica el actual Consejo Nacional para el Desarrollo Sustentable (CONADESU). Las modificaciones introducidas permitirán el efectivo funcionamiento de dicho Consejo.

- por otra parte el reciente Decreto N° 148/01, transfiere a la SDS y PA del MDS y MA, las competencias en materia de control de la contaminación del recurso hídrico, lo que marca un hito indiscutible en materia de fortalecimiento del organismo ambiental nacional;

- incluir en la política ambiental, instrumentos de gestión implementados a través de programas y proyectos, que permitan generar empleo. Actualmente se encuentra a la firma un proyecto de resolución en el ámbito de la SDS y PA, creando un programa para dar cumplimiento con esta meta prioritaria. También es importante señalar los planes y programas que se están implementando desde el MDS y MA (ver Sección C.I.) con el objeto de cumplir con esta meta;

- mantener abiertas las instancias de negociación multilateral para evitar que las presiones por imponer estándares de protección ambiental de los países desarrollados se canalicen bilateralmente. Para ello el país, a través del MRECI y C, viene realizando ingentes esfuerzos para mantener su presencia en los foros multilaterales a pesar de los fuertes recortes presupuestarios;

- apoyar al fortalecimiento institucional del MERCOSUR y redoblar los esfuerzos desde la Coordinación Nacional del SGT N° 6 Medio Ambiente, para lograr un proceso de integración regional que atienda a la sustentabilidad ambiental, social y económica. En tal sentido, se encuentran muy avanzadas las negociaciones de un proyecto de Protocolo sobre Medio Ambiente del MERCOSUR. Se espera que antes de 2001, dicho instrumento sea aprobado lo que permitirá avanzar en el cumplimiento de esta meta.

B. g. Correcciones en el rumbo:

B. g.1. En el orden interno:

Las correcciones en el rumbo que el país debería llevar adelante para avanzar hacia la sustentabilidad ambiental, social y económica, están vinculadas estrechamente con los desafíos que ya fueron expuestos.

A su vez, como están fuertemente condicionadas por los procesos internacionales en curso y el modelo imperante, deben ser evaluadas dentro de las limitaciones ya expresadas.

En razón de lo expresado y sobre la base de tal evaluación se sugiere:

- Disminuir los efectos de los programas de ajuste estructural que agravan los problemas de pobreza, desempleo, exclusión social e insustentabilidad del desarrollo, corrigiendo el rumbo de los mismos;

- crear las bases de una agenda de desarrollo sustentable nacional que efectivamente permita alcanzar un desarrollo justo y equitativo para todos y para que sea definitivamente sustentable;

- diseñar mecanismos y fortalecer las instancias existentes de articulación y dialogo entre las autoridades ambientales, de finanzas, de industria, de comercio, de agricultura y de los sectores privados productivos de mayor influencia, para trabajar sobre las complementariedades y contraposiciones entre comercio y medio ambiente, en los diferentes niveles de gobierno;

- Destinar y reorientar los esfuerzos técnicos y financieros, para el desarrollo de experiencias piloto, que permitan la aplicación de instrumentos económicos y su utilización conjunta con otras herramientas de política y gestión ambiental, orientadas preferentemente a las PyMES;

- Reorientar el financiamiento en materia de infraestructura, disminuyendo los impactos de las grandes obras, aportando una mejor calidad de vida del ambiente urbano y rural y haciendo disponibles los servicios ambientales básicos (agua potable, saneamiento básico, electricidad, recolección de basura etc.);

- Disminuir la vulnerabilidad de los asentamientos humanos y de las actividades productivas, ante desastres causados por fenómenos naturales;

- Sumar los esfuerzos y las acciones que realizan las diferentes áreas de la administración pública en los distintos niveles de gobierno respecto de los compromisos internacionales (AMAs) asumidos por el país, coordinando su seguimiento e identificando las sinergias de las acciones a implementar, para evitar duplicar esfuerzos y ahorrar recursos financieros y humanos;

- Adoptar el mismo criterio señalado en párrafo precedente respecto de las acciones previstas en los planes, programa y proyectos orientados a la ejecución de políticas sociales, ambientales, económicas, educativas y de salud en los diferentes niveles de gobierno;

B.g.2. En el orden regional:

En este ámbito, los vínculos existentes entre las correcciones en el rumbo y las limitaciones que pueden condicionar dicho cambio, son más complejos. Esto es así, porque a los condicionantes internos, deben sumárseles las diferencias sociales, culturales, económicas y ambientales entre los países de la región.

En razón de lo expresado, las correcciones propuestas reflejan un conjunto de aspiraciones que, de acuerdo con los escenarios complejos de negociación en que se inserten, no necesariamente representen en su conjunto, las necesidades de la región. Sobre la base de tal distinción se sugiere:

- Considerar las necesidades especiales y la vulnerabilidad de ciertos Estados de la Región. De ser posible, apoyarlos en los foros internacionales para que tales necesidades sean incluidas y expresadas en las agendas de trabajo y en los programas de acción internacional;

- Corregir el rumbo del financiamiento internacional, orientándolo a programas o proyectos, que permitan ejecutar acciones concretas para solucionar los principales problemas nacionales y regionales tales como: servicios ambientales básicos; erradicación de la pobreza; mejora de la calidad de vida en los grandes conglomerados urbanos; educación; mitigación, respuesta y reconstrucción posterior ante desastres causados por fenómenos naturales y algunos de origen antrópicos, evitando novedosas formas de condicionamiento; este cambio es válido para ser considerado en el orden interno;

- Redoblar los esfuerzos en la Región para evitar que el rumbo del financiamiento se focalice en la sinergia entre los AMAs y otros acuerdos multilaterales, y pueda indirectamente diluir el efectivo financiamiento del desarrollo sustentable;

- Fortalecer al Foro de Ministros de la Región e incrementar los contactos para lograr una mejor coordinación regional y para consensuar posiciones en forma previa a los foros internacionales sobre ambiente y desarrollo sustentable, respetando las particularidades e intereses de cada país;

- Conseguir mayor financiamiento para los organismos ambientales de la región, de forma tal que les permita alcanzar una representación democrática de los intereses de todos los países de la región, en los foros internacionales ambientales;

- Intensificar la cooperación horizontal entre los países de la región, creando una base de datos para el registro de expertos regionales que puedan brindar asistencia técnica en la Región;

- Desarrollar nuevas capacidades orientadas a una gestión ambiental que permita el aumento de la productividad y la competitividad con calidad, la generación de empleo para los pobladores locales y la erradicación gradual de la pobreza;

B.g.3. En el orden internacional:

El costo de la transición hacia el desarrollo sustentable es una responsabilidad que debe ser asumida por todos los Estados. Sin embargo, éstas deben ser diferenciadas, tal como surge de los principios enunciados en la CNUMAD.

A pesar de lo expresado la realidad esta denotando que tal compromiso sigue incumpléndose y en tal sentido se sugiere:

- Intensificar los esfuerzos en materia de derecho internacional para crear un régimen de responsabilidad internacional que permita hacer efectivos los compromisos asumidos por los países desarrollados, en el seno del sistema de las Naciones Unidas;

- INTRODUCIR DENTRO DEL REGIMEN DE RESPONSABILIDAD SEÑALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, MECANISMOS DE REPARACION DE DAÑOS AMBIENTALES INTERNACIONALES CAUSADOS POR DESASTRES DE ORIGEN ANTROPICO Y MECANISMOS QUE PERMITAN LA EFECTIVA REPARACION DE LOS DAÑOS A LAS VICTIMAS;

- REDOBLAR LOS ESFUERZOS PARA QUE LA SECRETARIA DE LOS AMAS PUEDA LOGRAR LA COORDINACION Y EL SEGUIMIENTO DE LAS DECISIONES DE LAS COP Y SE IDENTIFIQUEN LAS SINERGIAS DE LOS AMAS, PERMITIENDO MAXIMIZAR LOS ESFUERZOS Y AHORRAR RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS;

- FOMENTAR EN EL AMBITO DE LAS CONFERENCIAS DE LA PARTES DE LOS AMAS LA CREACION DE MECANISMOS DE COORDINACION REGIONAL A TRAVES DE FOROS DE DISCUSION QUE GARANTICEN LA MAYOR REPRESENTACION DE LOS ORGANISMOS AMBIENTALES DE LOS PAISES EN DESARROLLO;

- CREAR, CON LA MAYOR BREVEDAD, ESPACIOS DE ENCUENTRO QUE PROMUEVAN EL DIALOGO Y LA REFLEXION CRITICA ENTRE LOS TOMADORES DE DECISION DEL MAS ALTO NIVEL Y EXPERTOS EN MATERIA DE COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE, PARA AVANZAR EN EL TEMA DE LAS COMPLEMENTARIEDADES Y CONTRAPOSICIONES;

- DUPLICAR LOS ESFUERZOS EN MATERIA DE COOPERACION HORIZONTAL PARA AVANZAR EN EL TRATAMIENTO E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS ECONOMICOS Y DE REGULACION DIRECTA, COMPATIBLES CON LAS NECESIDADES DE LOS PAISES EN DESARROLLO, ATENDIENDO LAS OPORTUNIDADES, DESAFIOS Y OBSTACULOS QUE SE PRESENTAN PARA SU DISEÑO Y APLICACION;

- PROVEER URGENTEMENTE DE MAYOR FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL PARA LA EFECTIVA PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD EN MATERIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE, EN EL NIVEL REGIONAL E INTERNACIONAL;

- LOGRAR EL URGENTE DISEÑO DE ESTRATEGIAS QUE PERMITAN LA EVALUACION ECONOMICA DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA REGION, Y LA IDENTIFICACION DE INSTRUMENTOS QUE HAGAN POSIBLE EL PAGO POR LOS BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES;

- REORIENTAR EL APOYO DADO A PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES, HACIA OTROS QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES, EN FUNCION DE LAS NECESIDADES

PRIORIZADAS DENTRO DE LAS POLITICAS, PLANES Y ESTRATEGIAS NACIONALES;

- ENFATIZAR SOBRE LA NECESIDAD DE MANTENER EN LA AGENDA INTERNACIONAL EL TEMA DE LA DEUDA EXTERNA COMO OBSTACULO AL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS PAISES EN DESARROLLO.

C. Evaluación del Cumplimiento de cada una de las Secciones de la Agenda XXI

C.I. SECCION I: Dimensiones Económicas y Sociales

C. I.1. Lucha Contra la Pobreza

C. I.1.a. Contexto económico - cuadro social:

Los graves episodios hiperinflacionarios de 1989 y 1990 señalan la crisis definitiva de un modelo productivo y de una pauta de relaciones entre Estado y mercado predominantes en el país desde hacía cinco décadas. Desde el comienzo de la década del noventa, la Argentina encara un proceso de reformas esencialmente dirigidas a atacar los principales problemas económicos que la aquejaban: el estancamiento productivo y la elevada inflación.

La reforma estructural emprendida, junto con medidas de estabilización, posibilitó logros en materia de crecimiento de la productividad, mejora de las cuentas fiscales y adecuación del sistema financiero. El rápido abatimiento de la inflación logrado a partir de 1991 tuvo, en un principio, un impacto positivo sobre el mercado de trabajo: los sueldos y salarios aumentaron en términos reales como consecuencia de la rápida desaceleración de los precios y el crecimiento de la demanda agregada.

Sin embargo, diez años después la situación social de la Argentina presenta un cuadro de gravedad inédito. La promesa implícita en el paradigma que guió las reformas económicas de estos años, y explícita en el discurso político que las sostuvo, no se cumplió: la liberalización de los mercados y el crecimiento económico que la acompañó no se expresaron en una mejor distribución de la riqueza ni en una disminución de los índices de pobreza. Por el contrario, el país entra al nuevo siglo con más desigualdad y con más pobreza. Los datos del Gran Buenos Aires grafican con elocuencia la situación: en 1987, los habitantes de esa región que vivían bajo la línea de pobreza eran el 15% del total; en octubre de 1999 eran el 26,7%. La población bajo la línea de indigencia pasó en igual período del 2,6% al 6,7%.

Así como la década del '80 se inscribe en la memoria colectiva de los argentinos como el tiempo de la recuperación de las instituciones democráticas y las libertades individuales en el contexto de una creciente inestabilidad económica con graves consecuencias sociales, la década del '90 puede pensarse desde el logro de la estabilidad económica y la apertura al mundo en un cuadro de aguda desigualdad y carencias sociales crecientes.

El aumento de la desigualdad en la distribución de los ingresos familiares constituyó uno de los rasgos característicos de los noventa. Durante 1991 y 1992, el crecimiento de la desocupación y la estabilización de los ingresos personales provocaron el señalado empeoramiento distributivo.

Hacia principios de los noventa, el ingreso per cápita medio del 10% de hogares más ricos era aproximadamente 20 veces el correspondiente al 10%

de hogares más pobres; esa relación pasó a ser de 30 veces hacia el final del decenio. Durante 1991 y 1992 la disminución de la dispersión de las remuneraciones de los ocupados llevó a una reducción de los muy elevados niveles de desigualdad de fines de los ochenta. Sin embargo, el crecimiento de la desocupación y la estabilización de aquel movimiento de los ingresos personales relativos provocaron el señalado empeoramiento distributivo.

A partir de 1993 y 1994 se mantuvieron los registros de pobreza alcanzados al inicio del plan anti-inflacionario como consecuencia de dos factores de signos contrarios. Por un lado, el incremento del desempleo tendió a aumentar la desigualdad de los ingresos familiares y, con ello, la pobreza. Pero por el otro lado, el crecimiento de la proporción de personas que se volcaron al mercado laboral, en particular, entre los miembros de hogares de menores ingresos, compensó al anterior.

En 1995, aún con niveles de inflación similares a los del año anterior, la pobreza aumentó, situación que no es de extrañar en el medio de la importante recesión que afectó al país. La crisis financiera provocó una reducción en la demanda agregada que se tradujo en una caída del empleo y de los salarios. La nueva desmejora que se registró en la distribución de los ingresos reforzó el crecimiento de la pobreza. La mayor desigualdad resultó ahora producto tanto de una mayor dispersión de las remuneraciones como de la elevada desocupación.

Pero este ascenso de la proporción de hogares con ingresos insuficientes no fue un fenómeno transitorio, producto de la crisis que enfrentó el país; la pobreza continuó elevándose. Ello se debió a diversos factores; principalmente porque a pesar de cierto alivio en el desempleo durante 1997 y 98 los salarios no aumentaron y la brecha de ingresos se incrementó. Finalmente, el nuevo episodio recesivo iniciado a fines de 1998, ligado también a las restricciones a la entrada de capitales (y también de acceso a los mercado de bienes para las exportaciones) agudizó los procesos anteriores al disminuir los requerimientos de mano de obra y deprimir las remuneraciones.

A los efectos que ejerce el elevado desempleo deben agregarse aquellos producidos por creciente presencia de empleos no registrados o "en negro". Este fenómeno implica que una parte cada vez mayor de los ocupados está sujeta a una intensa intermitencia laboral y, por tanto, a una marcada variabilidad de sus ingresos. Esto los torna vulnerables, pues carecen de margen para ahorrar durante los momentos en los que trabajan. A ello se añade que tampoco cuentan con los beneficios de la seguridad social.

En consecuencia se va perfilando una realidad social caracterizada por niveles de pobreza y de desigualdad difíciles de reducir. En relación a esta última es preciso remarcar que pese al lento crecimiento de la desigualdad en la distribución de los ingresos en los últimos años su magnitud, extremadamente elevada, supera los muy elevados índices de fines de los ochenta. Por diversas razones, ella ha venido empeorando desde mediados de los setenta, entonces (en esa década) por la aplicación de programas de ajuste y políticas de represión salarial, luego (en los ochenta) por el estancamiento y la marcada inestabilidad macroeconómica y más recientemente (en los

noventa), por el aumento del desempleo, la no mejora de las remuneraciones reales, y el aumento de la recesión.

Lo sucedido con los ingresos, también se reflejó claramente en comportamientos insatisfactorios en varias áreas de interés social, tales como la mortalidad infantil, el grado de asistencia escolar o calidad del parque de viviendas, variables en las cuales se registró una cierta inercia, así como también en otras dimensiones que, lamentablemente, no siempre pueden ser evaluadas adecuadamente, como la calidad educativa o de la atención sanitaria.

C.I.1.b. Acciones y Desafíos:

- La actual gestión de gobierno decidió elevar la materia ambiental a nivel de Ministerio, a través de la Ley N° 22.520, modificada por las Leyes Nros. 24.190 y 25.233. Con la nueva estructura organizativa nacional, se pretende responder y dar respuestas a la compleja problemática social y ambiental de nuestro país. El desafío propuesto fue articular en una misma unidad ministerial, diversas áreas de gobierno tales como deporte, medio ambiente, desarrollo social, tercera edad, juventud, indígenas, entendiendo que la lucha contra la exclusión debía darse en varios frentes simultáneamente.

- El Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente (MDSyMA) diseñó un nuevo programa de combate a la pobreza denominado "Solidaridad". El programa propone coordinar acciones entre diversas áreas del Gobierno y el MDSyMA.

- El MDS y MA esta implementando acciones en el campo de la política social alimentaria, entre las que cabe mencionar la concreción del proceso de unificación de programas alimentarios dentro del Sistema Alimentario Federal, con el fin de optimizar los recursos disponibles y aportar significativamente a la satisfacción de las necesidades nutricionales del conjunto de las familias en situación de vulnerabilidad.

- El MDSyMA desarrolla el Programa de Provisión de Agua Potable, Ayuda Social y Saneamiento (PROPASA) que tiene por objetivo la asistencia social a poblaciones de alto índice de NBI, mediante la provisión de agua potable y saneamiento básico produciendo el mejoramiento de sus condiciones de vida y de su medio ambiente.

C.I.2. Protección y Fomento de la Salud Humana:

La legislación de salud y ambiente ha girado en torno a dos ejes principales: la necesidad de contar con normas claras para asegurar la calidad de los bienes y servicios de salud y definir mecanismos de financiamiento para ampliar el acceso, y el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por los países a través de su participación en grupos de integración y tratados de libre comercio. En ambas dimensiones, la orientación rectora del Estado nacional estuvo dada por la generación de mecanismos para la acción concertada entre el sector público y la sociedad civil.

La importancia reconocida al derecho a la salud y a un medio ambiente saludable, en la reforma de 1994 de la Constitución Nacional, constituye una base sólida al ejercicio de este derecho y a la creación de instancias para su defensa.

Entre los principales factores que deben contribuir a la revitalización de la legislación sobre salud y ambiente es dable señalar el fortalecimiento de la función regulatoria de las áreas de salud en los diferentes niveles de gobierno; como así también, la promoción del desarrollo de canales para la cooperación entre el sector público, el privado y la participación de la sociedad civil en la demanda de sus derechos.

El Plan de Acción acordado en Santa Cruz de la Sierra, el 7 de diciembre de 1996, por los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas, tuvo por objeto avanzar en la implementación de las decisiones y compromisos contemplados en la Declaración de Río y en la Agenda XXI. En dicho Plan se identificaron los desafíos en las áreas de salud y educación; agricultura y silvicultura sostenibles; ciudades y comunidades sostenibles; recursos hídricos y áreas costeras y energía y minerales. Se analizaron también los aspectos institucionales, de financiamiento, de tecnología y cooperación.

Los gobiernos acordaron 65 iniciativas para responder a los principales desafíos que habían sido identificados para alcanzar los propósitos del desarrollo sostenible.

En tal sentido la presente evaluación se efectúa sobre la base del Plan de Acción aludido, contemplando las actividades en las que el MS, ha tenido intervención durante el período cubierto por el presente Informe, en razón de sus competencias primarias.

C.I.2. a. Logros:

- Adhesión a la estrategia denominada Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), que fue adoptada para disminuir la mortalidad y morbilidad en la infancia y mejorar su condición de salud. Se ha implementado en los servicios de salud para la comunidad, entre otros: mecanismos de evaluación de resultados; de evaluación del impacto de su aplicación; mejor conocimiento y práctica de las familias para el cuidado del niño; conocimiento de signos de alarma para la consulta precoz y cumplimiento de las indicaciones de tratamiento;

- Constitución, en 1997, de la Comisión Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil en la que participan representantes de diversas áreas estatales incluyendo las de salud;

- Provisión de 160 abastos de agua potable a través de la instalación de igual número de plantas potabilizadoras compactas. Se ha instalado un programa de reducción domiciliaria de arsénico natural en agua de bebida para poblaciones rurales dispersas, en las cuales se estima que existen 2.000.000 de habitantes expuestos;

- Fortalecimiento y desarrollo de la Red de Laboratorios de Salud Ambiental (calidad de agua y calidad de aire); capacitación de recursos humanos; elaboración de normas sobre diagnóstico y tratamiento (Dermatología y Oftalmología vs. Capa de Ozono y Salud) y Procedimientos de Prevención en Patologías (Parasitología vs. Efluentes Domésticos) asociadas a problemas ambientales en el marco del Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica;

- Participación en diversas comisiones referidas a calidad de aire, accidentes, residuos hospitalarios, seguridad en juguetes y otras;

- Adhesión a las estrategias promovidas por la OPS en inmunización. En tal sentido se fomenta la inversión de recursos nacionales, tanto financieros como humanos, para el desarrollo de una infraestructura nacional que apoye la ejecución de programas de vacunación y vigilancia, empleo de vacunas de buena calidad en los programas de inmunización y, disponibilidad de una infraestructura de laboratorio y logística adecuada. Otras prioridades en el área de inmunización están relacionadas con el mantenimiento de la erradicación de la poliomielitis, el control de la rubéola y la prevención del síndrome de rubéola congénita, y de la hepatitis B;

- Fortalecimiento del sistema nacional de vigilancia epidemiológica (SINAVE) para generar información sobre la carga de morbilidad de las enfermedades respiratorias prevenibles por vacunación, las meningitis (neumocócica y meningocócica) y la infección por rotavirus;

En estos aspectos debe destacarse que la cultura de prevención, promovida por el éxito de los programas nacionales de vacunación en las Américas, ha estimulado la introducción de vacunas nuevas en el programa de vacunación de rutina. Los aspectos más importantes de la introducción sostenible de estas vacunas han sido la creación de una infraestructura y estrategias que los países y la comunidad internacional deben seguir para reducir el intervalo entre la investigación y amplia distribución, así como el uso rentable de las vacunas. Se ha dado prioridad a la inclusión de las vacunas que han estado disponibles durante los últimos 15 años, entre ellas las vacunas triple viral, contra la fiebre amarilla y contra la hepatitis B, así como vacunas más nuevas, como la vacuna contra *Haemophilus influenzae* tipo B y otras vacunas combinadas. En vista de que el precio de las vacunas es un factor importante, el Fondo Rotatorio de la OPS/OMS para la Compra de Vacunas, establecido en 1979, desempeña un papel importante para acelerar la incorporación de vacunas al permitir que la Argentina compre vacunas de buena calidad a precios asequibles;

- Avances en el diseño e implementación de estrategias específicas de control de las enfermedades infecto-contagiosas, enfrentando de este modo no sólo el problema existente, sino también la expansión de algunas de ellas, tales como el dengue, que se está diseminando cada vez mas en la Región;

- Implementación del Programa Capa de Ozono y Salud, para la disminución de morbimortalidad por exposición a la radiación solar ultravioleta. A través de éste Programa se promueve el conocimiento de la población e impulsan cambios en sus

pautas de conducta para favorecer la prevención frente a este riesgo. También se cuenta con el apoyo y desarrollo de programas de investigación sobre patologías asociadas a la radiación solar UV;

- Fortalecimiento de la prevención de los riesgos asociados al trabajo rural, particularmente en el empleo de agroquímicos y en la transmisión de brucelosis;

- Focalización en los últimos años, por parte del MS a través de la DP y PS, y el apoyo de la OPS/OMS, hacia el compromiso por la Promoción de la Salud, mediante una estrategia basada en el fortalecimiento de la coordinación intra e intersectorial y la promoción del protagonismo de la comunidad. Para ello se trata de apoyar a las organizaciones y a sus líderes naturales, superando improntas paternalistas que supongan una transferencia unidireccional de objetivos y medios. A tal efecto, se viene sosteniendo la constitución de redes de municipios y escuelas saludables y promoviendo la estrategia de atención primaria de la salud ambiental, para que las comunidades y los niños obtengan información y desarrollen iniciativas orientadas a la promoción de la salud y a la conservación del medio ambiente;

- Desarrollo sostenido de esfuerzos, en el marco de un proceso de reforma sectorial, para ampliar la cobertura de salud en la población mas desprotegida, particularmente la rural. En este sentido, cabe destacar el plan denominado Médicos de Cabecera, que parte de la iniciativa conjunta del Estado Nacional y de las autoridades municipales, y está orientado a dar cobertura médica a los sectores no alcanzados por subsectores privados o de la seguridad social. Los programas de expansión de cobertura en salud, están enfocados a la atención primaria, con eje en la salud materno-infantil y el control de las enfermedades transmisibles, entre ellas las asociadas con el saneamiento básico. No obstante, este último tema requiere todavía una identificación mas precisa y acciones mas definidas para que se pueda llevar un claro control de sus procesos y de su impacto en la reducción de la morbilidad, particularmente aquella asociada con la provisión de agua potable y el control sanitario de desechos;

- Promoción simultánea del desarrollo de nuevos modelos de atención en los servicios de salud, dando mayor énfasis a las acciones de promoción y prevención, procurando garantizar un adecuado seguimiento de los pacientes y una atención a la salud con calidad y efectividad.

En este campo la Argentina ha venido promoviendo la elaboración de normas de calidad de la atención médica en diversos aspectos, enmarcados por un Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica. Otras iniciativas concretadas o en desarrollo incluyen la creación de Servicios de Medicina del Trabajo y Sistema de Seguridad para trabajadores, pacientes y público en las Unidades de Atención de Salud (UAS); promoción de la instalación de Comisiones de Higiene y Seguridad en las UAS, desarrollo de metodología para el relevamiento de Riesgos Químicos Hospitalarios (ensayada en el Hospital Posadas) y promoción de la instalación de Sistemas de Vigilancia Ocupacional a través de la definición y ensayo de Eventos Centineas Ocupacionales, incluso con extensión al MERCOSUR;

- Continuidad en los esfuerzos en el área rural, para que los servicios de salud a las poblaciones indígenas tengan componentes culturalmente aceptables;

- Mejoras en la coordinación de los diversos sectores involucrados en la prevención y respuesta a Emergencias y Desastres, en respuesta a la iniciativa 6, del Plan de Acción de Santa Cruz. En tal sentido, en 1999, se concretó la creación del Sistema Federal de Emergencias, que opera en el marco de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Dentro de dicho Sistema, en el marco del Programa Nacional de Gestión de Sustancias Químicas, se ha promovido la capacidad de respuesta ante Emergencias por Sustancias Químicas incluyendo la organización de dos Simulacros de Respuesta a Emergencias Específicas;

- Reducción en la morbimortalidad tanto de enfermedades transmisibles como de enfermedades crónicas prevenibles, en respuesta a la iniciativa 36, del Plan de Acción de Santa Cruz. A través del área de salud en la vivienda la Argentina tiene un potencial enorme para avanzar en tales logros. Las acciones deben enfocarse hacia la disminución y erradicación de un conjunto de factores de riesgo, abarcando las dimensiones físicas, químicas, biológicas y psicosociales, habiéndose ya demostrado científicamente que estos factores influyen en la salud de los moradores de la vivienda:

En ese sentido, el MS ha iniciado acciones en este terreno desde el Programa de Calidad de Aire y Salud, prestando atención al tema de la Calidad del Aire Intradomiciliario y se ha mostrado interés, aunque todavía no se ha asumido el compromiso, en adherir a una iniciativa de la OPS/OMS para la creación y desarrollo de Centros de Salud en la Vivienda;

- Promoción del uso de tecnologías apropiadas y de bajo costo para el tratamiento de efluentes domésticos en áreas rurales.

C.I.2. b. Factores que contribuyeron a los logros:

- La mayor participación de la sociedad, dado que los temas sanitarios comprometen en forma transversal, aunque con distinto peso, a los diferentes niveles de decisión (desde el internacional al local). En el nivel nacional, se entiende posible promover exitosamente la participación del ámbito local, si paralelamente se percibe que existen condiciones para integrar esos esfuerzos en emprendimientos de dimensiones mayores que los enmarquen y al mismo tiempo contengan;

- La definición local de los problemas y de las políticas para enfrentarlos ya que sólo en ese ámbito se dispone de la debida percepción y sensibilidad a las particularidades del espacio y de una adecuada capacidad de respuesta a sus problemas. Las comunidades y sus líderes locales tienen una experiencia que no se puede muchas veces compartir, dado que son sujetos y objeto de sus propias decisiones, y cada uno conoce lo que puede brindar a su medio;

- La mayor percepción de la relación entre medio ambiente y salud. En este marco una de las áreas que en los últimos años ha recibido mayor atención es la relacionada

con el impacto del medio ambiente sobre la salud. La demanda por el mejoramiento del medio ambiente se explica por razones básicas de justicia y necesidad y por la íntima relación que existe entre su estado y el mantenimiento de la vida y la salud humana. Salud y Medio Ambiente constituyen un concepto binario, inclusivo y no excluyente. El estado de salud de las personas es una consecuencia rápidamente perceptible del deterioro del medio ambiente. Generalmente, las primeras manifestaciones de los problemas ambientales se ven reflejados en la salud de la población, tanto los originados por los déficits de los servicios sanitarios, como los que devienen por la contaminación del aire, el agua y el suelo o por las condiciones de los lugares de trabajo. Tener un medio ambiente sano y agradable, en armonía con la naturaleza, es un derecho básico del ser humano, indispensable para poder realizarse en la sociedad;

Para encarar esta doble problemática la OPS ha desarrollado un instrumento de gestión: la Atención Primaria Ambiental (APA), que se basa en los principios de la Atención Primaria de la Salud (APS) y del Desarrollo Rural Integrado.

En Argentina sobre la base de la propuesta de la OPS, se está promoviendo la Atención Primaria de la Salud Ambiental (APSA), filosóficamente indistinguible de aquella. Su objetivo fundamental es la protección y el mejoramiento de la Salud y el Ambiente a través de la promoción y realización de acciones preventivas en el ámbito local, con participación comunitaria. La APSA postula un cambio de conducta individual en la relación que el hombre ha tenido tradicionalmente con su entorno, y por su intermedio, la aceptación social de la necesidad de promover y participar en la protección de la salud ambiental;

- El fortalecimiento de los municipios, dado que por su inserción social en la comunidad, deben ser el eje articulador de la APSA. Por lo tanto sus objetivos inmediatos, sus políticas y sus contenidos, están condicionados por la realidad política, institucional y económica de cada comuna en que se desarrolle;

C.I.2. c. Metas y Desafíos:

Se han definido como condiciones para integrar la red de municipios reconocidos como activamente adheridos a la concepción de APSA, que el gobierno local adhiera explícitamente al mismo y elabore una planificación de sus actividades. Sólo se considerará su incorporación al programa, una vez que demuestre haber iniciado como mínimo una actividad reconocible en el tema y dado señales claras de haber realizado previsiones presupuestarias para su implementación;

En el marco de la APSA, el MS ha definido como objetivos de esta iniciativa:

- Promover mecanismos de articulación entre los gobiernos locales que implementen la estrategia de APSA, para la socialización de las experiencias;

- Promover la constitución de mecanismos de difusión e intercambio de información y registros de recursos de los gobiernos locales y de las comunidades;

- Generar indicadores que permitan la evaluación comparativa de los avances y resultados alcanzados;

- Apoyar técnicamente a los programas operativos comunales per se o gestionándolos si escapa a su competencia;

- Gestionar la búsqueda de recursos para facilitar la difusión y replica de experiencias exitosas.

- Integrar a los verdaderos protagonistas: Está claro que la salud es el resultado de múltiples relaciones del ser individual con el medio social y el medio ambiente, factores ambos sumamente complejos y variables. Para armonizar estas relaciones es necesario entablar vínculos estrechos entre las personas, dichos factores y el desarrollo económico. Debe, entonces, superarse la modalidad históricamente dominante de realizar diagnósticos y decidir cursos de acción lejos de los verdaderos protagonistas para incorporar a la comunidad a los procesos de acceso al conocimiento y participación responsable en la toma de decisiones. Para ello será menester confiar en la gente y en su educación. Difícilmente serán efectivas las leyes, los programas y la inversión de recursos si los “beneficiarios” no se comprometen activamente en el cuidado de su salud individual y comunitaria y del medio ambiente que los cobija. Esta actitud no significa que el Estado renuncia a su responsabilidad de fijar políticas y normas, educar, informar, asesorar y facilitar propuestas técnicas, pero los propios interesados asumen su cuota de responsabilidad comunitaria involucrándose en la puesta en práctica de las soluciones;

- Fortalecer las conductas socialmente responsables, dado que es vital para enfrentar la inequidad existente en todos los campos y en particular en el de la salud. Para ello es necesario que todos los actores sociales, gubernamentales y no gubernamentales, tengan una clara percepción de que este objetivo es prioritario;

- Trabajar por la equidad en salud, implica reconocer la necesidad de fortalecer las oportunidades en diversos frentes:

1. el acceso y apropiación del conocimiento;
2. el acceso a un ambiente individual y social seguro y amigable;
3. el acceso a los sistemas de salud y de apoyo social;
4. la participación en la toma de decisión.

- Formular e implementar, a través del MS, un plan nacional de mejoramiento de la calidad del agua, dentro de los principios y estrategias básicas del Plan Regional de Calidad del Agua. En este aspecto resulta de gran importancia el apoyo del CEPIS tanto para la evaluación comparativa de los estándares de calidad del agua de bebida de los diversos países de América, como para el establecimiento de condiciones de certificación de laboratorios, optimización de plantas de tratamiento y capacitación del personal.

En este sentido, se destacan los esfuerzos para la conformación de una Comisión Nacional para actualizar las normas técnicas y jurídicas; la reactivación del Programa de Vigilancia y Control del Agua de Consumo Humano y la eliminación de sustancias tóxicas del agua de bebida (arsénico, nitratos, flúor, otros).

C.II. SECCIÓN II: Conservación y Gestión de los Recursos para el Desarrollo

C.II.1. Recursos Forestales

Desde la desaparición del antiguo IFONA, las competencias nacionales del sector forestal fueron asumidas básicamente por tres organismos.

La SAGP y A se ocupa de las plantaciones forestales, a través de la Dirección de Forestación.

Lo referido a los bosques nativos radica en la SDSyPA, del MDS y MA, la cual cuenta con la DRFN, en la órbita de la DNDS.

La ST de la Nación ha incorporado a la APN desde 2000.

En cuanto a la investigación forestal, está a cargo del INTA.

El objetivo de la política forestal con respecto a los bosques nativos es lograr los instrumentos necesarios que permitan la conformación de un marco de defensa de esas masas forestales. Estos deben contribuir a detener el proceso de deforestación y pérdida en la calidad del recurso, a través de la normativa, la investigación, la capacitación, la divulgación, y las herramientas económicas y financieras necesarias, teniendo en cuenta que el 80% de las áreas forestales son de propiedad privada.

Si bien las provincias tienen la responsabilidad primaria con respecto al recurso, su normativa se encuadra en la nacional.

Diversos programas en curso, como el de Bosques Modelo y el de Productos Forestales No Madereros, contribuyen en forma directa a la persistencia del recurso a través de su uso sustentable.

C.II.1. a. Logros:

- Reconocimiento por parte de la sociedad de los valores de las masas forestales nativas, en aumento;

- Implementación de un proceso participativo para la reforma del marco político normativo que afecta los bosques nativos y las posibilidades de su uso sustentable;

- Presentación, en mayo de 1996, del PROGRAMA NACIONAL DE BOSQUES MODELO (PNBM), en el ámbito de la DNDS de la SDS y PA. Este tiene por objeto, desarrollar un innovador criterio de planificación y gestión integrada de recursos naturales en el ámbito de ecosistemas forestales, basado en la asociación y concertación

entre grupos de interés, tendiente a elevar el nivel y calidad de vida de las comunidades o asentamientos humanos marginados o de bajos recursos;

- Presentación, en abril de 1992, del Plan Forestal Argentino. Este es un plan técnico concebido como instrumento para la ordenación de los recursos forestales y, por su intermedio, al conjunto de los recursos naturales renovables. Su objetivo es lograr la óptima utilización de los mismos, compatibilizando los valores de protección y restauración del medio natural con el desarrollo socioeconómico;

- Creación en 1996, de la Unidad Ejecutora del Plan Nacional de Manejo del Fuego (PNMF), en la órbita de la entonces SRN y DS. En la actualidad funciona en el ámbito de la SDS y PA. Esta ha permitido la estructuración de un sistema nacional basado en seis regiones, logrando avances en la coordinación y apoyo a los diferentes niveles de actuación. Mediante su esquema de organización, formula una serie de lineamientos técnicos tendientes a lograr una propuesta para afrontar la problemática de los incendios forestales, incorporando la participación de los distintos actores vinculados.

Dicho Plan se encuadra dentro del Capítulo VI de la Ley 13.273 (T.O. Decreto N° 710/95) PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS, art. 34 al 39. El mismo establece que se debe asegurar la estrategia para el manejo del fuego, para proveer la máxima atención especializada en la prevención, detección y control de los incendios de bosques y pastizales.

El PNMF, cuenta con adecuada tecnología en equipos y con buena capacitación del personal afectado, lo que permite elaborar una rápida, coordinada y efectiva acción, aprovechando los recursos materiales y humanos de la administración nacional y provincial;

- Elaboración de las Estadísticas de Incendios Forestales. Estas son recolectadas, analizadas y procesadas por el Departamento de Estadística Forestal de la SDS y PA, desde el año 1993; con el objeto de mejorar las estadísticas, se prevé la utilización de un nuevo parte diario de carácter nacional;

- Implementación de Estudios de Impacto Ambiental en la normativa de promoción de inversiones en bosques cultivados, para contribuir a evitar cambios descontrolados en el uso del suelo;

- DESARROLLO DE ACCIONES A TRAVÉS DE LA DRFN DE LA SDSYP A VINCULADAS EN

FORMA DIRECTA CON EL CAPÍTULO 13 DE LA AGENDA XXI, EN LO REFERIDO A "ORDENACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS FRÁGILES: DESARROLLO SOSTENIBLE EN ZONAS DE MONTAÑA", AUNQUE NO EXISTA UNA POLÍTICA NACIONAL ESPECÍFICA EN CORRESPONDENCIA CON DICHO CAPÍTULO. ESAS ACCIONES SE ENMARCAN EN EL PROGRAMA NACIONAL DE BOSQUES MODELO, CUYA UNIDAD GEOGRÁFICA IDEAL DE INTERVENCIÓN ES LA CUENCA HIDROGRÁFICA;

El Bosque Modelo en este Programa, se define como una asociación de voluntades que planifican y gestionan un modelo de desarrollo sustentable en ecosistemas representativos de una bioregión o cuenca hidrográfica. Este modelo debe elevar el nivel y calidad de vida de las comunidades o

asentamientos humanos marginados o de bajos recursos, como pauta fundamental.

LA CONCRECION DE ESTE PROGRAMA REPRESENTARA LA PRIMERA ACCION CONCRETA PARA AVANZAR EN ASPECTOS RELATIVOS AL CAPITULO 13 DE LA AGENDA XXI;

- COORDINACION NACIONAL DE LA RED LATINOAMERICANA DE COOPERACION

TECNICA EN MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS (REDLACH/FAO) DESDE 1990. LA DRFN DE LA SDS Y PA DEL MDS Y MA, TRABAJA CONJUNTAMENTE CON LOS DEMAS PAISES MIEMBROS DE LA RED EN LA CONCERTACION DE ACTIVIDADES Y LINEAS ESTRATEGICAS DE ACCION. SE ENCUENTRA EN PREPARACION AL AÑO INTERNACIONAL DE LAS MONTAÑAS – 2002, DEL CUAL LA FAO HA SIDO DESIGNADO ORGANISMO COORDINADOR;

- Definición de objetivos en el marco del Proyecto, localizado en la ecoregión del Parque Chaqueño, tales como: desarrollo de un concepto general con la confección de un marco analítico; realización de un estudio piloto con recomendaciones para la futura implementación del IMEB a nivel país. Los productos principales consistirán en el análisis y valorización del caso “Presidencia de la Plaza (Chaco)” como área demostrativa de evaluación de uso múltiple y la elaboración de un Manual Operativo;

- Puesta en ejecución en 1997, con apoyo del Banco Mundial, del Proyecto “Desarrollo Forestal” cuyo principal objetivo es aportar asistencia técnica y financiera a pequeños propietarios, para la conservación del ambiente y de los recursos biológicos;

- PROMOCION DE LA INICIATIVA PRIVADA, A FIN DE AVANZAR HACIA LA CONSERVACION Y

FOMENTAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LAS MASAS FORESTALES NATIVAS Y RESTAURAR LOS ECOSISTEMAS FORESTALES DEGRADADOS. EN TAL SENTIDO, SE HA IDENTIFICADO A LA PROMOCION Y FOMENTO DE LA INICIATIVA PRIVADA COMO UNA DE LAS LINEAS GENERALES DE ACCION. LA LEY 25.080 DE INVERSIONES PARA LOS BOSQUES CULTIVADOS, INCLUYE LA PROMOCION PARA LA RESTAURACION DE LOS BOSQUES NATIVOS EXISTENTES, ESTABLECIENDO PARA LOS PROYECTOS LA PRESENTACION DE UN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA);

- INICIACION, A PARTIR DE 1994, DEL PROGRAMA DE PRODUCTOS FORESTALES NO MADEREROS (PFNM) EN EL AMBITO DE LA SDS Y PA. A TRAVES DEL PROGRAMA SE REALIZA LA RECOPIACION Y SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION EXISTENTE SOBRE PFNM DE LOS BOSQUES NATIVOS, CON EL FIN DE LLEVAR ESTADISTICAS DE SU PRODUCCION, EFECTUAR SU ADECUADA VALORACION E INCENTIVAR LA INVESTIGACION. TAMBIEN SE ESTAN IMPLEMENTANDO ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIO Y PROMOCION DE LOS PRODUCTOS FORESTALES NO MADEREROS, COMO HERRAMIENTA PARA EL USO MULTIPLE DEL BOSQUE Y LA CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA; SE HA GENERADO UNA BASE DE DATOS PARA EL

RELEVAMIENTO DE LA NORMATIVA PROVINCIAL VINCULADA CON LOS DISTINTOS NIVELES DE PROTECCION DE ESPECIES VEGETALES NATIVAS Y LA REFERIDA A ESPECIES PROTEGIDAS POR CITES;

- avances en el reconocimiento del papel de las comunidades indígenas y de las organizaciones no gubernamentales, como actores fundamentales en la promoción de la sustentabilidad del recurso forestal nativo.

C.II.1. b. Factores que contribuyen a los logros:

- El ordenamiento de la normativa y la mejora en la información;
- la ejecución, a partir de 1998, del Proyecto "Bosques Nativos y Areas Protegidas" para el fortalecimiento de la entonces SRN y DS, permitió contar con ayuda financiera del Gobierno de Japón. La obtención del Préstamo BIRF - AR 4085, facilitó avanzar en el mejoramiento y conservación de áreas protegidas y bosques nativos. Desde 2000, la SDS y PA maneja el Proyecto en lo referente a los bosques nativos. Este incluye la realización del Primer Inventario Forestal Nacional como base para un sistema de evaluación y monitoreo continuo, mejoramiento de las estadísticas forestales e identificación de líneas de investigación regional;
- la generación de datos primarios por medio del Inventario Forestal Nacional de Bosques Nativos. Por otra parte la SDSyPA pondrá en marcha un Sistema Nacional de Evaluación Forestal para procesar los datos obtenidos y transformarlos en información de rápido acceso para los usuarios. Mediante un proyecto desarrollado en 2000, la SDS y PA y la GTZ, organismo de cooperación de Alemania, avanzaron en el tema de la incorporación de aspectos de la biodiversidad en el mencionado Inventario;
- la constitución en 1997, en el ámbito del COFEMA, de la Comisión de Bosques Nativos. Esto generó un interés común de las instituciones competentes en el nivel nacional y provincial, para avanzar en la conservación y manejo sustentable del recurso, dada la buena relación institucional entre ambos niveles de gobierno y el compromiso personal por parte de los cuerpos técnicos de estas instituciones;
- el creciente interés de los diversos sectores vinculados al bosque nativo en lograr cambios que permitan la persistencia del recurso;
- la participación activa del país en el diálogo internacional forestal apoyando en particular la Convención de Cambio Climático, le da un papel relevante en los foros internacionales;
- la incorporación de la temática en el ámbito del SGT N° 6 - Medio Ambiente del MERCOSUR;
- la participación como miembro fundador de la Comisión para el Desarrollo Forestal del MERCOSUR (CEDEFOR), entidad creada por miembros del sector privado que promueven la integración de los aspectos forestales y ambientales en los Estados Parte del MERCOSUR;

- la mayor concientización por parte de la sociedad respecto de la importancia de los PFNM como herramienta para el manejo sustentable de las masas forestales nativas. Mediante un proyecto específico para la divulgación de los beneficios múltiples de los productos forestales distintos de la madera, se logró la edición de distintos materiales, incluso de carácter audiovisual. Se ha trabajado en las posibilidades de mercado de productos tales como la harina de algarrobo. Sin embargo, se requiere de un mayor esfuerzo para identificar nuevos productos, desarrollar canales de comercialización y marketing, incorporar valor agregado a la producción y en muchos casos, investigación sobre manejo de las especies involucradas;

- el avance en la identificación del recurso forestal como posibilidad de desarrollo regional sustentable;

C.II.1. c. Limitaciones:

- Asimetrías políticas, en determinadas ocasiones, respecto de la ejecución del PNMF, pese a que los objetivos y los contenidos técnicos son claros;

- falta concretar la formulación de una herramienta fundamental, dentro del PNMF y en el ámbito provincial: los Planes de Desarrollo Regionales. Esta ausencia genera inconvenientes que contribuyen a la irregular asignación de medios presupuestarios, más allá de las limitaciones en el monto global asignado anualmente. Aún así, la asignación eficiente de recursos humanos orientados a la prevención, con el fin de reducir los gastos subsiguientes de extinción de incendios, contribuye al control sistemático o integrado de los incendios;

- insuficiente normativa que permita cumplir con el objetivo general de una política nacional para las masas forestales nativas. Esta requiere prever instrumentos que permitan la conformación de un marco apto para su defensa y, de ese modo, contribuir a detener el proceso de deforestación y pérdida de la calidad del recurso. En éste sentido, la ausencia de normativa aplicable frente a graves procesos de conversión en el uso del suelo que favorezcan la permanencia del bosque nativo, dificulta el cumplimiento de una política de desarrollo sustentable del bosque;

- ausencia de instrumentos económicos apropiados, máxime si se tiene en cuenta que el 80% de las áreas forestales en la Argentina son de propiedad privada. De contar con una política de promoción de ciertos instrumentos económicos imprescindibles, combinados con una regulación directa eficiente, se podría para revertir la actual tendencia. Aún así, debe señalarse que se intentó avanzar en proyectos tendientes a aumentar la participación privada en los esfuerzos de conservación del patrimonio forestal nativo, propiciando por parte de los gobiernos provinciales, la calificación de Bosques Protectores, en los términos de la Ley N°13.273 de Defensa de la Riqueza Forestal. De este modo se lograría incluir a los propietarios privados en una categoría de manejo de áreas protegidas asimilable a la categoría VI adoptada por la UICN en 1994. Sin embargo, y a diferencia de las herramientas de incentivo para bosques implantados, consideraciones financieras han impedido el desarrollo de tales instrumentos;

- escasa percepción por parte de ciertos sectores sobre el uso sustentable del recurso. Si bien se manifiesta un aumento en la concientización de la población con respecto al valor de los bosques, esta percepción no parece incluir el concepto del uso

sustentable del recurso para lograr su persistencia. Esto ha llevado a desactivar proyectos de aprovechamiento sostenible por presiones de grupos ambientalistas, sin considerar que en muchos casos el no uso significa la conversión;

- falta de reglamentación de La Ley N° 13.273 (Texto Ordenado 1995) que prohíbe “...la devastación de bosques y tierras forestales y la utilización irracional de productos forestales...”, previendo la clasificación sistemática de los bosques y su declaración como protectores, permanentes o experimentales, lo cual ha impedido su plena implementación. Existe un proyecto de Decreto Reglamentario en evaluación en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, cuya aprobación permitiría cumplir con los objetivos de la Ley y con los compromisos internacionales asumidos en el marco de los Convenios de Diversidad Biológica y de Desertificación;

- dispersión de competencias y falta de relevancia del tema, en el organigrama nacional de los organismos forestales, lo que ha contribuido a desdibujar la globalidad de la problemática. Por otro lado, el desarrollo sustentable de los bosques, no ha logrado ser priorizado en un país de fuerte tradición agrícola-ganadera;

- falta de planificación en el uso del suelo, y de valorización de los productos y servicios del bosque nativo, en un marco de tenencia del recurso principalmente a cargo de actores privados;

C.II.1. d. Metas y Desafíos:

- Valorizar los productos y servicios del bosque dado que representan un punto fundamental para evitar la conversión en el uso del suelo. En ese sentido, y debido al énfasis creciente de los mecanismos de mercado, la inclusión de los bosques en el Mecanismo de Desarrollo Limpio y el fomento de un mercado de bonos de carbono, permitirían avanzar hacia un equilibrio con respecto a los incentivos hacia el cambio en el uso del suelo, entre otras ventajas;

- promover la certificación voluntaria como forma de internalizar los costos ambientales, dado que las características de la estructura de tenencia de la tierra en las áreas forestales argentinas, permitirían su adaptación, aunque deben tenerse en cuenta ciertas limitaciones porque esto no es así en todos los casos;

- implementar en forma plena el Proyecto de Bosques Nativos toda vez que permitirá obtener información útil para la asignación de prioridades, facilitará el desarrollo de un marco regulatorio de incentivos económicos e internalizará en el proceso de decisiones, el rango completo de costos y beneficios sociales asociados a las masas forestales nativas;

- tender a un mayor compromiso político sobre la temática, en los ámbitos nacional y provincial;

- superar el difícil escenario económico y social existente en las regiones forestales;

- desarrollar un concepto general para el Inventario, Monitoreo y Evaluación de la Biodiversidad (IMEB) en ecosistemas boscosos de la Argentina, con relación a la sostenibilidad de su uso. Su implementación en el ámbito nacional, aportará información ecológica y cultural y permitirá conocer aspectos técnicos de conservación y de manejo, como también su desarrollo espacial y temporal;

C.II.2. Fauna y Flora Silvestres

En materia de Fauna y Flora Silvestres la DFyFS de la SDS y PA, del MDS y MA, impulsa proyectos dentro de una estrategia para el aprovechamiento sustentable de especies de la fauna y flora silvestres y la conservación de sus hábitats. Estos se encuentran inicialmente acotados como experiencias piloto en el nivel experimental y con pautas muy estrictas, con el objeto de ampliar gradualmente su escala en la medida en que se perciban resultados exitosos y puedan ajustarse las pautas de manejo iniciales.

Por otra parte, es aquellas especies que no permiten un aprovechamiento de ningún tipo, debido a que se encuentran amenazadas o en peligro de extinción, el organismo ambiental nacional promueve y coordina programas de protección en conjunto con las provincias y con organizaciones no gubernamentales.

Desde el año 1992 ha la fecha, se ha mejorado sustancialmente la relación con las provincias en cuanto al manejo y la gestión coordinada de los recursos naturales, potenciando la implementación de valiosos foros de discusión federales como el Ente Coordinador Interprovincial de Fauna (ECIF), la Comisión Regional de Provincias Vicuñeras, el Consejo Asesor Regional Patagónico para la Fauna Silvestre (CARPFS), así como su relación con el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), de todos los cuales se ha participado activamente.

En el orden internacional, el trabajo y gestión de la DFyFS en los distintos foros, permitió reforzar la posición de la Argentina dentro de la comunidad de naciones. Una prueba de ello lo constituye la recategorización del país dentro de la Convención para el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), con referencia a la legislación nacional tendiente a la implementación de la Convención, pasando a ser ubicado en la máxima categoría (Categoría 1) en el año 1997.

Todas estas acciones se inscriben en el marco de una estrategia de desarrollo sustentable, que provee la base conceptual de la conservación y manejo de la vida silvestre. A la vez, propone medidas a tomar para asegurar los resultados buscados en un contexto más amplio.

C.II.2. a. Logros:

- La mayoría de las acciones impulsadas a través de los proyectos descriptos en Anexos D. se integran a tres componentes principales: el ambiental, el social y el económico. Asimismo, se tiende a trabajar regionalmente en el uso sustentable de diferentes especies, dentro de una misma área, lo cual potencia el valor del hábitat silvestre y colabora a asegurar un uso más continuo de los recursos a lo largo del año. Se contribuye de esta manera a que los pobladores modifiquen la percepción de los hábitats silvestres y participen activamente en una mayor conservación de los mismos;

- las comunidades rurales han tenido una respuesta muy favorable, la que se percibe más marcadamente en los proyectos que se encuentran en una etapa avanzada. Los pobladores locales reciben mayores ingresos por la extracción y venta de los recursos vivos silvestres comprendidos en los proyectos. Esto es articulado con campañas de concientización y educación, siendo los pobladores involucrados los más interesados en la continuidad de los proyectos. El sector privado (exportadores) acompaña este proceso, en muchos casos aportando fondos con los que se financian estudios, monitoreos, controles y reservas de hábitat;

- los programas de uso sustentable de especies de fauna silvestre, en particular, el Programa Elé, el cual por sus características de excelencia ha llevado a que el Loro Hablador (*Amazona aestiva*) sea la primera especie en el mundo que fuera autorizada para importación por el gobierno de los Estados Unidos de América provenientes de poblaciones silvestres exóticas, al haberse aprobado el programa en el marco de la Ley de Aves Silvestres de 1992, a fines del año 2000;

- la sociedad civil en general es más consciente de los problemas de la fauna, flora y hábitats silvestres. La DF y FS ha cumplido un activo rol en la formación de la opinión ciudadana, a través de su presencia en los medios, el dictado de cursos, charlas en las escuelas y universidades e intercambio directo con personas interesadas y organizaciones no gubernamentales.

C.II.2. b. Factores que contribuyeron a los logros:

- Fluida y constructiva relación con las agencias competentes en el tema fauna silvestre de las diferentes provincias;

- apropiados contactos entre los investigadores y las instituciones ambientales del país y el exterior;

- buena capacitación del plantel profesional y técnico de los organismos competentes en materia de control de tráfico ilícito como DF y FS, GN y PAN;

- buena disposición de comunidades rurales para el trabajo en conjunto con profesionales y técnicos, en proyectos de uso sustentable;

- mejora de la infraestructura de comunicación;

- trabajo conjunto entre las instituciones competentes, fundamentalmente entre las autoridades de aplicación y los organismos de control de ilícitos, como DF y FS, PAN y GN;

- aumento de la credibilidad en el ámbito internacional, en relación con los países de la región;

- aumento el control en materia de fauna a partir de la creación de áreas ambientales en el ámbito de PAN y GN. A modo de ejemplo se señalan los controles de embarques de animales vivos en donde PAN, por medio de sus controles, permite conocer el movimiento interno de fauna y realizar un seguimiento de los mismo por los distintos aeropuertos del país.

C.II.2. c. Limitaciones:

- Restricciones presupuestarias;
- carencia de políticas ambientales homogéneas en el ámbito nacional y provincial entre los diferentes organismos del Estado, en especial en las áreas relacionadas con la agricultura y la ganadería;
- falta de políticas que promuevan incentivos económicos;
- acelerado deterioro ambiental, producto de situaciones de pobreza y exclusión social que llevan en ciertos casos a depredar el recurso y aumentar la tasa de ilícitos ambientales;
- deterioro del recurso por la falta de políticas coordinadas entre algunas áreas en los diferentes niveles de gobierno;
- complicaciones burocráticas en el ámbito de los circuitos administrativos;
- escaso financiamiento externo para proyectos de conservación y manejo de la vida silvestre.

C.II.2. d. Metas y Desafíos:

- Fomentar la comunicación y coordinación intersectorial en el diseño e implementación de políticas, planes y programas de uso sustentable de la vida silvestre;
- promover el desarrollo de instrumentos de ordenamiento territorial (planificación del uso de la tierra) en el nivel provincial, nacional y regional;
- diseñar y promover la aplicación de instrumentos/incentivos económicos que favorezcan el uso sustentable de la vida silvestre y la conservación de los hábitats;
- implementar urgentemente una Estrategia Nacional de Desarrollo Sustentable, así como los mecanismos y foros asociados a ella;
- promover un mayor intercambio horizontal de información y coordinación integral de las acciones entre los diferentes organismos del Estado Nacional;
- establecer mecanismos de financiamiento que aseguren la continuidad de los programas y permitan cumplir con los compromisos asumidos con los participantes, en especial con los pobladores locales de bajos recursos;
- fortalecer la participación del país en los foros internacionales relacionados con el tema y en especial el rol de cooperación en el ámbito regional;
- coordinar políticas y acciones comunes entre la Nación y las provincias;
- superar las limitaciones impuestas por la dimensión geográfica de nuestro territorio y costos operativos en dinero y tiempo que esto implica;

- subsanar la carencia de información de base respecto a la biología de las especies silvestres;

- fortalecer los controles provinciales, con el objeto de realizar tareas que permitan en las áreas de origen, determinar los puntos de extracción y acopio y actuar sobre los mismos;

- creación de una Estación de Rescate para Especies Amenazadas en el Aeropuerto de Ezeiza.

C.II.3. Recursos Ictícolas y Acuícolas

C.II.3. a. Logros:

- Designación de Sitios Ramsar en zonas costeras;

- designación de Sitios Ramsar en ecosistemas acuáticos continentales;

- sanción de la Ley N° 24.922, sobre Régimen Federal de Pesca, la cual permitió la creación de un nuevo ámbito para la búsqueda de consenso entre autoridades nacionales y provinciales en el tema pesca, a través del Consejo Federal Pesquero. Con la participación de la SDS y PA del MDS y MA en el CFP se dio más relevancia a la visión ecosistémica, lo que favoreció la introducción de criterios para el establecimiento de medidas con relación a la mortalidad incidental de mamíferos marinos, a través del Programa de Observadores a Bordo. También se está avanzando en la capacitación del sector de acuerdo al Código de Pesca Responsable de la FAO;

- sanción de la Ley N° 25.052, en noviembre de 1998, que prohíbe la caza o captura, a través de redes o por el sistema de varamiento forzado, de ejemplares de orca en todo el territorio nacional;

- reglamento de oceanarios: En enero de 1996 entró en vigencia dicho Reglamento, a través de la Resolución N°351/95, de la entonces SRNyAH por el cual se regula el funcionamiento de los oceanarios, su infraestructura, el ingreso y egreso de ejemplares de mamíferos marinos, el cuidado veterinario, etc.;

- creación del Comité Nacional Ramsar por resoluciones nros. 555/94 y 437/96 de la entonces SRN y AH y la Resolución N° 276/00 de la SDSyPA. El Comité fue creado para coordinar y asesorar con relación a la aplicación de la convención sobre los Humedales en la Argentina, aprobada por Ley N° .919;

También deben señalarse importantes logros de experiencias participativas de la sociedad civil y apoyo a ONGs tales como:

- Fundación Patagonia Natural: participación en talleres vinculados al Plan de Manejo Integrado de la Zona Costera Patagónica (1993-1995);

- Fundación Ambiente y Recursos Naturales: participación en talleres sobre pesca (2000);

- Fundación Proteger: participación en talleres sobre pesca fluvial (1999);
- Fundación Hábitat: apoyo para la edición de documentación técnica y de divulgación (1998);
- Wetlands International – Américas: apoyo para la edición de documentación técnica *‘Los Humedales de la Argentina. Clasificación, situación actual, conservación y legislación’*. (Ed. 1998, Wetlands International Pub. 46, Argentina);
- Instituto Argentino del Petróleo y el Gas, (IAPG). La DRI y A participa en la reuniones de la Comisión de “Prevención de la Contaminación de las Aguas y Costas”.

C.II.3. b. Factores que contribuyeron a esos logros:

- La mayor interacción con las autoridades provinciales y con los organismos científicos nacionales e internacionales en los temas de conservación y uso sustentable de los recursos acuáticos;
- El respaldo a las convenciones internacionales;
- el apoyo de las ONGs a las áreas competentes en materia de conservación del recurso;
- el incremento de la conciencia en la sociedad y la adopción de políticas ambientales en algunos casos reflejadas en la sanción de normas sectoriales;

C.II.3. c. Limitaciones:

- Insuficiencia de normas sobre la materia. Si bien se intervino en la preparación y promoción de proyectos de leyes de ordenamiento costero, hasta la fecha no se logró la aprobación de los mismos. Entre las dificultades que se observan, debe mencionarse lo referido a la definición de los alcances que tendría la aplicación de tal normativa con relación al deslinde de competencias territoriales y a las actividades involucradas, respecto de las que corresponde a la Nación y a las Provincias;
- falta de establecimiento de políticas claras y definidas para el área ambiental en el corto, mediano y largo plazo en el nivel nacional;
- disparidades en el desarrollo de la temática ambiental en las distintas jurisdicciones provinciales;
- ausencia de mecanismos eficientes para coordinar acciones entre las distintas jurisdicciones.

C.II.3. d. Metas y Desafíos:

- Fortalecer los cuadros técnicos de los organismos competentes en materia de conservación y uso sustentable del recurso, en los diferentes niveles de gobierno;

- incorporar el concepto de uso sustentable del recurso, en los ámbitos micro y macroeconómicos;
- instalar el concepto de uso sustentable del recurso, en los sectores de la producción;
- prevenir el deterioro de los ecosistemas degradados y propiciar su restauración;
- educar para la conservación y el uso sustentable de los recursos acuáticos;
- fortalecer las instituciones responsables de la gestión de los recursos ictícolas y acuícolas para que se haga un uso sustentable de los mismos.

C.II.4. Suelos

C.II.4.a. Logros:

- Desarrollo de actividades de promoción de la conservación de los suelos desde 1992, como respuesta a la falta de legislación promocional. Dada esa situación la DCS de la SDS y PA retomó la iniciativa de promoción con el objeto de fortalecer los grupos provinciales instalados en la década anterior, orientando su apoyo a la formulación de marcos legislativos y fortalecimiento de actividades locales de conservación de suelos;
- campañas de sensibilización sobre la problemática de desertificación financiadas por el Punto Focal Nacional. Las mismas siempre contaron con la participación de organismos gubernamentales y no gubernamentales de la región donde se llevaron a cabo;
- participación de las ONG's, las que han cumplido una importante tarea vinculada a la difusión de la problemática, capacitación de productores y transferencia de tecnologías;
- desarrollo de programas y proyectos encuadrados en las estrategias del PAN por parte de provincias e instituciones de investigación y transferencia tecnológica de las regiones áridas y semiáridas;
- actividades de la cooperación internacional en la Argentina, con relación a la lucha contra la desertificación, han sido significativas y disparadoras de estrategias nacionales y provinciales;
- identificación de las bases y lineamientos para una agenda de trabajo que permita lograr un Programa Nacional de Conservación de la Tierra y el Agua;
- identificación de lineamientos para un Programa de Control de la Degradación de los Suelos y Lucha Contra la Desertificación, para negociar financiamiento;
- elaboración y puesta en marcha del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación (PAN), iniciado en 1995 por el Punto Focal Nacional de la Lucha

contra la Desertificación. El mismo coordina una amplia discusión con todas las instituciones y organismos públicos nacionales y provinciales, organizaciones no gubernamentales y asociaciones de productores relacionadas con el problema. La finalidad es contribuir al desarrollo sustentable en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas de la República Argentina;

- creación en 1995, en el ámbito de la DCS de la SDS y PA, del Area de Género y Desertificación.

C.II.4. b. Factores que contribuyeron a estos logros:

- Un marco de actividades preexistentes en conservación de suelos entre 1982 y 1989, generaron el fortalecimiento de grupos provinciales y su continuidad con distintos grados de regularidad entre el año 1990 y el 2000;

- una actitud de colaboración recíproca Nación/provincias en el marco de la temática de conservación de suelos, con la concientización de distintos sectores de la comunidad involucrada sobre la necesidad de aunar esfuerzos en las actividades;

- una buena coordinación técnico-política entre el organismo ambiental nacional, el INTA – Regional Entre Ríos y el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos – Secretaría de la Producción, entre los años 1993 y 1995;

- una positiva interacción técnica con la mayoría de las provincias, lo que permitió el desarrollo de planteos de promoción de las actividades de conservación de suelos;

- un fuerte cambio en el sector productivo agropecuario, especialmente el dedicado a la actividad agrícola, que incorporó masivamente tecnologías tendientes a la conservación;

- una metodología de trabajo basada en un enfoque decididamente participativo, con el objetivo de cambiar sustancialmente el modelo de planificación tradicional “de arriba hacia abajo”;

- una participación activa de funcionarios públicos, técnicos, científicos, productores, docentes, comunicadores sociales, miembros de ONG's y de asociaciones intermedias, junto a la población directamente afectada;

- apoyo técnico y financiero del Programa de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el PNUMA. También ha sido sustantivo el apoyo técnico y el aporte financiero catalítico, realizado por el UNOS/PNUD y el Secretariado de la Convención con relación a las tareas de sensibilización, desarrollo y concreción del Documento de Base del PAN;

- una presencia permanente de Argentina en los foros internacionales, contribuyendo a un rápido avance del PAN con relación a otros miembros de la CLD;

- una mayor concientización de los Puntos Focales de Argentina y Chile de la necesidad de la incorporación de la perspectiva de género en los Programas Nacionales y Regionales de Lucha contra la Desertificación y Mitigación de la Sequía.

C.II.4.c. Limitaciones:

- Insuficiente conciencia sobre la necesidad del planeamiento y ordenación de los recursos de tierras, en las esferas de decisión política, al no tener una clara visión del impacto económico negativo que genera su mal manejo y degradación;

- fuerte duplicidad en las responsabilidades institucionales sobre la temática en los niveles nacional y provinciales que han impedido concretar acciones duraderas;

- reducción de presupuestos públicos en el nivel nacional y provincial, que impiden una buena promoción de las actividades de conservación de suelos;

- ausencia de proyectos y de soporte técnico-económico para su elaboración, que permitan las actividades tendientes a la planificación y ordenamiento de los recursos de tierras y, en especial, las actividades de conservación de suelos;

- ausencia de líneas de financiamiento específicas en los organismos de crédito internacionales, para proyectos de conservación de suelos;

Respecto de los principales obstáculos para implementar el PAN en el país se señalan los siguientes:

- Escasa inserción del PAN en las políticas nacionales;

- falta de reglamentación de la ley N° 24.701 ratificatoria de la Convención de Lucha contra la Desertificación, lo que impide que se cuente con un fondo propio de financiamiento para el funcionamiento del Comité Ejecutivo y actividades vinculadas;

- ausencia de líneas claras de financiamiento internacional en la lucha contra la desertificación;

- alta de conocimiento de la temática, por ser un concepto nuevo en la sociedad;

- errónea interpretación del tema de género con los términos “feminismo y machismo”, sin tratar de comprender que su significado es mucho más complejo.

C.II.4.d. Metas y Desafíos:

- Apoyar proyectos y programas que permitan difundir y promover la conservación de los suelos en zonas especialmente vulnerables;

- fortalecer y promover mecanismos de comunicación en el ámbito nacional y provincial, para sumar esfuerzos y no duplicar tareas en la conservación de los suelos;

- homogeneizar la legislación provincial y contar con una norma nacional específica, de manera que puedan desarrollarse actividades regionales coordinadas entre las provincias y la Nación;

- acrecentar las actividades concurrentes en el sector educativo y promoción de una amplia incorporación de la temática relativa al ordenamiento y planificación de usos de tierras y conservación de suelos en la currícula educativa en todos los niveles;
- fortalecer y promover los vínculos entre los generadores de información y los decisores sobre el uso de los recursos de tierras;
- reinsertar en la discusión macro y microeconómica de la importancia de la degradación de los recursos de la tierra en la planificación global de un país agropecuario;
- fortalecer las actividades entre organismos gubernamentales y no gubernamentales en todos los niveles;
- articular a los sectores de generación de información con los de toma de decisión;
- diseñar y promover instrumentos económicos y de ordenamiento ambiental y territorial;
- incorporar efectivamente el enfoque de género en las estrategias;
- apoyar la organización, coordinación, oferta de proyectos e intensificar la búsqueda de donantes de fondos;
- regularizar el funcionamiento del Comité Ejecutivo del PAN;
- revertir las pérdidas por degradación de los suelos dado que superan los mil millones de pesos anuales, lo que significa más del 6% de las exportaciones nacionales.

C.II.5. Areas Protegidas

C.II.5. a. Logros:

- Se fortaleció el sistema de áreas protegidas tanto en el ámbito nacional como en el provincial, municipal y privado, a través de la APN dado la experiencia consolidada a lo largo de su vasta trayectoria;
- se delinearon estrategias tendientes a garantizar la conservación y utilización sostenible de recursos biológicos, y la minimización o mitigación de los efectos adversos para la diversidad biológica derivados de las actividades desarrolladas dentro de las áreas protegidas. Para ello se trabajó en la articulación, dentro del contexto del sistema federal de condiciones esenciales, y en la armonización de dichas estrategias con los usos actuales de los recursos naturales y el desarrollo económico y social;
- se priorizó la asistencia técnica a las provincias, para la promoción del establecimiento de Sistemas Provinciales de Areas Protegidas y para su incorporación a un Sistema Nacional de Areas Protegidas;
- se compatibilizaron y articularon criterios para la gestión de áreas protegidas en jurisdicción federal y provincial, incluyendo la homologación de las categorías de manejo dentro del Sistema Nacional;

- se revitalizó el funcionamiento de la Red Nacional de Cooperación Técnica en Areas Protegidas, como instancia de cooperación y asistencia técnica entre organismos nacionales, provinciales, municipales y no gubernamentales;

- se mejoro la cobertura de los principales ecosistemas de cada bioregión del país, mediante el establecimiento de nuevas áreas protegidas, a nivel de eco-regiones y de sitios específicos. Se fomentaron estrategias bioregionales para la implementación de corredores ecológicos que aseguren la mayor conectividad posible entre las áreas protegidas, disminuyendo así los riesgos de insularización;

- se fomentó la creación de reservas en las cuales se compatibilicen la conservación con el uso sustentable, como zonas de amortiguación de las más estrictas, mediante la creación de reservas provinciales que configuren zonas de amortiguación en torno de los Parques Nacionales para perfeccionarlas como unidades de conservación de la biodiversidad. Ello incluye, en algunos casos, modelos tendientes a armonizar el uso de la propiedad comunitaria de la tierra por pueblos indígenas, a través del uso sustentable y la conservación de la biodiversidad;

- se fortaleció la capacidad de la APN en la gestión de áreas protegidas, capacitando al personal encargado de la planificación, administración y control de las áreas protegidas. Esto ha permitido reforzar los mecanismos de financiamiento estatal para las mismas, desarrollando estrategias de captación de fondos nacionales e internacionales;

- se perfeccionó la calidad del manejo de las áreas protegidas, acorde con los objetivos fijados al momento de su creación, mediante las siguientes acciones: mejoramiento de la gestión efectiva; elaboración y ejecución de Planes de Manejo para cada área protegida; incorporación de las Areas Protegidas al Plan Nacional de Manejo del Fuego; puesta en funcionamiento de mecanismos de consulta y participación en la gestión de los sectores interesados y de las poblaciones vecinas a las áreas protegidas; acuerdos institucionales entre organismos administradores de áreas protegidas, universidades, organismos de investigación, ONGs. y pueblos indígenas; programas de uso sustentable en las reservas de uso múltiple, o en zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas estrictas; realización de proyectos de investigación científica relevantes para el manejo de las áreas protegidas, en base a las necesidades detectadas durante la elaboración de los Planes de Manejo; realización de programas de monitoreo para cada área protegida y fortalecimiento de vínculos de cooperación con países limítrofes, con los que se comparten áreas protegidas fronterizas, a efectos de acordar pautas comunes para el manejo de las mismas;

- se fortalecieron los vínculos de la sociedad con las áreas protegidas, involucrando a las comunidades locales, creando canales para la participación de sus representantes en la gestión de las áreas protegidas;

- se incrementó la capacidad del organismo administrador, para difundir mensajes adecuados hacia los distintos sectores de la sociedad, transmitiendo información relevante sobre los logros y los beneficios del establecimiento y el correcto manejo de las áreas protegidas;

- se acrecentó la necesidad de desarrollar estudios de valoración económica y cultural de los bienes y servicios ambientales provistos por las áreas protegidas, difundiendo ampliamente las conclusiones de los mismos;

- se suscribieron convenios bilaterales entre la APN, con el Servicio de Parques Nacionales de EEUU, con la Agencia de Conservación de Nueva Zelanda y la Agencia de Conservación de Australia, con el objetivo de establecer entre los organismos, una relación de cooperación técnica y financiera, intercambio de experiencias en todos los ámbitos de la conservación y el manejo de recursos naturales y culturales, interpretación y educación ambiental, planificación, administración y capacitación en áreas protegidas. La conservación de los Humedales Altoandinos determinó la suscripción de un convenio de cooperación trilateral en el año 1999 entre APN, CONAF - Chile y PROMETA - Bolivia.

C.II.5. a. 1. Logros en planificación biorregional:

En los últimos años de la década se dieron los primeros pasos en materia de *planificación biorregional*. Esto también permitió avanzar sobre el concepto de Conservación de la Biodiversidad, no ya confinada a áreas protegidas aisladas, sino dentro de la planificación de *redes ecológicas* que aseguren la conectividad entre las AP.

La vanguardia en ese sentido la ha tomado la Provincia de Misiones, con la creación por ley del “*Corredor Verde Misionero*”, que abarca más de un tercio del territorio provincial, y constituye un órgano de aplicación con presupuesto propio, concediendo incentivos a 22 municipios involucrados.

En la actualidad, ya existen proyectos de *corredores ecológicos* basados en la planificación biorregional, con distinto grado de formulación (aún no en ejecución), incluidos algunos de alcance transfronterizo, A modo de ejemplo se citan los proyectos para la región de Las Yungas, con Bolivia; el del Gran Chaco, con Bolivia y Paraguay; el de los Bosques Patagónicos, con Chile; etc.

Nuevas áreas protegidas se han creado y se mantiene la tendencia sostenida que ya se verificaba desde los '70. La misma permitió acrecentar la superficie total protegida, bajo diversas categorías de manejo, jurisdicciones y tipos de administración, en 3,23 millones de ha, llevándola de 12,25 millones de hectáreas (4,39 % del territorio nacional) a 15,49 millones (5,55 %). Si bien faltan datos actualizados, puede referirse que dentro de tales porcentajes únicamente 1,5 % del territorio nacional, aproximadamente, pertenece a AP de protección total (categorías I, II y III, de la UICN) (ver Anexo D.II.5.).

En proporción a la situación preexistente, el crecimiento fue de un 35 % en el número de AP y de un 21 % en superficie (ver Anexo D.II.5.).

Se desagregan los datos globales según jurisdicción en el ANEXO audido. De los mismos surge que el crecimiento del número y la superficie de AP fue mayor en jurisdicción de los Estados provinciales, que en jurisdicción federal, a cargo exclusivo de Parques Nacionales.

Un 22 % contra 18 %, en términos de superficie. El crecimiento con relación al territorio del país fue llevar la superficie protegida, en jurisdicción provincial, de un 3,33 % del mismo (en 1990) a un 4,27 % (en 2000), y, en jurisdicción federal, de 1,05 % a 1,28 %.

La diferencia de ritmos de crecimiento se explica de acuerdo con lo previsto en la Ley de Parques Nacionales (N° 22.351). El procedimiento de creación de un AP federal requiere de una gestión político-legislativa compleja, entre la Nación y el Estado Provincial involucrado, aunque conlleva el mérito de una alta estabilidad legal, para el área protegida así constituida.

También se debe destacar que la mayoría de las 23 jurisdicciones provinciales arrastran hasta el presente un problema de fuerte carencia en el efectivo control de sus áreas protegidas, lo que marca un contraste grande con las de jurisdicción federal y las de ciertas jurisdicciones provinciales que son destacable excepción a la regla (ver Item Limitaciones).

C.II.5. a. 2. Logros en materia de planificación:

- Se desarrollaron acciones de planificación del Sistema, principalmente tendientes al fortalecimiento de la capacidad de manejo de las áreas protegidas mediante la formulación y actualización de Planes de Manejo y de Planes Operativos;

- se abordó recientemente, la planificación a escala regional, mediante acuerdos con las provincias, universidades y organismos de investigación;

- se constituyeron en el país 4 nuevas Reservas de Biosfera durante el período, con reconocimiento otorgado por el Comité MAB de la UNESCO: RB Yabotí (Pcia. De Misiones, 1995); RB Mar Chiquita (Pcia. De Buenos Aires), RB Río Teuquito (Formosa, 2000) y RB Delta del Paraná (Pcia. De Buenos Aires, 2000). Ver más detalles en el informe del Comité MAB Argentino.

C.II.5.a.3. Logros en materia de manejo y conservación de las AP:

Se avanzó en materia de manejo y conservación en las áreas protegidas del país. El subsistema bajo jurisdicción federal tiene un nivel de implementación alto (el 98 % de la superficie tiene controles reales), debido particularmente a que cada área tiene una asignación presupuestaria específica. La mayoría de las áreas protegidas de la Argentina se encuentran en las primeras fases de su consolidación. En general se observa un grado de implementación más completo sólo en algunos sistemas provinciales, tales como los de las provincias de Misiones, Córdoba, Mendoza y Chubut. Las áreas bajo jurisdicción federal, a su vez, sólo han alcanzado las últimas fases de desarrollo en aquellas áreas protegidas que fueron creadas en la etapa fundacional de la APN, tales como los Parques Nacionales Nahuel Huapi, Los Alerces, Lanín, Los Glaciares, Iguazu, El Palmar, donde se han profundizado vinculaciones con las comunidades circundantes;

C.II.5. a. 4. Logros en materia de usos de las AP:

Las tendencias históricas en el tipo de uso ligado a las diferentes categorías de manejo, se han acentuado en los años recientes. Principalmente, se ha profundizado el rol de varias AP como soporte de una creciente industria del turismo de gran escala en el país. Hay pocos, aunque significativos cambios, en el tipo de uso, donde la categoría de manejo así lo exige, y algunos resultados positivos en los esfuerzos por mejorar el tipo de uso permitido. Se describen a continuación las principales tendencias notadas al respecto:

Las AP de categoría II (Parques Nacionales y Provinciales) han tenido un incremento en materia de uso público, que es el único permitido en esa categoría. Especialmente los grandes Parques Nacionales de la región de los Bosques Andino-patagónicos y el Parque Nacional Iguazú, siguen teniendo en los últimos 10 años un crecimiento sostenido en la demanda turística y en los registros de visitantes. En otras regiones, varios Parques Nacionales (El Palmar, Chaco, Río Pilcomayo y Calilegua), y la Reserva Otamendi también incrementaron sus niveles de uso público. En algunas áreas ha aumentado notablemente, según comunicación verbal de personal de APN, el nivel de visita de pobladores de ciudades próximas a las mismas. Ello puede atribuirse, principalmente, a una mejora en los servicios y construcciones de atención al visitante (apertura de áreas de acampe, centros y senderos de interpretación, caminos, etc).

Un fenómeno similar se registró en otras AP de varias provincias con atractivos turísticos de gran categoría, entre las que se destacan las costeras de la provincia del Chubut y las montañosas de Mendoza (Parques Provinciales Aconcagua, Tupungato, etc.).

Relacionado con este fenómeno, las respectivas autoridades administrativas han mejorado la recaudación por derechos de acceso (mediante la construcción de centros de información y casetas de ingreso, y el aumento de las tarifas) lo que ha producido una gran mejora en el autofinanciamiento institucional.

Respecto de las mejoras relacionadas en el uso de recursos dentro de áreas de jurisdicción federal, se han obtenido diversos logros:

- Extracción total del ganado en el PN Río Pilcomayo (región del Chaco Húmedo);
- avanzada ejecución de un plan de relocalización voluntaria de pobladores del PN Chaco (de la misma región) fuera de los límites del parque;
- avanzadas gestiones legales para la entrega de las tierras a comunidades indígenas de la etnia Mapuche en sectores de la Reserva Nacional Lanín;
- progresos en planes de asistencia técnica en ordenación de la ganadería, conversión de esa actividad a la de prestación de servicios turísticos, relocalización de familias fuera de las AP, en varios PN de la misma región (Lanín, Nahuel Huapi, Los Alerces, Los Glaciares);
- progresos crecientes en materia de ecoturismo en las AP, que lo diferencian explícitamente del turismo de naturaleza clásico (montañismo, senderismo, ciclismo

todo terreno, canotaje, rafting). Este fenómeno se da también en áreas naturales no protegidas del país;

- la silvicultura de bosques naturales está ganando espacio de opinión, como alternativa viable para conservar porciones mucho más extensas de las eco-regiones boscosas, de lo que pueden abarcar las AP estrictas. Pero ello no se ha expresado en los años recientes en un incremento perceptible de la calidad y extensión de la ordenación de bosques.

C.II.5. a. 5. Logros en materia de conservación y manejo del patrimonio cultural:

La APN con la Secretaría de Turismo gestionó ante el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO la declaración de Sitio del Patrimonio Mundial Natural del Parque Nacional Talampaya conjuntamente con el Parque Provincial Ischigualasto, el que fue declarado en diciembre de 2000 como Parque Natural Ischigualasto-Talampaya. Asimismo intervino en la declaración de los sitios de Península de Valdez en Chubut y de las Cuevas del Río Pinturas en Santa Cruz.

Por primera vez dentro del sistema de áreas protegidas se ha desarrollado un registro nacional de recursos culturales y se ha elaborado y aplicado una reglamentación específica que regula la conservación, la investigación y el uso de los recursos culturales (arqueológicos, antropológicos e históricos).

C.II.5. b. Factores que contribuyeron a los logros:

- La proyección y aplicación por parte de la APN de los avances en materia de conservación, tanto en nuevos paradigmas, como de experiencias y conocimientos que formulan y acuerdan, en congresos internacionales, los organismos que lideran la conservación a escala mundial;

- la participación de la APN en las reuniones internacionales y comisiones que resultaron de los compromisos asumidos por Argentina en la Cumbre de Río;

- el sostenimiento, a lo largo del decenio en las políticas institucionales, de los nuevos criterios en conservación de áreas protegidas en lo atinente al desarrollo sustentable y a la incorporación de la dimensión social en los parques;

- la integración de los sistemas de áreas protegidas en el marco de los planes de desarrollo económico. Las AP son objeto de consideración en algunos planes sectoriales o provinciales; por ejemplo, la provincia de Misiones, de tradición eminentemente forestal, ha elaborado planificaciones preliminares del uso del territorio, en las que las AP de diversas categorías juegan un rol importante. De modo similar, la provincia de Chubut ha incluido en sus planes de desarrollo turístico a las AP;

- la asignación presupuestaria a la APN resultó un elemento determinante a pesar de que la misma es aún insuficiente;

- el incremento del presupuesto total de 262% en el primer quinquenio;

- las inversiones en equipamiento e inversión en infraestructura han pasado desde el 2% del presupuesto del organismo a casi 18%;
- el ingreso de fondos externos (Subsidio del GEF y en el corto plazo un préstamo del Banco Mundial), también reflejan un cambio en la estructura presupuestaria del organismo;
- los convenios de cooperación con organismos tanto en el plano nacional como internacional han resultado en un fortalecimiento de la capacidad de la APN para abordar la gestión de las áreas protegidas, a través de la asistencia técnica y de la capacitación del personal técnico y de guardaparques.

C.II.5. c. Limitaciones:

- Escaso apoyo internacional para la gestión de sus áreas protegidas debido a: las características bioregionales de Argentina; por ser un país con nivel de ingreso medio que no aplica para algunas modalidades de asistencia financiera; por carecer de prácticas habituales de búsqueda proactiva de financiación, que complementa el esfuerzo del Estado para financiar las actividades de conservación del país;
- **falta de mecanismos efectivos para la interacción y coordinación entre las diferentes organizaciones por cuanto no hubo esfuerzos desde el gobierno federal tendientes al fortalecimiento institucional de las administraciones provinciales de AP;**
- reiteradas medidas de ajuste fiscal que vinieron aplicándose durante el decenio en el país y se continúan. Como parte de estas medidas se toman los presupuestos ambientales, tanto de la Nación como de las Provincias, como variable de ajuste lo que afecta seriamente la constitución y la efectividad en el manejo de las AP;
- amenazas de diverso tipo sobre las áreas protegidas: como son las estrategias de desarrollo a escala regional que ponen en riesgo a las áreas protegidas: obras de infraestructura (represas, oleoductos, etc), actividades humanas como la introducción voluntaria o involuntaria de especies animales y vegetales exóticas, caza furtiva y captura para el mercado de especies protegidas, sobreutilización de los bosques, pastizales o estepas y actividades contaminantes de origen externo;
- falta de financiación adecuada para el sistema de AP, sea proveniente de los presupuestos públicos, como de la debilidad para generar fondos propios, procedentes del uso público u otras fuentes. Ello determina la incapacidad para mantener el personal e imposibilita la inversión en capacitación permanente acorde a los cambios locales y globales. La imposibilidad de mantener la infraestructura física y lograr un equipamiento mínimo operativo.

C.II.5. d. Metas y desafíos:

- Lograr una Estrategia Nacional de Areas Protegidas como política oficial dentro del marco de la Estrategia Nacional de Biodiversidad;

- institucionalizar un SISTEMA NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS, federal, fuerte y consolidado, administrado por la APN;
- mejorar la cobertura de la biodiversidad mediante la incorporación de nuevas AP en bioregiones no representadas dentro del sistema de AP;
- consolidar estrategias bioregionales de implementación de corredores ecológicos que aseguren la conectividad entre AP;
- aumentar la calidad y el flujo de información sobre AP y biodiversidad mediante bases de dato y sistemas de información geográfico;
- concretar la ampliación de AP poco representativas mediante la incorporación de zonas aledañas, o la creación de reservas provinciales o privadas;
- intensificar y mejorar la planificación del manejo de las AP;
- impulsar procesos de regionalización mediante la descentralización de la actual estructura de la APN, y modernizar el gerenciamiento, para fortalecer la gestión operativa de las AP;
- promover el uso público de las AP impulsando modelos de desarrollo de bajo impacto que diversifiquen la actual oferta potencial de las mismas;
- favorecer el desarrollo de modelos productivos sustentables en las zonas de amortiguación de las AP y en aquellas cuyas categorías de manejo lo admitan;
- asegurar que los beneficiarios directos de las AP sean las comunidades locales mediante la participación de las actividades económicas generadas por éstas;
- fortalecer los vínculos y compromiso de las comunidades locales con el objeto de que se transformen en agentes sociales de la conservación;
- crear un Fondo Nacional Ambiental, que incluya un capítulo destinado a la gestión de fondos para las AP;
- impulsar la sanción de leyes que establezcan incentivos económicos a la conservación y al uso sustentable en zonas de amortiguación;
- fortalecer vínculos de cooperación con los países limítrofes, con los cuales se comparten áreas protegidas fronterizas;
- lograr alternativas de financiación de AP no utilizadas en la actualidad: la retribución de servicios ambientales que prestan las AP; la expansión y diversificación de los servicios recreativos de las AP; el potencial de asistencia financiera de la actividad privada y ONGs.

C.II.6. Recursos Hídricos

C.II.6.a. Logros:

En los aspectos que se relacionan con el sector hídrico, los objetivos planteados por la Agenda XXI han sido incorporados en alguna medida en los planes y en las acciones de los miembros de las agrupaciones políticas, de los funcionarios de los organismos nacionales, provinciales y municipales, de los miembros de la comunidad científica y académica y en los campos de interés de la mayoría de los medios de difusión.

Sin embargo, debe señalarse el dispar avance registrado entre localidades y regiones y entre subsectores. Esto se debe básicamente a diferencias en capacidades y en recursos.

No obstante, los principales logros alcanzados hasta el presente están relacionados con objetivos instrumentales, los cuales son una condición previa a los objetivos finales de la Agenda XXI.

En tal sentido se señalan los siguientes:

- Se hicieron importantes progresos en la conformación de nuevas organizaciones de cuenca y en la transformación de las existentes, en estructuras más participativas;
- se avanzó en las negociaciones con las provincias, para la creación de un Consejo Federal del Agua;
- se incrementó la coordinación de los planes hídricos nacional y provinciales;
- se avanzó lentamente, en los diferentes niveles de gobierno, en materia de planeamiento estratégico, tales como: priorizar los procesos de planificación; promoción de organizaciones de cuencas; jerarquización institucional del sector; actualización de las legislaciones; acceso a tecnologías informáticas y capacitación de recursos humanos;
- se comenzó a establecer la búsqueda de consenso para la toma de decisiones, inclusive se han implementado algunas audiencias públicas con el fin de hacer efectiva la participación ciudadana directa o a través de la consulta a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales (ONGs);
- se consiguieron algunos cambios en la financiación de la gestión y conservación del recurso, a través de financiamiento privado, (cánones, tarifas o tasas de vertido por parte de los usuarios);
- se esta logrando financiamiento público cuando los costos no pueden recuperarse con cargo a los usuarios;
- se avanzo en el financiamiento internacional para programas o proyectos de alcance local, regional, nacionales o internacional;
- se logró cierto financiamiento voluntario, contribuciones en dinero, asistencia técnica o transferencia de tecnología de instituciones o empresas internacionales o

nacionales; las principales fuentes de financiamiento del sector de saneamiento son: recursos genuinos aportados por las empresas concesionarias de servicios y recuperados posteriormente a través de la recaudación por tarifas; aportes de los presupuestos nacional y provinciales; préstamos de los organismos multilaterales de financiamiento y recursos aportados por los directos beneficiarios de las obras de infraestructura de saneamiento;

- se lograron cambios respecto de la descentralización de la gestión del recurso. Ello se debe a que la Constitución Argentina establece el sistema federal de gobierno, en virtud del cual las 23 Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituyen instancias autónomas que se reservan para sí todos los poderes y atribuciones no delegados expresamente en el gobierno federal;

- se revalorizó la necesidad de consenso entre el Estado Nacional y los Estados Provinciales, respecto de los roles y funciones que respectivamente le corresponden en la administración de los recursos hídricos. También se fortaleció el rol de los municipios en materia de gestión de los recursos hídricos;

- se aumentó el proceso de regionalización a través de organismos interjurisdiccionales de cuenca. En la actualidad, se encuentran operativos cinco organismos con distintas funciones y alcances: la Comisión Regional del río Bermejo, constituida en 1981, el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado, formalizado en 1977, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuenca de los ríos Limay, Neuquén y Negro, creada en 1985, la Comisión Interjurisdiccional de la laguna La Picassa y el Comité de Cuenca del río Azul;

- se avanzó en la actualización de la legislación hídrica y en la organización del sector hídrico en las provincias;

- se crearon organismos reguladores de los servicios de agua otorgados en concesión y se avanzó en la coordinación de sus criterios;

- se crearon organismos encargados de promover la seguridad de las presas;

- se logró una buena respuesta política, impulsada por la Nación, para promover una mayor cooperación entre organismos nacionales y provinciales, en los temas relacionados con la gestión del agua;

- se incrementó la exigencia de realizar Estudios de Impacto Ambiental, en todos los proyectos que puedan afectar la calidad del agua o el ambiente, en las diferentes jurisdicciones;

- se mejoró la organización de la respuesta rápida ante accidentes de contaminación de las aguas navegables;

- se extendió la cobertura de las redes de provisión de agua potable y de saneamiento y existen planes para avanzar más en este sentido;

- se impulsó la construcción de plantas de tratamiento y la imposición, en el nivel provincial y municipal, de restricciones a las actividades que contaminan las fuentes de agua;

- se alcanzaron algunos progresos en la difusión de una conciencia hídrica;

- se incrementó el interés por lograr avances en el conocimiento y en las técnicas de gestión, destinados a permitir o facilitar el uso sustentable del agua, en los trabajos de investigación en los ámbitos académicos e institutos especializados del sector público;

- se logró recientemente, mediante Decreto N° 148/01, la transferencia de la Dirección de Control de la Contaminación del INA, a la SDS y PA del MDS y MA. A través de esta transferencia de competencias, cargos, dotación de personal, créditos presupuestarios y bienes patrimoniales al máximo organismo ambiental, se espera revertir la actual dispersión de competencias y lograr una gestión más eficiente en materia de prevención y control de la contaminación del recurso.

C.II.6.b. Factores que contribuyeron a los logros:

- La reforma de la Constitución Nacional de 1994, al ratificar que las provincias tienen el dominio originario de sus recursos naturales, y entre ellos el del recurso hídrico, ha estimulado un mayor compromiso de las autoridades provinciales con la gestión del agua;

- el fortalecimiento del organismo ambiental del Gobierno Nacional, en el presente situado en el MDS y MA, ha complementado el trabajo que realiza la Subsecretaría de Recursos Hídricos para promover una gestión ecológicamente racional del agua. En muchas provincias y municipios la creación de la competencia ambiental ha tenido un efecto similar;

- las evidencias de focos de creciente contaminación y de la degradación del recurso, han sido difundidas por los medios con una precisión y detalle cada vez mayor, lo que ha estimulado una creciente conciencia sobre la necesidad de tomar medidas para asegurar un uso sustentable del recurso;

- la difusión de nuevas técnicas de gestión, basadas en enfoques participativos orientados a promover la cooperación, han facilitado la difusión de las organizaciones de cuenca y otras formas asociativas que tradicionalmente han sido importantes para asegurar la continuidad, y por lo tanto, la sustentabilidad de las políticas y de los planes hídricos;

- la creciente importancia del turismo y la recreación, como actividades generadoras de empleos, ha dado impulso a las iniciativas dirigidas a promover un uso sustentable del agua. Ha tenido un impacto similar la nueva tendencia al desarrollo local, que ha inducido a los gobiernos locales a seguir políticas sustentables como requisito para atraer nuevas radicaciones de actividades generadoras de empleo;

- las Bases de la Política Ambiental para la República Argentina, aprobada por Resolución N° 311/99 de la entonces SRN y DS de la Nación. El mencionado

instrumento, sentó las bases para la implementación de un futuro planteamiento estratégico. Por su intermedio, se definieron dos objetivos de carácter general. El primero fue establecer un proceso de planificación de la gestión que lleve progresivamente a la participación interactiva de todos los involucrados para lograr su perfeccionamiento y el segundo propuso desarrollar acciones para solucionar los problemas críticos y formuló los objetivos y acciones sectoriales de la política ambiental para las distintas áreas de acción y otras acciones transversales para la totalidad de las áreas temáticas.

- las áreas de acción política que involucran actividades para el sector, se realizaron en el marco de la Gestión Integral de los Recursos Hídricos y Prevención y Control de la Contaminación y Recuperación de la Calidad Ambiental de los Asentamientos Humanos, las cuales se detallan en el ANEXO D.II.6.

C.II.6.c. Limitaciones:

- Marcada disminución de la capacidad de los organismos nacionales y provinciales para mantener la infraestructura hídrica, que comprende tanto las obras civiles como las redes hidrometeorológicas, las instalaciones, el equipamiento para la investigación y la formación de especialistas. Esta disminución es el resultado de muchos factores relativamente independientes entre sí, por lo cual su solución no es fácil. Aún así, está claro que para resolverlo será imprescindible promover una mayor conciencia hídrica en todos los niveles de gobierno, para procurar una mayor canalización de recursos nacionales, provinciales y municipales hacia el mantenimiento de la infraestructura;

- falta de mayor conciencia hídrica entre la población, dado que esto es también indispensable en muchos casos para que los usuarios o vecinos de las obras hídricas las cuiden en lugar de dañarlas;

- inadecuada gestión del agua subterránea, que dificulta las acciones dirigidas a conservar el recurso. También en este caso es importante dar más impulso a la promoción de una mayor conciencia hídrica, con el fin de facilitar a los diferentes niveles de gobierno la imposición de sistemas de gestión que pueden ser resistidos inicialmente por los afectados directos; a ello se agrega que la deficiente gestión del agua subterránea es otro factor que explica en parte la falta de coordinación entre la expansión de las redes de agua potable y las redes de recolección de aguas servidas, contribuyendo a la contaminación de los acuíferos y a menudo a un ascenso perjudicial de la freática;

- Disparidad normativa entre las diferentes jurisdicciones, en materia de ordenamiento territorial, entre otras medidas no estructurales. Por ello, en muchos casos resulta difícil promover la instalación de sistemas de prevención y el uso de mapas de riesgo, con el fin de asegurar la sustentabilidad de la infraestructura y evitar o mitigar daños causados por eventos extremos.

C.II.6.d. Metas y Desafíos:

- Impulsar las acciones del Plan Federal de Infraestructura, en lo referente a la canalización del financiamiento del sector privado y del Estado Nacional, hacia obras prioritarias en las provincias en el campo hídrico, particularmente orientadas al

saneamiento ambiental y a obras para la prevención de daños por inundaciones, tal como se acordó con los organismos de cuenca interjurisdiccionales;

- apoyar y asistir técnicamente a las organizaciones de cuenca, promoviendo la creación de organizaciones de base y de nuevos comités;

- promover la coordinación entre los planes hídricos de la Nación y las provincias, a través del Plan Maestro de Gestión de los Recursos Hídricos;

- crear un Consejo Federal del Agua, mediante acuerdos con las provincias sobre Principios Rectores de la Política Hídrica;

- coordinar un Plan Nacional, cuya implementación se deberá efectuar en el ámbito local, para la difusión de una mayor conciencia hídrica;

- fortalecer la gestión del agua subterránea;

- aumentar la capacidad de los organismos provinciales vinculados con el agua, para que puedan mantener la infraestructura hídrica en forma adecuada. Esto implica crear condiciones que permitan realizar los estudios y proyectos que sean necesarios para acompañar el crecimiento de la población y de las actividades económicas y sociales. Así también será necesario fortalecer su capacidad técnica, su equipamiento y su capacidad económica para contratar trabajos. Paralelamente, deberán reforzarse los procedimientos de gestión y de control de esas actividades;

- avanzar rápidamente en la promoción de sistemas de gestión de aguas subterráneas, con el fin de evitar procesos irreversibles de contaminación;

- asignar más recursos al saneamiento urbano y en particular a la recolección y tratamiento de aguas servidas. También es importante promover la reconversión de las industrias que no están en condiciones económicas de tratar sus efluentes contaminantes;

- acelerar la implementación del Plan para promover una mayor conciencia hídrica;

- Promover la creación de organizaciones de cuenca que promuevan el compromiso de los usuarios y vecinos con la protección de las obras que son acordadas en los comités de cuenca interjurisdiccionales;

- Avanzar en la determinación de objetivos de calidad del agua, que sirvan de base para las normas complementarias de alcance local y provincial;

- Acordar con las provincias procedimientos para la selección y evaluación de proyectos de interés general.

C.II.6.1. Recursos Hídricos – Saneamiento Básico:

La población que carece de un abastecimiento seguro de agua y de un saneamiento adecuado de sus excretas, asociado a un bajo nivel socioeconómico, constituye la población vulnerable al riesgo sanitario, o sea con mayor exposición a contraer enfermedades relacionadas con el agua.

Asimismo, la población que recurre a soluciones individuales tanto para la extracción de agua subterránea como para la colección de sus excretas, es considerada como población en riesgo sanitario, dado que frecuentemente estos sistemas individuales no reúnen las condiciones mínimas de seguridad sanitaria, por funcionamiento inadecuado, falta de mantenimiento o por la contaminación de las napas subterráneas.

La población con situaciones deficitarias en servicios de agua potable y saneamiento, en particular la primera, se considera “población en riesgo sanitario” o expuesta a contraer enfermedades relacionadas con el agua, situación que se ve agravada por el hecho que alguna de ellas se localizan en áreas de alta incidencia de estas enfermedades o bajo riesgo colérico.

Las enfermedades de origen hídrico más frecuentes en la Argentina son las gastrointestinales agudas, la paratifoidea, la fiebre tifoidea, las parasitosis intestinales, el arsenicismo, la fluorosis y la metahemoglobineamia.

Las malas condiciones de abastecimiento de agua potable, especialmente en la población de bajos recursos, contribuyeron al brote de cólera ocurrido en 1992.

Las pequeñas comunidades aborígenes o rurales que no disponen de una provisión de agua segura y que se abastecen directamente de las fuentes naturales, registran una mayor incidencia del cólera y tifoidea. De este modo se evidencia el grado de contaminación de las fuentes de agua, provocada en parte por una inadecuada disposición de las excretas de muchas comunidades y también por la falta de sistemas de depuración de los efluentes cloacales de las localidades ribereñas, aun las que se encuentran más allá de la frontera del país.

Las enfermedades hídricas vinculadas a sustancias tóxicas de origen industrial (contaminación de agua por derrame de petróleo), son de muy dificultosa identificación ya que su notificación, en el caso que se realice, queda enmascarada con otras patologías notificadas.

Las enfermedades hídricas de origen natural, tales como el Arsenicismo, la Fluorosis Ósea y la Fluorosis Dental, manifiestan una baja incidencia en la población argentina.

La situación ambiental en la Argentina evidencia procesos de deterioro más graves de lo esperable para un país de desarrollo mediano, que en algunos casos determinan condiciones críticas en la calidad de vida de la población. Gran parte de estos problemas son el resultado, principalmente, de una forma de ocupación del territorio que no tuvo en cuenta sus restricciones y potencialidades, junto con un marco de reglamentación demorado e inadecuado y un déficit de décadas en materia de infraestructura sanitaria y de tratamiento de excretas.

Como consecuencia de una fragmentación de responsabilidades institucionales y falta de coordinación, se ha producido un marco institucional y regulatorio confuso para la gestión ambiental del sector.

La contaminación de las aguas subterráneas es uno de los principales problemas debido a la exposición a los riesgos de salud de gran parte de la población, que depende del agua subterránea para sus necesidades diarias. Como en las zonas urbanas, los pozos absorbentes son una de las fuentes principales de contaminación, la solución más efectiva es promover la expansión de los servicios de saneamiento a los barrios de bajos ingresos y áreas periurbanas que en la actualidad no lo reciben.

La contaminación de las aguas superficiales proveniente de las aguas residuales industriales y de los efluentes cloacales sin depurar, son una de las causas de pérdida de espacios para la recreación y daños ecológicos en las principales áreas urbanas y varios lagos interiores. En Rosario y Córdoba los cuerpos de agua se han contaminado al punto de afectar la operación de las plantas potabilizadoras.

Los problemas de contaminación no son insuperables, pero deben adoptarse medidas correctivas antes que el problema alcance niveles de mayor gravedad, ya que si se continúa con la urbanización y la industrialización, aumentará la amenaza para la salud pública y posiblemente afectará las exportaciones como resultado de los requerimientos impuestos por los países importadores.

De acuerdo a la Secretaría de Salud Pública, en 1997 la esperanza de vida al nacer era de 73,13 años y la tasa de mortalidad infantil (menores de 1 año) era del 18,8‰ de los nacidos vivos, en tanto que la tasa de mortalidad de menores de cinco años era del 22 ‰ de los nacidos vivos.

Las diarreas son la enfermedad de origen hídrico más frecuente en el país, evidenciando una incidencia de 0,067 episodios por año en los niños menores de cinco años, considerados como la población más vulnerable. Las muertes por enfermedades diarreicas en esta población son producidas, en general, por episodios de diarrea prolongados que dan lugar a deshidrataciones, que se agravan de acuerdo al microorganismo infeccioso, la intensidad de la infección, la edad y el estado nutricional e inmunidad del niño.

El cólera reapareció en el país en el año 1992, especialmente entre la población de escasos recursos económicos, de las Provincias de Salta y Jujuy, que carecían en general, de servicios de agua potable y saneamiento.

La enfermedad fue paulatinamente controlada, disminuyendo desde 2080 casos en 1993 a 188 en 1995, para luego incrementarse a 424 casos en 1996 y 639 casos en 1997, de los cuales el 66 % se registraron en Salta y el 19 % en Jujuy (Ministerio de Salud, 1997). Esta situación estimuló la realización de grandes inversiones en mejoras y expansión del abastecimiento de agua potable y saneamiento en las mencionadas provincias.

Las pequeñas comunidades aborígenes o rurales carentes de un acceso a agua segura y que se abastecen directamente de las fuentes naturales, registran una mayor incidencia del cólera y tifoidea, poniendo en evidencia el alto grado de contaminación de las aguas, provocada por una inadecuada disposición de los efluentes de las comunidades y por la carencia de tratamiento de los efluentes cloacales de las localidades ribereñas.

La educación para la salud, junto con los conocimientos ambientales brindados a los niños en las escuelas, tienden a promover la toma de conciencia, el espíritu crítico y actitudes que se evidencian en el comportamiento de los niños ante ciertos problemas del ambiente, del saneamiento y de la salud humana.

C.II.6.1. a. Logros:

- En 1991, la población total urbana era de 28.432.863 habitantes. En dichas áreas (en el nivel nacional) la cobertura de los servicios de agua potable era de aproximadamente 77 %, mientras que la cobertura de desagües cloacales, era de aproximadamente 40 %;

- en 2001, la cobertura de los servicios de agua potable en el nivel nacional es de aproximadamente 84 % en áreas urbanas, mientras que la cobertura de desagües cloacales es de aproximadamente 54 %, para una población total urbana de 32.650.272. En consecuencia, la población actualmente servida con agua potable resulta de 27.317.735 habitantes y para el servicio de desagües cloacales, de 17.628.544 habitantes.

- En materia de gestión se separaron los roles de gestión del servicio vs. regulación y control;

- en materia de planificación estratégica se posibilitó la planificación a largo plazo;

- en lo referente a la calidad del recurso, se aumentó el control de la misma;

- el Estado redujo su requerimiento de fondos para inversión pública y dejó la actividad de gerenciamiento para la que no cuenta con una organización adecuada.

C.II.6.1. b. Factores que contribuyeron a estos logros:

- Se pusieron en marcha en todo el ámbito nacional, a través del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA, ex- COFAPyS / SNAP), programas de inversión de optimización y expansión de los servicios con asistencia crediticia internacional de los Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Mundial (BIRF) a través de los Programas BID V, VI y 3281 respectivamente;

- se comenzó un amplio proceso de concesiones y privatizaciones de la prestación de los servicios de agua potable y desagües cloacales, en el nivel regional, provincial y municipal, a partir de 1989 mediante la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado y la Ley N° 23.697 de Emergencia Económica,;

- se creó y se puso en operación el Sistema Permanente de Información de Saneamiento (SPIDES), que es la única base nacional pública de información sectorial que contribuye a la planificación de las políticas sectoriales y a la información general vía Internet;

- se constituyó el COFESA (Consejo Federal de Saneamiento) integrado por las jurisdicciones provinciales, donde se intercambian datos y experiencias de los programas del sector;

- se produjo, en la década de los 90', un proceso de transformación institucional del sector agua potable y saneamiento de la Argentina, fuertemente promovido desde el Estado Nacional, que consistió en traspasar el gerenciamiento y administración de los servicios al sector privado, de modo de superar las ineficiencias en el manejo de la administración estatal;

- se produjeron cambios en los mecanismos de toma de decisiones. En este modelo, al Estado le correspondió el papel fundamental de ser el responsable de la formulación de las políticas sectoriales, la regulación y el control de las concesiones, tareas que no fueron cumplidas en su totalidad, motivado probablemente, en la urgencia por concretar el traspaso de los servicios, sin considerar un tiempo necesario para la planificación y estructuración de los mecanismos de regulación y control apropiados.

C.II.6.1. c. Limitaciones:

- No hay una incidencia directa del aumento de cobertura en toda la población del área geográfica, pues se concentra la expansión de los servicios en los sectores de mayor ingreso;

- se generaron fuertes aumentos tarifarios para financiar las obras de extensión de las redes;

- la prestación de los servicios del sector agua potable y cloacas en los centros urbanos se gestiona mayoritariamente mediante la actividad privada y no existen planes para atender las zonas rurales ni las zonas carenciadas;

- el marco jurídico del sector no cubre la totalidad de los aspectos que hacen al mejoramiento de la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios, a la protección ambiental, a la ejecución y financiamiento de las inversiones, a la aplicación de regímenes tarifarios eficientes y a sistemas de subsidios equitativos y eficaces que consideren objetivos sociales;

- los entes reguladores, en general, focalizan su accionar en el control de los contratos, en desmedro de la regulación del servicio a través de incentivos, o sea, controlan los medios más que los objetivos de la regulación;

- la marcada debilidad en la falta de financiamiento genuino para las inversiones básicas requeridas para mejorar la situación del sector, que inciden en el mantenimiento de la infraestructura;

- no hay interés por parte de las empresas concesionarias por expandir, a corto plazo, el servicio a las zonas de baja o nula rentabilidad empresarial, para lo cual se deben crear incentivos económicos a las empresas para que realicen inversiones en esas zonas no rentables;

- la infraestructura básica de los servicios en numerosas regiones del país se caracteriza por un marcado deterioro, un funcionamiento ineficiente, un mantenimiento inadecuado y pérdidas significativas en las redes de distribución;

- los sistemas de información sectorial son incompletos y dificultan una identificación precisa de los problemas y necesidades del sector, tanto en el ámbito nacional como provincial.

C.II.6.1. d. Metas y Desafíos:

- Avanzar hacia las más eficientes formas de administración de los servicios y hacia mecanismos más eficaces de control y regulación;

- fortalecer la organización institucional del sector dado que se halla inmersa en un proceso de adaptación a un mercado cada vez más exigente y al incremento de la participación del sector privado;

- redefinir el papel de las administraciones en las provincias, con el objeto de fortalecer la formulación de políticas de planificación y de regulación de los servicios;

- avanzar hacia las más eficientes formas de administración de los servicios y hacia mecanismos más eficaces de control y regulación;

- aplicar recursos y esfuerzos para la concreción de sistemas de saneamiento en las zonas marginales;

- poner en marcha el programa PROSAC para atención de la población carente urbana y rural;

- preparar programas de apoyo directo a los diferentes prestadores para atender problemas puntuales de operación, mantenimiento y extensión de redes, que incluyan otras modalidades de gestión institucional diferentes de la concesión a la actividad privada;

- apoyar la inversión en infraestructura necesaria para garantizar la prestación universal de los servicios de saneamiento, cuantificando los costos y los beneficios para la población;

- mejorar la asignación de recursos para un desarrollo eficiente de la gestión de los servicios;

- apoyar una mayor participación de los usuarios;

- revisar las componentes impositivas en los aspectos tarifarios;

- interrelacionar la prestación del servicio de agua y saneamiento con los aspectos de salud pública de los habitantes y los aspectos ambientales;

- impulsar fuertemente la ampliación de la cobertura a los sectores más desfavorecidos social y económicamente, que han quedado al margen del proceso de transformación: localidades sin sustento económico, sectores urbanos marginados y sectores rurales;

- propiciar la provisión de los servicios de agua potable y cloacas en forma simultánea y la superación de los déficits de saneamiento en la población servida solamente con agua potable;
- promover la expansión de los servicios asegurando la calidad de los productos y las prestaciones que se brinden;
- establecer e implementar criterios y acciones de planificación sectorial, ampliando las fuentes de financiamiento;
- propiciar regímenes de regulación y control que preserven equilibradamente los derechos y obligaciones de usuarios, prestadores y órganos públicos involucrados;
- apoyar la integración y participación de empresas privadas, cooperativas, entidades comunitarias y trabajadores de la actividad, en la gestión de los servicios y en el financiamiento para su optimización y crecimiento;
- apoyar y fortalecer los pequeños y medianos emprendimientos;
- promover la conciencia sobre la contribución de los servicios de agua potable y saneamiento, como una de las herramientas eficaces para la protección del ambiente y el desarrollo sustentable.

Respecto de la cobertura de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, la misma se describe en el ANEXO D.II.6.1.

C.II.7. Biodiversidad:

C.II.7.a. Logros:

- Elaboración del Documento Base para la Estrategia Nacional de Desarrollo Sustentable la cual se acompaña en el ANEXO D.II.7.;
- Proyecto de Acuerdo Marco de Cooperación sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación de los Beneficios. Este fue acordado en el ámbito de la XXIX Asamblea Ordinaria del COFEMA, realizada en la ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el 29 y 30 de noviembre de 2000, por los representantes provinciales ante dicho organismo. Actualmente se espera que el aludido instrumento, sea suscrito por los gobernadores provinciales;
- elaboración del Documento Base para la Estrategia Nacional de Biodiversidad.

No obstante los logros enunciados cabe remarcar que asistimos a un grave proceso de pérdida de la diversidad biológica en todos sus niveles y en todas las regiones del planeta, principalmente motivado en la acción antrópica, generadora de una creciente degradación y destrucción de los hábitats naturales.

La situación resulta de tal gravedad, que ya muchos investigadores nos advierten

que de continuar al ritmo actual, la mitad de las especies de plantas y animales habrán desaparecido hacia finales del siglo 21.

Es por tal razón que, notoriamente en los últimos tiempos, ha despertado en el mundo una conciencia sobre la importancia de la conservación de la diversidad biológica, como así también respecto de lo erróneo de aquellas concepciones según las cuales, la naturaleza resulta una fuente de suministros infinita de recursos físicos y como un infinito sumidero de los subproductos del desarrollo y del consumo de esos beneficios.

En tal marco, resulta evidente que existe una seria preocupación sobre el peligro que corre la diversidad biológica en nuestro país que, lamentablemente, no constituye una excepción al grave proceso antes descrito.

Frente a esta situación y en el campo conceptual, en consonancia con lo acordado en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica, en nuestro país se aborda el problema de la conservación, privilegiando una aproximación ecosistémica, que en consecuencia acentúa la necesidad de promover el manejo sustentable de los ecosistemas.

Es en este contexto que se inscriben los siguientes cinco Planes Nacionales: de Lucha Contra la Desertificación; de Conservación de Suelos; de Conservación y Manejo de Vida Silvestre; Forestal Argentino; y de Conservación de los Ecosistemas Acuáticos; dentro de los cuales se desarrollan 11 Programas y 5 Subprogramas, con sus respectivas acciones y proyectos.

Todas las acciones previstas en los planes, programas y proyectos desarrollados en los ANEXOS D.II.1. al D.II.7. encuentran coherencia y coordinación en la Estrategia Nacional para un Desarrollo Sustentable.

Por otra parte, existen otros organismos del Estado Nacional que desarrollan acciones, planes, programas y proyectos que persiguen los objetivos antes señalados, tales como, entre otros: la Administración de Parques Nacionales; el INTA; la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y los organismos de investigación, (también ya descritos en los ANEXOS D.II.). Dichas acciones constituyen en su conjunto un sistema nacional para la conservación y utilización sustentable de la diversidad biológica.

C.II.7.b. Limitaciones:

La amplitud y complejidad implícita en el concepto mismo de diversidad biológica, a lo cual se agrega la amplitud y complejidad que plantean su conservación;

La utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, plantean problemáticas y limitaciones, muchas de las cuales se tratan en este informe al analizar el marco general o en mayor detalle al efectuar los análisis sectoriales; es por ello que aquí nos limitaremos a mencionar solo aspectos centrales y globales.

En ese contexto, se puede afirmar que una limitante central resulta la falta de un

adecuado nivel de coordinación de esfuerzos, tanto los señalados en el punto anterior, como muchos otros existentes en los ámbitos públicos y privados; como así también, resulta otro factor limitante, carecer de un mecanismo participativo activo y continuado, que defina y guíe la puesta en práctica de una Estrategia Nacional en la materia.

Si bien, al formular el proyecto de Estrategia Nacional de Biodiversidad se logró generar un importante nivel de participación, el proceso no logró mantenerse en el tiempo y por otra parte, pese a haberse creado en 1997 la Comisión Nacional Asesora para la Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica; nunca se logró constituirla.

C.II.7.c. Metas y Desafíos:

Tal como se detalla en el Documento: “Estrategia Nacional de Biodiversidad de la República Argentina” el cual se ha incorporado a los ANEXOS, los elementos sobresalientes de la visión a futuro son los siguientes:

- Que la diversidad biológica de la Argentina contribuya al bienestar de la sociedad, a partir del mantenimiento tanto de la riqueza biótica del país en sí, como de los múltiples servicios que ella presta a las actividades humanas;
- conservar la biodiversidad a nivel de genes, especies, hábitats y ecosistemas, para contribuir al mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales;
- respetar la variedad de cosmovisiones que tienen los diferentes sectores de la sociedad sobre la diversidad biológica y sus componentes;
- garantizar que el aprovechamiento de los recursos biológicos se haga en base a modalidades de manejo sustentable;
- promover instrumentos que garanticen una distribución justa y equitativa de los beneficios económicos derivados de dichos usos;
- fortalecer las capacidades nacionales, tanto a nivel de recursos humanos como de las instituciones, para el logro de estos objetivos;
- desarrollar una activa coordinación y cooperación a nivel internacional.

Por otra parte y en función de las limitantes antes señaladas, nos encontramos inmersos en el proceso de elaboración del “Segundo Informe Nacional sobre Diversidad Biológica” y el “Informe Temático sobre Ecosistemas Forestales”.

Ambos informes han sido requeridos por la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica y su elaboración se realiza con la activa participación de una amplia gama de interesados, de forma de asegurar un enfoque participativo y transparente del proceso, el cual incluye la realización de un Taller Nacional.

C.II.8. Bioseguridad

En Argentina a partir de 1991 comienza a generarse interés, por parte de compañías internacionales y de grupos de investigación nacionales, para la realización de ensayos con organismos genéticamente modificados, dado que la biotecnología se convirtió en una herramienta técnico-científica fundamental para diversas áreas, incluyendo las de la salud y de la alimentación.

Durante los diez últimos años se ha trabajado en desarrollos tecnológicos originados en Universidades Nacionales e Institutos de Investigación. Hasta la fecha, son tres los cultivos genéticamente modificados que se comercializan en nuestro país y que tienen posibilidad de exportarse: soja, maíz y algodón.

Desde 1991 la CONABIA ha evaluado las solicitudes de experimentación con material transgénico, analizando cada caso presentado. La experiencia indicó la necesidad de elaborar reglamentación específica con los requisitos técnicos y de bioseguridad que debe reunir la Experimentación y/o Liberación al Medio, tanto de Organismos Vegetales Genéticamente Modificados, como de Microorganismos Genéticamente Modificados y/o sus productos para aplicaciones en animales.

En el ANEXO D.II.8. se efectúa una síntesis de las principales regulaciones vigentes en la materia, como así también los programas, proyectos y actividades desarrolladas por la CONABIA.

C.II.8. a. Logros:

En el presente ítem se describen los principales logros alcanzados por el país, en materia de organismos genéticamente modificados, en el marco de los acontecimientos recientes, de las tendencias internacionales sobre la producción, industrialización y comercialización de OGMs y con relación al grado de aceptación del consumidor:

- La Argentina se ha beneficiado de esta nueva tecnología, en particular en el mejoramiento de semillas. lo que le ha permitido convertirse en el segundo exportador de soja y en uno de los principales productores de aceite vegetales en el mundo. Esto equivale a aproximadamente 10.000 millones de U\$S en concepto de exportaciones por año (1999);

- la Argentina aprobó el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad, en febrero de 2000, firmándolo en Nairobi, en el mes de mayo de 2000, como un compromiso entre los diferentes intereses involucrados.

- La Argentina ha avanzado en la aplicación de la biotecnología y en el Establecimiento de los resguardos necesarios para evitar daños al medio ambiente y a la salud humana. Estos esfuerzos se han realizado por parte de algunos organismos del sector público tales como: la Secretaría de Agricultura, la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA), la Secretaría de Ciencia y Técnica, la Universidad, el INTA y el CONICET y el sector privado (industria farmacéutica y de semillas);

- la Argentina, por ejemplo, en el caso de la liberación al medio ambiente de semillas transgénicas, ha mantenido una política de mayor cuidado ambiental que Estados Unidos, al establecer a través de la CONABIA, normativa al respecto en 1991;

- la Argentina es el primer país en desarrollo que cuenta con una institución como la CONABIA, que regula el uso seguro de la biotecnología en el campo agrícola. Dicho organismo no sólo ha autorizado la introducción de variedades transgénicas de soja, maíz y algodón, también ha debido desautorizar la comercialización de colza/canola transgénica porque su liberación al ambiente podría producir daños graves. Este es un ejemplo práctico de aplicación del “enfoque precautorio” que luego se incluyó en el Protocolo de Cartagena;

- la Argentina no solo tiene en cuenta las recomendaciones de la CONABIA, sino también las opiniones de otras direcciones de la Secretaría de Agricultura, las cuales analizan, entre otros, los aspectos comerciales de las variedades que se liberan, por ejemplo, La Secretaría de Agricultura no ha autorizado la liberación de variedades transgénicas, especialmente de maíz, que no estuvieran en el mercado de semillas de la Unión Europea. Esta estrategia no la siguió Estados Unidos, por lo cual embarques de granos provenientes de variedades de maíz no autorizada para su liberación, fueron rechazados por la Unión Europea;

- en Argentina el rol de los consumidores comienza a tener relevancia ya que, como a los europeos, les preocupa el contenido de los alimentos que contienen OGMs. Esto lo ha detectado la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de las preguntas que los ciudadanos de la ciudad realizan a dicha Defensoría, buscando información sobre los posibles efectos de los alimentos transgénicos. En razón de lo expresado, la confección y distribución de información apropiada sobre la biotecnología, es fundamental para que el consumidor tome decisiones sobre el uso o no de alimentos con ingredientes transgénicos. La tarea de informar es otra de las obligaciones del Estado, la cual debe permitir crear una opinión pública con capacidad de decidir sobre el uso de bienes y servicios generados a partir de la biotecnología. En ese sentido, el grupo técnico sobre calidad de alimentos establecido en la mencionada Defensoría, es un ejemplo de las modalidades que se podrían poner en marcha para responder a las preocupaciones de la sociedad civil, sobre los diferentes aspectos de la aplicación de la biotecnología.

C.II.8. b. Limitaciones:

- Campañas ambivalentes y distorsivas. La biotecnología utilizada para la alimentación, es objeto de un progresivo cuestionamiento por parte de organizaciones no gubernamentales y asociaciones de consumidores. Los Estados miembros de la Unión Europea por ejemplo, han influenciado sobre sus respectivas opiniones públicas en contra de los alimentos que incluyen OGMs, como una estrategia comercial para defenderse en un mercado donde se están quedando progresivamente en desventajas, en gran parte, como consecuencia de su política de subsidios a la agricultura;

- escaso desarrollo de una política intersectorial al más alto nivel de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, para incentivar la biotecnología con los resguardos al ambiente y a la salud humana correspondientes;

C.II.8. c. Metas y Desafíos:

En lo relativo a la comercialización de OGMs. el mayor desafío es el de compatibilizar con una demanda internacional que se presenta ambigua a la vez que cambiante. Respecto de las metas se señalan las siguientes:

- Regular y promover el uso de la biotecnología, con la debida seguridad para la población civil, como deber ineludible del Estado Nacional. Dicho papel es esencial para proveer el marco legal e institucional adecuado y para incentivar la aplicación de principios científicos y técnicos en la producción de bienes y servicios, con el debido resguardo del ambiente, de la salud humana y animal, según lo establece la legislación internacional;

- establecer una clara política nacional relativa a la producción, desarrollo, consumo y comercio de los OGMs, apoyada por normativa e instituciones fuertes;

- fortalecer los mecanismos de articulación y coordinación interinstitucionales dado que una política para la producción, desarrollo, consumo y comercio de OVM, requiere de la interacción de las áreas del gobierno responsables de la agricultura, del medio ambiente, de las relaciones exteriores y del comercio internacional;

- implementar canales de información que aseguren condiciones de transparencia y equidad para los consumidores y productores nacionales y que respondan a las tendencias y regulaciones internacionales que están surgiendo, como respuesta al Protocolo de Bioseguridad;

- desarrollar acciones que permitan avanzar en el dictado normas que incluyan desde la identificación, contemplado en el Protocolo de Cartagena, hasta el etiquetado (identidad preservada/trazabilidad), que será próximamente exigido por algunos mercados, como la Unión Europea, Brasil y Japón.

- Institucionalizar otros organismos como la CONABIA, que provean las debidas salvaguardias de transparencia e idoneidad, estimulando la colaboración intersectorial para promover el uso seguro de la biotecnología, incluyendo el desarrollo de información que cubra las legítimas demandas del consumidor. Del mismo modo es importante retener las personas idóneas que han estado contribuyendo a esta tarea y con ellas formar nuevos recursos humanos, para asegurar la continuidad, predecibilidad, idoneidad y honestidad del sistema;

- crear incentivos económicos, además de los mecanismos regulatorios, para otorgarles oportunidades a pequeños, medianos y grandes productores de semillas y de granos, desalentando la aparición de monopolios privados;

- prepararse, en forma urgente, para el proceso de implementación del Protocolo de Cartagena. Para ello será necesario, entre otras actividades, adecuar y generar la legislación correspondiente y acordar entre todos los sectores involucrados, la oportunidad adecuada para ratificar el mencionado Protocolo, de manera de participar activamente en la primera Conferencia de las Partes, en el segundo trimestre del año 2002.

Este gran desafío que se le presenta al país, obedece al hecho de que a partir de la entrada en vigencia del Protocolo, de conformidad con el Artículo 18,2, a), la Argentina haya o no ratificado el Protocolo, deberá prepararse para identificar sus cargamentos de “*commodities*” con organismos vivos modificados de la siguiente manera: “*este cargamento puede llegar a contener organismos vivos modificados (OVM)*”.

C.II.9. Agricultura

La sustentabilidad de la producción agropecuaria preocupa, principalmente en el nivel de las ideas, a la mayor parte de la sociedad; sin embargo, en la actualidad es necesario pasar del campo de las ideas al de las acciones.

Respecto de la Argentina, ello supone lograr un tratamiento del problema que permita generar, apoyar y difundir alternativas de producción agropecuaria sustentable.

En tal sentido, la SSAGPyA del ME ha diseñado y ejecuta, a través de las Direcciones de Agricultura, Desarrollo Agropecuario y del Proyecto Forestal de Desarrollo, diversas acciones tendientes a lograr un desarrollo agropecuario sustentable, las cuales, en términos generales, se caracterizan por un alto grado de participación de los actores involucrados.

Estas líneas de acción se encuadran en el Artículo 41 de la Constitución Nacional reformada en 1994 respecto del deber indelegable del Estado de fijar normas que consagren como derecho social específico el de vivir en un medio ambiente sano, el deber de las personas físicas y jurídicas de protegerlo ante lesión o amenaza y la obligación de preservarlo en el marco de un desarrollo autónomo, socialmente equitativo y ambientalmente sustentable.

Por otra parte, desde la SSAGyP se desarrollan diversas acciones en torno a las convenciones internacionales y sus puntos de contacto con el sector del agro y forestal en el país, así como también, en el desarrollo de capacidades para la investigación de los Criterios e Indicadores regionales para el país.

C.II.9. a. Logros:

- Puesta en práctica de programas y proyectos de difusión y apoyo a la producción agropecuaria sustentable, con el fin de disminuir o aún revertir la degradación que amenaza nuestro patrimonio natural;
- capacitación científica y tecnológica para contribuir a una adecuada implementación de los sistemas productivos y avanzar hacia una agricultura sustentables;

- avances en la aplicación de incentivos económicos que evitan que las tecnologías sólo sean rentables en el corto plazo en función a una determinada estructura de precios relativos;

- Creciente concientización sobre la necesidad de generación de instrumentos de monitoreo de alternativas de manejo y de su impacto en el ambiente;

- Diversas actividades de fomento a la participación y organización de los pequeños y medianos productores agropecuarios.

C.II.9. b. Limitaciones:

- Dificultades en la asignación de recursos financieros de organismos donantes o de crédito nacionales e internacionales, a los fines de generar mayores instrumentos de financiamiento y fiscales que contribuyan a la adopción de sistemas productivos sustentables;

- escasa institucionalización de las ideas y prácticas sustentables en organizaciones asociadas al agro;

- elevado porcentaje de productores que aún continúan aplicando prácticas de producción no acordes con los criterios de sustentabilidad de los agrosistemas;

- dificultades para balancear las desventajas generadas por el uso masivo de agroquímicos o por el uso no evaluado de equipos para riego mecanizado, con otros de mayor impacto, como la utilización de semillas o fertilizantes de última generación, o el todavía reciente uso de la siembra directa para algunos cultivos;

- falta de estudios e investigación adecuada sobre indicadores de sustentabilidad que valoren la condición, tendencia y deterioro que sufren los recursos naturales, debido a prácticas insustentables;

- carencia de estudios de campo y trabajos de monitoreo que permitan analizar las consecuencias de prácticas de producción sustentable en el mediano y largo plazo;

- escasa coordinación efectiva entre las unidades administrativas del sector público y entre éste y el sector privado para generar acciones u optimizar el desarrollo de actividades ya iniciadas para la producción agropecuaria sustentable;

- escasos estudios respecto de cuestiones que podrían significar pérdida de posibilidades de sobrevivir como actor-exportador, en el marco del comercio regional e internacional, dadas las crecientes barreras del paraarancelarias disfrazadas de medidas ambientales, aplicadas al comercio de productos agropecuarios.

C.II.9. c. Desafíos:

Búsqueda de alternativas que logren adecuar de manera favorable las posibilidades económicas de los emprendimientos agrícolas productivos del país, con las disponibilidades tecnológicas que le permitan aumentar su capacidad de producción con el mínimo impacto sobre el medio ambiente.

C.II.10. Sustancias y Productos Químicos Tóxicos

C.II.10. a. Logros:

El país produce, utiliza, importa y exporta gran variedad de sustancias y productos químicos peligrosos en función de su actividad económica agrícola e industrial, y desde la instauración del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) en Sudamérica, se ha incrementado en gran medida en el último decenio, el comercio internacional de estas mercancías.

A partir de las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CENUMAD), y de las acciones llevadas a cabo por el país, en ámbito interno, respecto de las privatizaciones de empresas de servicios y químicas, que hasta el momento estaban en la órbita del Estado, se han tomado medidas que se identifican como logros:

- Se dictaron en el ámbito nacional y provincial normas generales y particulares con el fin de regular las actividades de sectores tales como transporte, energía, comunicaciones, minería, entre otras. Se incluyeron en la legislación aspectos preventivos respecto de los posibles efectos del manejo de sustancias y productos químicos;

- se sancionó la Ley N° 24.051 relativa a la gestión integral de los Residuos Peligrosos en el año 1991, lo que marcó un paso fundamental hacia la protección del ambiente en el país. Dicha norma, que toma como base el Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminación, permitió enmarcar en la legislación vigente, accidentes y emergencias producidas por la utilización de las sustancias y productos químicos al sancionarse su reglamentación (Decreto N° 831/93);

- se regularon, a partir del año 1992, en el marco de la Ley de Hidrocarburos 17.319, los aspectos ambientales respecto de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, contemplando distintos procedimientos tales como la Evaluación de Impacto Ambiental, Auditorías Ambientales, Planes de Emergencias y Contingencias, que coadyuvaban a las

empresas petroleras a instaurar sistemas de gestión racional de las sustancias químicas;

- se modificó el Código de Minería en la década del '90 mediante la Ley N° 24.585, relativa a la Evaluación de Impacto Ambiental para el sector. Esto trajo aparejado un intenso aumento de la actividad, con medidas adecuadas por la utilización de productos químicos;

- se reguló la actividad eléctrica bajo la Ley N° 24.065. La legislación posterior dictada en consecuencia, contempló también los aspectos ambientales relativos a los sistemas de gestión de las sustancias químicas;

- se pusieron en práctica distintos instrumentos normativos relacionados con la gestión de sustancias químicas tóxicas, siendo las más relevantes las relativas a bifenilos policlorados y amianto, registro de accidentes mayores por sustancias o productos químicos, entre otros, en el marco de la Ley N° 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo;

- se dictó el Reglamento General para el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera – Anexo S del Decreto N° 779/95 – y distintas resoluciones. Cabe destacar que esta legislación fue acordada en el ámbito del MERCOSUR, y resulta de aplicación en todos los países miembros (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay); esto ha posibilitado dar respuesta al aumento de riesgo de contingencias debido al comercio y transporte de mercancías peligrosas a través de distintos corredores que unen los océanos Pacífico y Atlántico, notablemente incrementado como consecuencia del desarrollo del MERCOSUR;

- se fortaleció la presencia del país, en el marco del Foro Intergubernamental de Sustancias Químicas, creado en Estocolmo en 1994. En tal sentido, la Argentina fue designada a partir de 1997 para una de las Vicepresidencias de la región de Sudamérica;

- se elaboró el Perfil Nacional de Gestión de Sustancias Químicas y un Plan Piloto Nacional para la Gestión de Sustancias Químicas. En este marco, se crearon Grupos de Trabajo Técnicos, que generaron a su vez normativa relativa a la gestión de las sustancias y productos químicos tóxicos, y se propició el ejercicio de simulacros de emergencias de los cuales participaron todas las áreas del gobierno nacional competentes; se creó una red de laboratorios de toxicología, entre otras acciones;

- se participó activamente en todas las negociaciones internacionales relativas a la redacción de un instrumento jurídicamente vinculante para la aplicación de ciertas medidas sobre contaminantes orgánicos persistentes, que culminarán con la firma del futuro Convenio en Estocolmo (Suecia); cabe destacar que en la Argentina, todos los plaguicidas contemplados en la lista inicial del futuro convenio, se encuentran prohibidos o severamente restringidos en sus usos principales y en su comercialización;

- se ratificó el Convenio de Rotterdam por Ley N° 25.278 del año 2000, habiendo el país participado activamente en las negociaciones internacionales que llevaron a la concreción de dicho Convenio;

C.II.10. d. Metas y Desafíos:

Coordinar de manera efectiva y a corto plazo, en el marco regional el funcionamiento de distintos centros relativos al manejo ambientalmente racional de las sustancias y productos químicos (investigación, transferencia de tecnología y capacitación), así como de redes de respuesta ante impactos, emergencias y contingencias devenidas de la producción, comercialización o utilización de estas sustancias.

C.II.11. Residuos Peligrosos

C.II.11. a. Logros:

- La sanción de la Ley Nº 24.051 relativa a la gestión integral de los Residuos Peligrosos en el año 1991 fue un paso fundamental hacia la protección del ambiente en el país, comenzando de esta forma a cumplimentarse el objetivo del capítulo 20 de la Agenda XXI;

- el resultado indirecto de las medidas hasta la fecha adoptadas ha sido una mejor conservación y gestión de los recursos naturales, privilegiando los sistemas de generación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos, mediante la aprobación de tecnologías ambientalmente adecuadas;

- la experiencia adquirida por el gobierno nacional durante la aplicación de la Ley Nº 24.051 permitió elaborar en el año 1999, un programa de descentralización y fortalecimiento hacia las autoridades ambientales provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires respecto de la materia, la que actualmente se está replicando desde las provincias hacia los municipios;

- las autoridades de fiscalización y control han encarado mediante convenios y distintas interpretaciones de la normativa, soluciones que permiten de alguna manera mejorar la situación planteada por las distintas legislaturas, en cuanto a prohibiciones y restricciones.

C.II.11. b. Factores que contribuyeron a los logros:

- El acompañamiento del sector privado, del sector académico y de la sociedad civil, a través de las organizaciones no gubernamentales;

- la creación, en el año 1994, del Consejo Consultivo previsto en la Ley Nº 24.051, integrado por los sectores mencionados en el párrafo anterior, que desde entonces ha sido el motor principal de la adecuación y actualización de la ley de residuos peligrosos;

- la puesta en funcionamiento, a partir de 1997, de algunos registros provinciales, lo que permitió dar comienzo a un sistema de fiscalización y control más efectivo, descentralizando el accionar de la autoridad nacional;

- la participación provincial, impulsada por la reforma constitucional del año 1994, donde se incluyó el artículo 41º relativo al ambiente, y las modificaciones constitucionales de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires (dos de las jurisdicciones más importantes en cuanto a actividad comercial e industrial y con la mayor densidad de población a nivel país).

C.II.11. c. Limitaciones:

- La principal limitación es no contar con un sistema operativo de gestión de residuos peligrosos en todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un sistema de registración interconectado y la creación de registros locales en residuos peligrosos. De las 25 distintas jurisdicciones ambientales autónomas en la materia residuos peligrosos, solamente 7 han implementado un sistema efectivo de gestión en residuos peligrosos a través de la sanción de normativa específica, la creación de registros provinciales y el otorgamiento de autorizaciones administrativas de generación, transporte y operación;

- las cláusulas constitucionales de prohibición de ingresos de residuos peligrosos, y en algunos casos de tratamiento y disposición final de los mismos, en algunas provincias, ha atentado contra la instalación progresiva, en el país, de un sistema adecuado de gestión de estos residuos, fomentando un mercado interno de manejo de residuos peligrosos fuera del marco legal de las normas vigentes.

C.II.11. d. Metas y Desafíos:

- Regular los presupuestos mínimos de la materia. La solución definitiva se vislumbra en el mismo artículo 41° de la Constitución Nacional, al establecer que corresponde a la Nación dictar los presupuestos mínimos de protección ambiental, ya que permitirá la implementación de un verdadero sistema federal en la materia. En este marco, se está trabajando en forma coordinada, entre la Nación y las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, en el anteproyecto de norma de presupuestos mínimos en materia de gestión integral de residuos peligrosos. Este intentará salvar las distintas cláusulas constitucionales que actualmente son una barrera para el normal desarrollo sustentable de las distintas actividades comerciales, relativa a la generación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos;

- coordinar la instalación de distintos centros de investigación de la contaminación relacionada con las actividades de generación y gestión de los residuos peligrosos, el desarrollo de inventarios, de movimientos, de capacidad de tratamiento y disposición final.

C.II.12. Desechos Sólidos Urbanos

C.II.12. a. Logros:

- La SDS y PA, a través de la DNOA, a partir de los compromisos asumidos en Agenda XXI y en el marco del Plan de Acción Nacional para los Asentamientos Humanos – HABITAT II (1996–2000) formulo, en 1997, el Plan Nacional de Valorización de Residuos (PNVR). Este ha puesto especial énfasis en la reducción, recuperación, reutilización y reciclado de los mismos y en los beneficios ambientales y sociales emergentes de este tipo de manejo, en el ANEXO D.II.12. se describen los objetivos de dicho Plan;

- la novedad de la última década de la aparición de proyectos de normas nacionales, que a manera de leyes de presupuestos mínimos, promueven tanto el manejo ambiental de los residuos sólidos urbanos como el de los envases y embalajes;

- la Argentina es uno de los ocho países de la Región que cuenta con una Red Nacional de Manejo Ambiental de Residuos (REMAR), integrada a la Red Panamericana homóloga, (REPAMAR) que coordina la OPS/CEPIS, en el ámbito del MS. La Red ha promovido el desarrollo de proyectos piloto orientados a prevenir la contaminación y el tratamiento de residuos específicos, el uso racional del agua en tintorerías, la valorización de residuos sólidos en curtiembres, el manejo de desechos hospitalarios y la producción de hidrolizado de residuos de pescado, entre otros.

- La gestión de los Proyectos Integrados de Residuos Sólidos (PIRS), en distintas provincias.

C.II.12. b. Factores que contribuyeron a los logros:

En Argentina la recolección, tratamiento y disposición final de residuos domiciliarios es competencia municipal, existiendo en varias jurisdicciones municipales normativa tendiente a su regulación.

Las ciudades de mayor tamaño, disponen sus residuos en rellenos controlados. El caso pionero y más destacado es el Area Metropolitana de Buenos Aires donde, a partir de 1977, se crea el CEAMSE (Empresa del Estado) mediante Convenio entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, para la disposición final de los residuos sólidos de toda el área metropolitana utilizando la técnica de relleno sanitario.

En la última década los Municipios han contado con financiamiento para los proyectos de gestión de sus residuos sólidos urbanos en el marco de Programas de Fortalecimiento a Municipios financiados por el BID y el BM e implementados por diversas agencias del Estado Nacional (por ejemplo el Programa de Financiamiento a Municipios BID7/BM / de la ex Secretaría de Desarrollo Social de la Nación, Subsecretaría de Vivienda; Programa de reformas y Desarrollo de los Municipios Argentinos BID 1164/OC-AR / Ministerio del Interior, Secretaría de Asistencia a las Provincias).

Asimismo en algunos casos especiales se ha contado con el apoyo de agencias de Cooperación para las distintas jurisdicciones, tales como la GTZ (Alemania) y JICA (Japón); Las ONG's vinculadas a la temática ambiental, reciben asistencia técnica y financiera de la Organización Panamericana de la Salud.

C.II.12. c. Limitaciones:

El proceso de urbanización con el consiguiente crecimiento permanente de las ciudades, la industrialización y los patrones de consumo, dan lugar a un incremento constante de los volúmenes de desechos y de aguas residuales, raramente manejados con propiedad. Existe por ahora sólo débil conciencia de los riesgos ambientales lo que impide, en términos generales, conocer, comprender, enfrentar y resolver los problemas de contaminación generados por un inadecuado manejo de los residuos y las consecuencias sanitarias que de ello se derivan.

Las soluciones que se proponen para estos problemas no siempre son sostenibles dado que muchas veces se trata de implantar tecnologías que no están de acuerdo con la realidad local o no toman en cuenta los aspectos económicos de la población usuaria, en un marco de recursos muy limitados.

C.II.12.d. Metas y Desafíos:

- Contar con la ley de presupuestos mínimos en la materia;
- erradicar los basurales a cielo abierto, generalizar la valorización de los residuos y, particularmente, disminuir sustancialmente su producción;
- promover, al igual que otros países latinoamericanos, la no importación de basura; es sabido que año tras año se incrementa la importación de residuos de los países desarrollados a precios más bajos y hasta precio cero, de residuos de los países desarrollados; esto es conocido como tráfico internacional de materias primas secundarias;
- priorizar la recuperación de toda la materia prima disponible en los propios residuos, maximizando la oferta de empleo derivada de esta compleja actividad y minimizando los efectos negativos, directos e indirectos, del ciclo producción - disposición de basura, que conduce al deterioro del patrimonio ambiental del país;
- fomentar la innovación tecnológica y la reorientación de los recursos financieros, nacionales e internacionales dado que estos son elementos claves para garantizar eficacia en la valorización de los residuos;
- fortalecer la educación y participación de todos los agentes sociales y la difusión de experiencias de valoración de residuos y de tecnologías ambientalmente sustentables, en los ámbitos nacional, provincial y municipal.
- promover medidas regionales que incentiven la disminución de la producción de basura;
- promover medidas regionales que desalienten la importación de residuos de los países desarrollados (vidrio y papel por ejemplo);
- promover medidas que estimulen el comercio regional de materias primas secundarias.

C.II.13. Protección de la Atmósfera

C.II.13.1. Aire

C.II.13.1. a. Logros:

- La sanción de la Ley N° 24.449 en el año 1994 y de su Decreto Reglamentario N° 779/95. La aplicación de esta ley permite reducir el nivel de contaminación atmosférica, generada principalmente en las grandes áreas urbanas por fuentes emisoras móviles, con el consecuente mejoramiento en la calidad de vida de la población;

- la compatibilización y normalización en el ámbito regional de límites de emisiones contaminantes a la atmósfera para fuentes móviles. A partir del año 1992, se formó, dentro de la entonces Reunión Especializada de Medio Ambiente (REMA) del MERCOSUR, la comisión “Industria Automotriz”, con el mandato de establecer los reglamentos técnicos para los vehículos automotores producidos y comercializados dentro del acuerdo regional. Como resultado del trabajo de la Comisión, se establecieron y acordaron los niveles máximos de emisiones contaminantes gaseosas y sonoras permitidos para todos los tipos de vehículos automotores, producidos en dicho ámbito regional;

- el cumplimiento del compromiso oficial de los países integrantes del MERCOSUR de internalizar todas las resoluciones acordadas; en tal sentido, la Argentina ha internalizado en forma casi completa dichas resoluciones, restando solamente algunos aspectos referidos a vehículos comerciales livianos;

- la implementación del Programa de “Gestión de la Contaminación”, en el ámbito de la SDS y PA, del MDS y MA, el cual propone la instalación y funcionamiento de un laboratorio para homologación, certificación para nuevos modelos de vehículos y control de calidad de vehículos en fabricación; respecto de las emisiones vehiculares contaminantes, se prevé la instalación y mantenimiento de una red de monitoreo de calidad de aire en el conurbano de Buenos Aires y otra red de monitoreo de calidad de aire, a instalarse dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; éstas dos últimas con financiación ya aprobada por el Banco Mundial

C.II.13.1.c. Limitaciones:

- Las superposiciones de funciones: El mecanismo de aplicación de la Ley N° 24449, es ejecutado secuencialmente por tres organismos nacionales diferentes: la SDS y PA del MDS y MA, la Secretaría de Industria y Comercio del ME y la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios del MJ y DH. Los tiempos disímiles de integración y aplicación de la normativa entre los distintos organismos nacionales, impide una rápida y eficiente aplicación de lo previsto en materia de contaminación ambiental para nuevos modelos de vehículos;

- la falta de adhesión a la Ley Nacional N°24.449 por parte de muchas Provincias; hasta la fecha sólo la mitad de ellas han adherido a la misma, incluso algunas han sancionado normativa propia, lo cual ha generado una disparidad normativa en la materia, con las dificultades que esto conlleva;

- los insuficiente sistemas de control de la calidad de aire en los centros urbanos, y de inventarios de emisiones contaminantes a la atmósfera; esto impide contar con información fehaciente, sobre el efecto de las emisiones provenientes tanto de fuentes móviles como de fuentes fijas, en la calidad del aire en la mayoría de las grandes ciudades;

- la falta de normas de presupuestos mínimos nacionales en materia de calidad de aire.

C.II.13.1.d. Metas y Desafíos:

- Establecer los presupuestos mínimos nacionales sobre calidad del aire;
- Elaborar reglamentos para el control de las emisiones de partículas visibles (humo), y durabilidad de las emisiones certificadas para cada vehículo; en ese sentido, se esta trabajando en el ámbito de la SDS y PA y algunos de los proyectos normativos se encuentran en estado avanzado de consenso interno;
- Implementar una coordinación más eficiente del sistema de control tripartito previsto en el Decreto N° 779/95; ello permitirá alcanzar metas cada vez más ambiciosas de emisiones contaminantes para nuevos modelos de vehículos;
- lograr la coordinación y unificación del control rutinario de los vehículos en uso, por consenso entre organismos nacionales y provinciales;
- elaborar inventarios de emisiones a la atmósfera provenientes de fuentes fijas y móviles, al menos para las zonas urbanas e industrializadas del país;
- establecer un plan nacional de control de la calidad de aire, que permita el efectivo control de la misma en las grandes ciudades y centros industriales;
- profundizar la interacción entre los Estados Parte del MERCOSUR para alcanzar y mantener metas cada vez más ambiciosas respecto de las emisiones contaminantes permitidas a los vehículos producidos y comercializados en la región;
- agregar pautas de consumo de combustible y generación de CO₂ a los contaminantes actualmente contemplados por los reglamentos ya establecidos;
- integrar el tema de calidad de combustibles en uso, en las discusiones sobre reglamentos, dentro de la Comisión 'Industria Automotriz', del Subgrupo de Trabajo - Industria - MERCOSUR;
- propiciar la adopción de estándares máximos armonizados para las emisiones de vehículos y metodologías comunes de medición de las mismas en el ámbito del MERCOSUR; ambos temas deberán contar con aceptación en el ámbito mundial, para unificar las condiciones técnicas que deberán reunir los vehículos, permitiendo una libre competencia y evitando el establecimiento de barreras para-arancelarias en la materia.

C.II.13.2. Capa de Ozono

C.II.13.2. a. Logros:

- La Argentina firmó la Convención de Viena el 22/03/85 y la ratificó el 18/01/90, por Ley N° 23.724; el Protocolo de Montreal fue ratificado el 18/09/90 por Ley 23.778; las Enmiendas de Londres y Copenhague fueron ratificadas el 4/12/92 y el 20/04/95, respectivamente. La Ley de ratificación de la Enmienda de Montreal cuenta con la aprobación de las Cámaras de Senadores y de Diputados de la Nación;

- la Argentina cuenta con el Programa País, el cual fue aprobado en la XIII Reunión del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal en Julio de 1994; éste Programa funciona en el ámbito de la SDS y PA y refleja la política del Gobierno Argentino para la implementación del Protocolo de Montreal en la Argentina;

- la Argentina propuso y adoptó medidas adicionales respecto del cronograma de eliminación establecido por el Protocolo de Montreal, según se detalla a continuación:

SUSTANCIAS CONTROLADAS	MEDIDAS SEGÚN EL PROTOCOLO DE MONTREAL	MEDIDAS ADOPTADAS/PROPUESTAS POR ARGENTINA
Anexo A – Grupo I CFC-11, CFC-12, CFC-113, CFC-114 y CFC-115	Nivel Base: promedio 1995-97 Congelamiento: 1 de julio de 1999 50 % de reducción al 1/1/2005 85 % de reducción al 1/1/2007 100 % de reducción al 1/1/2010	Eliminación del consumo a partir del 1/1/2006. Prohibición de la radicación de empresas productivas desde el año 1991. Prohibición del uso de estas sustancias como propelente de aerosoles, excepto para usos medicinales o en aplicación para conectores electrónicos desde Diciembre de 1993.
Anexo A – Grupo II Halcones	Nivel Base: promedio 1995-97 Congelamiento: 1/1/2002 50 % de reducción al 1/1/2005 100 % de reducción al 1/1/2010	Prohibición de la importación desde 1997.
Anexo E Bromuro de Metilo	Nivel Base: promedio 1995-98 Congelamiento: 1 de enero de 2002 20 % de reducción al 1/1/2005 100 % de reducción al 1/1/2015	Eliminación del consumo como fumigante a partir de 1/1/2007.

- la primera Medida de Control entró en vigencia a partir del 1 de julio de 1999 y establece el congelamiento del consumo de las sustancias del Anexo A Grupo I, según los niveles de consumo promedio de los años 1995 – 1997, medida que nuestro país cumplió sin inconvenientes;

- el Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal aprobó a la fecha 80 proyectos que incluyen: la reconversión de industrias a tecnologías libres de CFCs; el fortalecimiento institucional; la capacitación y proyectos de demostración de alternativas, todos con fondos en carácter de donación, por un monto aproximado a los U\$S 40.000.000. Los mismos son ejecutados por el PNUD, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, el PNUMA y el BM;

- la Argentina cumplió con la primer Medida de Control establecida en el Protocolo de Montreal;

- el país completó recientemente la apertura de cada una de las sustancias controladas por el Protocolo de Montreal, en el Arancel Integrado Aduanero (nivel nacional de la Nomenclatura Común del MERCOSUR, basado en el Sistema Armonizado de la Organización Mundial de Aduanas); ello a efecto de individualizar la totalidad de las sustancias agotadoras de la capa de ozono.

C.II.13.2. b. Factores que contribuyeron a los logros:

- La Oficina del Programa Ozono (OPROZ), que funciona en el ámbito de la SDS y PA, como punto focal de la temática de ozono en nuestro país, articuló los medios necesarios para facilitar el nexo entre los científicos e investigadores de los distintos centros de estudios en los ámbitos nacional y regional, creando una lista de contacto a través de la página Web para el intercambio de información. En dicha página esta toda la información relativa a los programas desarrollados por la Oficina;

- la Ley N° 24.040, al prohibir la radicación de nuevas industrias productoras de las sustancias controladas;

- la regulación de la producción mediante las leyes que ratificaron el Protocolo de Montreal, sus Ajustes y Enmiendas; por medio de una notificación de la OPROZ, se les hizo llegar a las empresas productoras, el Resumen de las Medidas de Control establecidas en el Protocolo;

- la mayor sensibilización de la sociedad acerca de la problemática, dada la cercanía del país a la zona donde el deterioro se presenta con mayor intensidad;

- el incremento de la divulgación del problema a partir de campañas de información y sensibilización al público en general y a la industria en particular, en torno a la problemática de la disminución de la capa de ozono, sustancias que la provocan, y su control a través de la aplicación del Protocolo de Montreal.

C.II.13.2. c. Metas y Desafío:

Se prevé que con el desarrollo de las actividades en ejecución, se logre una disminución de 2700 ton de SAO para el año 200. A tal efecto se ha previsto:

- Para la ejecución del Proyecto Banco de Halones, en cuanto a la disposición final de los mismos, se tendrá en cuenta el Banco existente en Venezuela. Se solicitará a este país la capacidad de dicho Banco y el tipo de acuerdo que se necesitaría para su uso;

- proponer acuerdos entre los países del MERCOSUR, para la adopción de medidas similares a las enunciadas precedentemente;

- adherir a la propuesta realizada en la Reunión Conjunta de las Redes de Funcionarios de Ozono de Centroamérica, México y el Caribe Hispano (ODSONET/LA-C) y de América del Sur (ODSONET/LA-S) sobre la participación del Taller Regional de Capacitación en Latinoamérica, y a la discusión sobre el establecimiento de una escuela de agricultura en Latinoamérica, para aplicar las alternativas al bromuro de metilo, realizado en México, en mayo de 1999;

- inscribir de oficio en el Registro de Residuos Peligrosos por aplicación de la Ley N° 24051, a las empresas que utilicen como solventes, sustancias controladas por el Protocolo de Montreal;

- implementar seminarios de capacitación en buenas prácticas de solventes e identificar proveedores, usuarios y asociaciones industriales que las agrupan; tal actividad, está siendo coordinada por OPROZ y la Secretaría de Industria y Comercio;

- creación del Grupo Consultivo del Sector;

- redefinir la estrategia para la eliminación gradual de las SAOs del sector solventes, contemplando la realización de acuerdos voluntarios;

- aportar capacitación horizontal; en tal sentido, con motivo de la adopción de la Enmienda del Sistema Armonizado, que entrará en vigor el 1 de enero de 2002, el país pone a disposición de los países de la región la experiencia nacional en la materia y propone incluir en la nueva Nomenclatura Común del MERCOSUR, posiciones específicas para sustancias que agotan la capa de ozono, a fin de contribuir al efectivo control del ingreso y egreso de sustancias controladas y asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos frente al Protocolo;

- introducir y promover nuevas tecnologías que no afecten la capa de ozono;

- concluir el borrador del Plan de Acción del Sector Producción, para la eliminación de CFC-11 y CFC-12 del sector; de dicho Plan también deberá surgir, si es necesario, la formulación de políticas para la aprobación de nuevos proyectos en el sector, por parte del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal. Se prevé solicitar una Auditoría Técnica independiente al Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal;

- sensibilizar a los consumidores y al público en general, para generar modificaciones en la demanda de productos que contengan sustancias agotadoras de la capa de ozono, por ejemplo en la adquisición de aparatos domésticos de refrigeración libres de CFCs y en el servicio de los mismos. También se debe informar a la industria usuaria, sobre sustitutos de las sustancias agotadoras de la capa de ozono y sobre los avances de tecnologías a efecto de promover su reconversión.

C.2.13.3 Cambio Climático

C.II.13.3. a. Logros:

C.II.13.3. a.1. Consideración de las incertidumbres: perfeccionamiento de la base científica para la adopción de decisiones:

Se enuncian a continuación los principales logros alcanzados por el país, dirigidos al perfeccionamiento de la base científica para la adopción de decisiones relativas al cambio climático, desde la CNUMAD a la fecha:

- Por Decreto N° 2156, del 15 de septiembre de 1991, el entonces Presidente de la Nación crea la Comisión Nacional para el Cambio Global (CNCG) en jurisdicción de la ex Secretaría de Ciencia y Tecnología. Su misión era entender en todo lo inherente a la coordinación, evaluación y generación de nuevas actividades científico-tecnológicas nacionales, relacionadas con el control y vigilancia del Cambio Global en el país;

- en cumplimiento de los compromisos emergentes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Argentina llevó a cabo el proyecto Estudio País con el apoyo del PNUD;

- en el marco de la cooperación internacional para el perfeccionamiento de la base científica para la adopción de decisiones, relativas al cambio climático, la Argentina ha presidido el Grupo de Valdivia, formado por Argentina, Australia, Brasil, Chile, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Uruguay, y, en el MERCOSUR, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y dos miembros asociados, Bolivia y Chile;

- el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) ha venido apoyando las investigaciones científicas en la problemática del cambio climático. En particular, ha definido acciones especiales para el desarrollo de “áreas de vacancia temática”, entre las cuales figuran: tecnología y seguridad ambiental, manejo y gestión de recursos naturales, manejo y gestión de cuencas hídricas, suelos, y cambio climático.

Las investigaciones sobre cambio climático son llevadas adelante principalmente por investigadores miembros del CONICET. Cabe mencionar, en especial, los proyectos que desarrollan esos investigadores en el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la Universidad de Buenos Aires, y en el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera del CONICET;

- la creación de la Oficina Argentina de Implementación Conjunta (OAIC), el 16 de julio de 1998, mediante el Decreto del Poder Ejecutivo N° 822/98; ésta tiene por objeto llevar a cabo en forma más eficiente las acciones vinculadas a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, apoyando las actividades a desarrollarse por medio de los mecanismos previstos a tal fin, en la Decisión 5 de la COP 1 (Actividades Implementadas Conjuntamente) y en el Protocolo de Kioto. Dicha Oficina funciona en el ámbito de la SDS y PA del MDS y MA y ha desarrollado, entre otras actividades, estudios sobre impactos del cambio climático en la Argentina, en coordinación con la Environmental Protection Agency de los Estados Unidos de América;

- la creación en el ámbito de la SDS y PA del MDS y MA del Programa Nacional sobre Impactos del Cambio Climático, cuyo objeto es dar un marco institucional a la problemática vinculada a impactos, vulnerabilidad y adaptación frente a los efectos del cambio climático;

- la Argentina ha cumplido con sus compromisos en su condición de país no Anexo I, al realizar tres inventarios de gases de efecto invernadero, para los años 1990, 1994 y 1997. Estos se llevaron a cabo con una metodología que los hace comparables entre sí, dos estudios de mitigación de gases de efecto invernadero y varios estudios innovadores en relación con el cambio climático, incluyendo, como parte de los estudios destinados a elaborar una meta doméstica de reducción de la tasa de crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero, las proyecciones de sus emisiones en los sectores relevantes hasta el período 2008-2012;

- la Argentina, como firmante de la CMNUCC, presentó su primera Comunicación Nacional en junio de 1997; ésta incluyó un estudio de mitigación de GEI. Durante los años 1995 a 1997 se elaboraron los inventarios nacionales correspondientes a los años 1990 y 1994, los cuales fueron presentados oficialmente a la CMNUCC en 1997. Para ello se utilizaron las Directrices elaboradas por el IPCC, publicadas en 1995. De esta manera, la Argentina se constituyó en uno de los primeros países no Anexo I, que cumplió con esta pauta comprometida por todos los países signatarios de la Convención;

- el país, durante el año 1999, elaboró el inventario correspondiente a 1997 y, a fin de compatibilizar los tres inventarios existentes, se actualizaron los de 1990 y 1994 conforme a las nuevas Directrices revisadas por el IPCC en 1996; asimismo, se incluyó en ellos información no brindada en la Primera Comunicación nacional, acerca de las actividades forestales y de cambio en el uso del suelo, y sobre varios de los rubros del sector agrícola;

- el país llevó a cabo también el denominado “Estudio Argentino sobre los Mecanismos de Flexibilidad en el Contexto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Protocolo de Kioto”. Este fue desarrollado bajo la coordinación de la Dirección de Asuntos Ambientales del MRECI y C, contando con el financiamiento del BM y el Gobierno de Canadá; las actividades del mismo, se cumplieron durante el período octubre 1998 a mayo de 1999;

- la Argentina ha desarrollado importantes tareas a través de la participación de numerosos expertos del país en el ámbito del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, constituido con el objeto de avanzar en el conocimiento científico en esta materia. Estas aportaciones facilitadas por la Argentina representaron un esfuerzo considerable pues se realizaron en un contexto de restricciones presupuestarias que afectaron el desempeño y la integración de los propios equipos de investigación en la Argentina.

C.II.13.3. a.2. Logros en el ámbito internacional:

- La Argentina firmó la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) el 12 de junio de 1992 (a pocos días de su puesta a la firma), y la ratificó por Ley N° 24.295 el 11 de marzo 1994;

- la Argentina firmó el Protocolo de Kioto el 16 de marzo de 1998, en el primer día de apertura de firmas; dicho instrumento ha recibido media sanción del Honorable Senado de la Nación;

- la Argentina mantiene una activa participación en las negociaciones internacionales con el objeto de contribuir a la búsqueda de consensos en esta materia, que haga posible la pronta implementación de medidas que permitan reducir los riesgos derivados del calentamiento global y atenuar sus impactos, en cumplimiento del compromiso que nuestro país ha asumido, como signataria de la CMNUCC, establecido en su Artículo 4°;

- la presencia Argentina se ha concretado en reuniones de consulta de alto nivel, así como en las reuniones técnicas realizadas por los Organos

Subsidiarios de la Convención, ya sea en el ámbito multilateral, regional o bilateral;

- la Argentina se comprometió a promover y dar apoyo a las actividades de mitigación del cambio climático desde los inicios de la CMNUCC;

- la Argentina fue sede de la COP4, realizada en la Ciudad de Buenos Aires, en el mes de noviembre de 1998, y en tal carácter fue el primer país no Anexo I, que tuvo esa responsabilidad como sede de una Conferencia de las Partes. Esto indica claramente el compromiso político en los asuntos de cambio climático; la SDSyPA, es la responsable primaria de las actividades nacionales relacionadas con la CMNUCC;

- la Argentina, como parte firmante de la CMNUCC, se obligó a elevar a la misma, en forma periódica, un inventario nacional de sus emisiones antropogénicas por fuentes y remociones por sumideros, de gases de efecto invernadero. Los países del Anexo I deben, además, informar periódicamente sobre las políticas y medidas de mitigación adoptadas con relación al cambio climático, así como una estimación de sus efectos;

- la Argentina presentó su primera Comunicación Nacional a la CMNUCC en junio de 1997, constituyéndose en uno de los primeros países en desarrollo que cumplieron con tal compromiso;

- en el seno de la SDSyPA se crearon Comisiones Técnicas *Ad Hoc*, a fin de fijar la posición nacional ante las sucesivas Reuniones de las Partes de la Convención. Dichas Comisiones estuvieron integradas por representantes de todas las áreas del Poder Ejecutivo Nacional involucradas en la temática;

- Las provincias participan del proceso para fijar la posición nacional, a través del COFEMA, aunque deberían ampliarse los espacios de participación de las mismas;

- La realización de actividades conjuntas con otras áreas de gobierno permitieron el desarrollo de un mecanismo fructífero de coparticipación y coordinación interministerial e interjurisdiccional.

C.II.13.3. a. 3. Logros en el ámbito regional:

La República Argentina tiene actualmente la responsabilidad de coordinar las actividades intersesionesales del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, en lo concerniente a cambio climático.

C.II.13.3. b. Factores que contribuyeron a esos logros:

La Argentina ha venido implementando varias políticas de carácter avanzado, principalmente en el sector energético pero también en otras áreas, destinadas a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero.

La mayor parte de estas medidas representaron, y seguirán haciéndolo, elevadas inversiones y un costo incremental sustantivo para las finanzas públicas y naturalmente para toda la sociedad. Estas fueron puestas en marcha y sostenidas en el tiempo, en el marco de un severísimo programa de ajuste estructural, que ha ocasionado cuantiosos costos sociales, de manera

que su estabilidad en el tiempo, es una señal del claro compromiso con los objetivos de la Convención Marco.

Para que ello sucediera, se conjugaron algunos elementos claves; entre los principales factores que contribuyeron a los logros argentinos en materia de cambio climático se cuenta la acción pionera de un grupo reducido pero significativo de expertos y negociadores de alto nivel que percibieron la importancia estratégica del tema. La acción perseverante de los negociadores argentinos permitió difundir e instalar la preocupación por los efectos del cambio climático en el país y la necesidad de desarrollar acciones de mitigación.

En el plano político, por diferentes razones, también se le dio relevancia al tema, aunque el tratamiento no fue homogéneo en todas las áreas del Estado. Ello se debe a la divergencia de criterios sobre las dimensiones del problema y la naturaleza de las soluciones más adecuadas. Aún así, la presencia argentina en el proceso de construcción de un sistema normativo internacional sobre cambio climático fue constante y fructífera, aunque las posiciones nacionales adoptadas no siempre respondieron a una estrategia centrada en el cambio climático, sino a otras consideraciones de política internacional.

Otro factor relevante fue la existencia, dentro del sistema científico-tecnológico, de un núcleo importante de especialistas en la materia que han aportado a la mayor difusión de esta problemática y al señalamiento de la severidad de sus efectos. Otras contribuciones que han efectuado, es la realización de los estudios para la ampliación de la base científica sobre esta materia.

Finalmente debe computarse la participación constante de un conjunto de institutos de investigación públicos y privadas, universidades nacionales, además de las diferentes áreas de gobierno competentes en la materia. Todas ellas tuvieron un papel clave en la investigación y en la conceptualización del problema.

Han desempeñado también un rol significativo las organizaciones no gubernamentales, que con su accionar continuado en el tiempo contribuyeron a la percepción del tema, a su encuadre y a la búsqueda de criterios para su más adecuado tratamiento.

C.II.13.3. c. Limitaciones:

La Argentina ya ha adoptado medidas específicas que han contribuido a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero en diversas fuentes. Más aún, ha implementado recientemente políticas y medidas para moderar las futuras emisiones.

No obstante, existen ciertas limitaciones que han afectado un mayor avance sistemático en la concreción de acciones orientadas al tratamiento del cambio climático, tales como:

- La percepción de la problemática del cambio climático es aún difusa y existen dificultades para incluirla entre las acciones prioritarias en las diferentes áreas y niveles de gobierno y en la sociedad en su conjunto;

- la prevalencia de acciones asistemáticas, efímeras y oportunistas, en relación con el cambio climático, que impidió en el pasado el tratamiento del tema como parte de una política de estado, a largo plazo, con equipos estables y una amplia participación de la sociedad civil en la determinación de los objetivos estratégicos y en la creación de consenso respecto de los medios para lograrlo;

- la complejidad en el proceso para involucrar a los ámbitos públicos, en los diferentes niveles de gobierno, y a las ONGs, a los sectores privados y el sector científico – técnico;

- La insuficiencia de recursos financieros para la contratación y capacitación de profesionales que conformen un equipo multidisciplinario estable de expertos en el seno de la administración pública;

- Los procesos reiterados de cambios en la estructura del Estado.

C.II.13.3. d. Metas y Desafíos:

La Argentina tiene una mínima responsabilidad en las emisiones globales, ya sea que se las mida en forma total, por superficie, por producto bruto interno o por habitante. De todos modos, todavía puede reducir aún mas sus emisiones.

A pesar de esta mínima responsabilidad, la Argentina es particularmente vulnerable a los impactos del cambio climático; los indicadores de vulnerabilidad reflejan la exposición a:

1. Incremento de temperaturas;
2. sequías e inundaciones;
3. incendios, agravados por el incremento de los ciclos húmedo y secos, ya que en los primeros hay incremento de masa vegetal, que se transforma en material combustible en el período seco;
4. elevación del nivel del mar;
5. agravamiento de las condiciones de vida en las ciudades, por aumento de las temperaturas, disminución de la disponibilidad de agua y propagación de vectores de enfermedades;
6. afectación de los sistemas productivos, basados en el aprovechamiento de los recursos naturales.

Como la Argentina es vulnerable a los efectos del cambio climático, pese a que su contribución a las emisiones es marginal, el Protocolo de Kioto es importante como medio para atenuar los riesgos para nuestro país derivados del cambio climático global.

La puesta en marcha de políticas y medidas de mitigación, a lo que la Argentina, como signataria de la CMNUCC se ha comprometido, implica la promoción de un crecimiento limpio mediante la incorporación de nuevas tecnologías que reduzcan las emisiones, a la par que mejoran la capacidad competitiva de la economía.

Las alternativas de desarrollo vinculadas a la incorporación de tecnologías limpias, tienen en el Mecanismo de Desarrollo Limpio, que se está negociando en el marco del Protocolo de Kioto, un instrumento muy importante de promoción, ya que permite vincular las exigencias a las que están sometidos los países industrializados, con las oportunidades de desarrollo de países como la Argentina.

En razón de lo expresado, para Argentina se presentan los siguientes desafíos:

- Diseñar los caminos para que, aún con una contribución reducida en las emisiones globales y por ende una oferta limitada de créditos en orden a su participación en el Mecanismo de Desarrollo Limpio, el país pueda crear los incentivos necesarios para sostener a largo plazo las acciones de transformación de los sistemas de producción, con el objeto de evitar que el crecimiento económico se traduzca en aumentos más que proporcionales de la tasa de emisión de gases de efecto invernadero;

- encontrar los medios para difundir en la sociedad la conciencia del problema, de forma tal que permita inducir a un uso racional de la energía y, de modo general, a la reducción de la intensidad energética del crecimiento económico;

- fortalecer otras opciones de mitigación de emisiones y generación de oportunidades de desarrollo, a través del aprovechamiento de las energías renovables, como la eólica y su vinculación con la generación de hidrógeno para el aprovechamiento energético;

- fortalecer la base del conocimiento de la vulnerabilidad de los sistemas naturales, sociales y productivos, hacia los eventos provocados o inducidos por el cambio climático, como son los tornados, las inundaciones, las sequías, los incendios y la difusión de las enfermedades y la manera en que la sociedad argentina se adapta y prepara para ellos;

- cuantificar los efectos del cambio climático a escala local, regional y nacional, y diseñar e implementar una estrategia de respuestas que permita prevenir o atenuar sus efectos negativos, a la par que aprovechar las oportunidades que se generen como consecuencias de los cambios que se habrán de producir.

C.III. Sección III – Fortalecimiento de los grupos principales

En la presente Sección se efectúa una evaluación de conjunto sobre los logros, factores que contribuyeron a los mismos, limitaciones y desafíos que se plantea el país, con relación a los grupos principales.

La Sección también incluye un examen de cada grupo en particular, considerando principalmente a los que contribuyen, de forma mas sistemática, en el proceso de construcción de una conciencia ambiental.

C. III. a. Logros:

- Se implementaron diversas acciones, programas y proyectos para facilitar y promover el compromiso de la sociedad civil, en los procesos de adopción de decisiones; en éste sentido, se ha entendido que una participación genuina requiere de todos los actores sociales tales como: las mujeres, los jóvenes, las ONG's, las poblaciones indígenas, los sindicatos, el comercio y la industria, la comunidad científica, los agricultores etc. Con diferentes grados de desarrollo y de resultados, se interactuó con dichos actores, a través del diálogo y diversos procesos de consultas; a modo de ejemplo se cita el amplio proceso participativo para la elaboración de una propuesta de Estrategia Nacional de Biodiversidad, en el que participaron representantes del sector público, académico y no gubernamental. El mencionado proceso se implementó mediante talleres regionales que derivaron en un Taller Nacional, con un alto grado de participación y comunicación. En el ANEXO D.III. se describen los principales ejemplos de participación de los sectores principales.

- Se sigue avanzando en la integración de actores gubernamentales y no gubernamentales, con resultados alentadores en razón del grado de compromiso e interés con que los sectores responden a las convocatorias.

C. III.b. Factores que contribuyeron a los logros:

La creación de instancias de coordinación interinstitucional e inter-jurisdiccional, como así también la construcción de otros canales de participación, permitieron el fortalecimiento y la articulación entre el sector público y los grupos principales tales como: ONGs, grupos de mujeres, poblaciones indígenas, grupos de jóvenes, sectores del trabajo y privados, entre otros.

Tal fortalecimiento, en parte, fue posible en el país por el impulso que en igual período correspondió al tema ambiental en el escenario internacional, regional y subregional, como una respuesta a las crisis ambientales de escala planetaria, tales como: cambio climático, adelgazamiento de la capa de Ozono, pérdida de diversidad biológica, entre otros, y la correlativa mayor difusión de temas ambientales en los medios masivos de comunicación.

Los factores mencionados operaron reforzando las demandas de la sociedad en el nivel local, provincial y nacional, por la protección y conservación de los recursos naturales en general, y la implantación y desarrollo de formas de producción y consumo menos agresivas en términos ambientales, que se canalizaron principalmente a través de organizaciones no gubernamentales.

También la incorporación de la temática por parte de los medios de comunicación reforzó dicha tendencia. Así por ejemplo, en la búsqueda de un conocimiento informado de la población, la SDSyPA del MDSyMA financió y promovió la celebración de talleres y reuniones para periodistas, buscando superar los problemas con los que se enfrenta el periodismo, al tratar temas ambientales (falta de entrenamiento o especialización, carencia de presupuesto para cubrir este tipo de noticias, y desinterés de las editoriales).

A lo señalado debe agregarse el reconocimiento de la importancia de los actores no estatales por parte de los organismos internacionales y su correspondiente protagonismo en reuniones y foros internacionales. Concomitante con ello, se incorporaron nuevos mecanismos y estrategias para la participación de los mismos, en diferentes etapas del ciclo de proyectos de los organismos de financiamiento internacional.

Otro factor de relevancia, fue la consolidación de la democracia que permitió, a este respecto, la institucionalización de procesos participativos en los diferentes niveles de gobierno, coadyuvando en la definición e implementación de políticas ambientales de carácter sectorial.

La creación de organismos y áreas específicas, como la Secretaría de la Mujer, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), entre otras, permitieron canalizar consultas y agilizar procesos participativos.

Por último, un factor de gran relevancia institucional en el nivel nacional que se espera contribuya al fortalecimiento de éstos grupo principales, es la creación en diciembre de 1999, del MDS y MA el cual asocia la gestión ambiental con la promoción de los sectores referidos. Es la primera vez, en la historia institucional ambiental del país, que la mayoría de los temas y los objetivos de la Agenda XXI se encuentran, desde el punto de vista formal, incorporados en las áreas de acción de un solo organismo.

C.III. c. Limitaciones:

- Una cultura organizacional gubernamental poco flexible y compartimentada, coherente con una visión del desarrollo económico como sinónimo de crecimiento económico y un sector económico y financiero privado que, salvo excepciones, "*reconoció al mercado*" como referencia exclusiva para la toma de decisiones. Como resultado de ello, la participación de los grupos principales en el proceso de construcción del desarrollo sustentable, sigue siendo menos que la esperada;

- una escasa legitimidad de grupos y asociaciones que se arrogan la representación de sectores determinados de la sociedad civil;

- una dispar capacidad técnica y una gran heterogeneidad respecto de los temas de especialización y orientación, lo que dificulta la adopción de un lenguaje común y la búsqueda de consensos;

- una extensión geográfica del país que dificulta la celebración de talleres y encuentros con la frecuencia y el dinamismo necesario, para atender la profusa agenda ambiental local, nacional e internacional;

- Una insuficiencia de recursos financieros propios, como así también falta de fondos oficiales para financiar la participación de los grupos principales.

C.III. d. Metas y Desafíos:

- Organizar la participación de la sociedad civil en los procesos de consulta para la adopción de decisiones, mediante la conformación de mesas de diálogo y propuestas, con agendas previamente concertadas;

- agilizar los mecanismos para la provisión e intercambio de información, que permitan a los diferentes sectores disponer de la misma, en forma oportuna y garantizar mediante los instrumentos legales pertinentes, el ejercicio del derecho a la información tal lo previsto por la Constitución Nacional en el artículo 41°;

- crear redes de ONG's y de grupos principales con carácter permanente para generar foros de debate y concertación de posiciones entre las organizaciones dedicadas a la misma temática, de manera de agilizar y simplificar las consultas;

- impulsar, con carácter urgente, la constitución y funcionamiento del Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable (CONADESU), como ámbito natural de participación de los sectores públicos, privados y demás grupos principales, para elaborar las estrategias y las políticas correspondientes;

- ampliar la base de la legitimación de las decisiones en materia de sustentabilidad social, ambiental y económica, a través de mecanismos efectivos de consulta, dirigidos al mayor número de sectores representativos;

- garantizar, mediante los instrumentos administrativos necesarios, las prácticas de consultas y de participación de los sectores, en los procesos de decisión, en la gestión y en el control de la gestión.

A continuación se desarrollan en forma genérica los principales objetivos alcanzados, respecto de cada uno de los grupos principales identificados en la Sección III de la Agenda XXI.

C.III. 1. ONGs

En Argentina, en las dos últimas décadas, las ONGs han crecido en número, diversidad y grado de representación, tendiendo a asumir funciones tales como: formación de la opinión pública, detección de problemas ambientales, promoción de acciones y normas, ejecución de proyectos y participación en acciones conjuntas con organismos públicos, en los distintos niveles de gobierno.

Concomitante con la evolución señalada en párrafo precedente, los organismos públicos ambientales, en las diferentes jurisdicciones, han debido profundizar el nivel de relacionamiento con las ONG's y sus redes, a través de foros, seminarios, congresos y encuentros, lo que ha facilitado avanzar en una comunicación mas directa. Asimismo, estas organizaciones han sido incorporadas en programas, proyectos y actividades, implementadas desde el ámbito oficial; también diversas ONG's han solicitado y obtenido fondos para la financiación de actividades orientadas al desarrollo de políticas ambientales, a la conservación de la naturaleza, a la mitigación de la contaminación y a la educación e información ambiental.

Una señal importante dada a las ONGs, desde el sector oficial, en concordancia con lo establecido en el Capítulo 27 de la Agenda XXI, en el sentido de promulgar leyes que

concedan a las ONG's el derecho a recurrir a medios jurídicos para salvaguardar el interés público, fue la transformación de dicho compromiso político, en una obligación jurídica que se tradujo en la reforma de la Constitución Nacional de 1994. En ésta se otorgó la legitimación para ejercer la acción de amparo, en defensa de los derechos que protegen el ambiente, al afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines (art. 43). Dicha norma en un claro reconocimiento a la labor que desarrollan las organizaciones no gubernamentales.

También debe señalarse, como un paso importante en materia de organización de la sociedad, la conformación de redes de ONG's con un destacado protagonismo en la discusión y definición de posiciones en los temas de la agenda ambiental nacional, regional e internacional.

En el caso del organismo ambiental nacional, éste ha incentivado y apoyado la conformación de estas instancias de participación en los procesos de elaboración de la posición nacional, en los foros y convenios internacionales. El éxito de tales iniciativas ha sido disímil, con experiencias satisfactorias en algunos ámbitos, como por ejemplo el Foro del Buen Ayre (integrado por más de cien ONG's), el cual acompañó el proceso de consolidación de la posición del país, ante la Convención sobre Cambio Climático.

En 1998 la entonces SRN y DS brindó apoyo económico para la constitución del Foro y facilitó la celebración de reuniones, además de generar instancias de intercambio de información y debate con las autoridades y funcionarios de la entonces Secretaría. El apoyo económico fue necesario para la participación de representantes de ONGs del interior del país carentes de recursos propios, para financiar el desplazamiento a la Capital Federal y acceder a documentos de trabajo.

Por último, es importante señalar que dada la importancia que revisten las ONGs en la construcción del desarrollo sustentable, desde diferentes áreas de los gobiernos nacional y provinciales, se continúan promoviendo canales permanentes de comunicación y consultas con las mismas.

En ese sentido, para la elaboración del presente Informe Nacional, que refleja la visión del sector oficial, se considero oportuno incluir en el ítem D.III.1., una síntesis de las recomendaciones que efectuaron algunas ONGs, con relación al estado de cumplimiento de la Agenda XXI. Las mismas fueron presentadas en el marco de la primera consulta efectuada por la SDS y PA del MDS y PA, a cargo de la coordinación del Informe.

Durante el transcurso del año, se ha previsto continuar con dicho proceso, a través de diferentes actividades que se han programado a tal efecto, lo que permitirá contar con la opinión de un espectro más amplio de las ONGs, como parte de la contribución al proceso preparatorio de Río + 10.

C.III.2. Mujer

- La Reforma Constitucional ocurrida de 1994 otorgó la base jurídica para el efectivo ejercicio de la plena ciudadanía por parte de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. El rango constitucional otorgado a los Tratados y Convenciones de Derechos Humanos y, dentro de éstos, a la Convención Sobre la Eliminación de Toda

Forma de Discriminación contra la Mujer, favoreció un activo proceso de empoderamiento de las mujeres de los espacios públicos.

- El reconocimiento constitucional de la igualdad real de oportunidades entre mujeres y varones en el acceso a cargos públicos ha significado la irrupción de numerosas mujeres a espacios importantes de decisión política. Es a partir de estos espacios ocupados, mayoritariamente legislativos, y de la institucionalización de áreas propias como el Consejo Nacional de la Mujer que se inicia un proceso de reformas legislativas importantes.

- Se consiguió la adecuación de la legislación interna a las disposiciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y otros tratados internacionales, mediante la sanción de leyes específicas de nivel nacional y provincial.

- Se trabajó la incorporación de la perspectiva de género en programas implementados en diferentes áreas del Gobierno Nacional, en especial, en aquellos destinados a mujeres rurales.

- La participación del Consejo Nacional de la Mujer (CNM) en la Delegación Oficial de la República Argentina ante la Conferencia de Medio Ambiente de Río de Janeiro de 1992, posibilitó la realización de una serie de eventos y preparación de materiales que ayudaron a instalar esta temática con relación a las mujeres. Este organismo tuvo a su cargo la difusión de la Agenda 21 en las Areas Mujer de todo el país.

- En tal sentido en la SDSyPA del MDS y MA, se incorporó la perspectiva de género en todas las etapas del Programa de Lucha contra la Desertificación y Mitigación de la Sequía, en cumplimiento del mandato de la Convención de Lucha contra la Desertificación que resalta la importancia del rol de las mujeres, especialmente en las zonas rurales, así como la necesidad de incorporarlas en todos los niveles de los programas de acción;

- Se creó el Grupo Mujer y el Desarrollo Sustentable, en el ámbito de la entonces SRN y DS; dicho Grupo fue encargado de asesorar al entonces Subsecretario de Recursos Naturales, sobre la mejor manera de incorporar la perspectiva de género en la consideración de los temas de competencia del organismo ambiental.

- Se creó el Consejo Nacional de la Mujer, en 1992 por Decreto Presidencial N° 1426, el cual responde a las recomendaciones realizadas por la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ubicado a un alto nivel dentro de la Administración Central y con personal y presupuesto propio. Este organismo tiene continuidad jurídica y administrativa en el actual Gobierno Nacional que asumió en el mes de diciembre de 1999, que ha decidido colocar el tema de la mujer como un tema de Estado, reconociendo su compromiso con el cumplimiento del Plan de Trabajo diseñado por el CNM.

A pesar de lo señalado falta de una mayor articulación institucional de las políticas y la planificación social, tendiente a lograr una mayor equidad en los beneficios del desarrollo económico y social entre mujeres y varones, así como

la profundización de una mayor incorporación de la perspectiva de género en su diseño, implementación y evaluación.

También los planes de ajuste aplicados en el país han representado un obstáculo para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, y tienen un impacto negativo en la población en general y, de manera particular, en la situación de las mujeres afectando su vida como trabajadoras, como consumidoras y como ciudadanas.

A lo señalado debe agregarse las diferentes condiciones socio-económicas y culturales entre las distintas regiones y provincias de nuestro país, hace que las mujeres de cada una de ellas presenten situaciones diferenciadas y desiguales, tanto en el acceso a la información sobre sus derechos como en cuanto a su participación activa en los distintos ámbitos de la sociedad, por un lado y por otro, con relación al acceso a los recursos para la satisfacción de sus necesidades.

Por último se señala que el país tiene previsto dentro de sus políticas públicas avanzar en:

- Garantizar el cumplimiento efectivo de los tratados internacionales de derechos humanos incorporados a la Constitución Nacional, como así también que las mismas sean planteadas desde una perspectiva de género, que contribuyan a superar las diversas formas de discriminación contra las mujeres y promuevan las condiciones sociales adecuadas para garantizarles el ejercicio efectivo de sus derechos, a través de convenios de intervención conjunta con las áreas gubernamentales de educación, justicia, trabajo, salud y medio ambiente;

- asegurar el acceso pleno de la mujer a la atención integral de su salud, intensificar los programas de prevención, investigación e información, y hacer frente con iniciativas eficaces a las enfermedades que particularmente las amenazan y afectan, como el SIDA, el cáncer y la desnutrición;

- prevenir y erradicar la explotación sexual y comercial de niñas, niños y adolescentes es también otra de las metas previstas a alcanzar;

- capacitar a las mujeres desocupadas para desarrollar actividades no tradicionales a través del Programa de Emergencia Laboral y el de Formación Técnica y Profesional para mujeres de bajos ingresos;

- combatir la violencia contra las mujeres y garantizar su acceso a la justicia, en cumplimiento de la Convención Interamericana de Belem do Parà sobre sanción, prevención y erradicación de la violencia contra la mujer;

- enriquecer el proceso de fortalecimiento institucional a través del Plan Federal de la Mujer;

- profundizar el intercambio institucional, para el accionar conjunto, entre el Consejo Nacional de la Mujer y la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental que a través de la recientemente creada Dirección Nacional de Ambiente Humano, ha fijado como una de sus Areas de Trabajo la de "Género y Medio Ambiente".

En el ANEXO D.III.2.a. se describen los planes y programas implementados para la incorporación de la perspectiva del género en programas y proyectos.

C.III.3. Infancia y Juventud:

Con relación a la infancia, el organismo ambiental nacional, viene desarrollando diferentes actividades. A tal efecto convocó en el año 2000 a dicho sector, a participar en el Concursos de Pintura Infantil, en ocasión de celebraciones ambientales (Día del Medio Ambiente, Día Internacional para la Protección de la Capa de Ozono etc.). También, en el mismo año se realizó en la sede de dicho organismo la Primera Feria del Libro Ambiental abierta al público, y con visitas programadas de alumnos y docentes.

En el ANEXO D.III.3. se describen las principales actividades desarrolladas a fin de fortalecer el papel de la infancia en la promoción del desarrollo sustentable.

Con relación a los jóvenes, en el ámbito de la SDSyPA del MDSyMA se puso en marcha, a partir de 2000, el Programa Jóvenes por el Medio Ambiente. En el ANEXO D.III.3. se desarrolla dicho Programa, y en el ANEXO D.II. y D.IV. se presentan experiencias participativas tanto con niños como con jóvenes a través de diversos proyectos de carácter sectorial.

C.III.4. Grupos indigenistas:

Hasta tanto se realice el próximo censo nacional, se identifican en el país 18 pueblos distribuidos en 15 provincias. El número aproximado de indígenas se estima en 1.000.000 de personas, asentados en unas 800 comunidades, y representan el 1,5% de la población total. Dichos pueblos son: *mapuche* (Neuquén, Río Negro, Chubut, Buenos Aires); *ranculche* (La Pampa); *wichi* (Salta, Formosa, Chaco); *chulupi* (Formosa); *chorote* (Formosa, Chaco, Salta); *mocovi* (Santa Fe, Chaco); *toba* (Salta, Formosa, Chaco, Buenos Aires, Santa Fe); *pilaga* (Formosa); *ava guaraní* (Salta, Jujuy); *chane* (Salta); *guarani mby'a* (Misiones); *tupi guarani* (Salta, Jujuy); *tapiete* (Salta); *kolla* (Salta, Jujuy, Buenos Aires); *diaguito-calchaqui* (Tucumán, Salta, Catamarca, la Rioja, Santiago del Estero); *tehuelche* (Chubut y Santa Cruz); *huarpe* (Mendoza, San Juan); *yagan y ona* (Tierra del Fuego).

El censo referido permitirá no sólo actualizar la composición de los grupos de comunidades sino también conocer el segmento de población indígena que, como consecuencia de un largo proceso de migración interna, se ha ido desplazando hacia los centros urbanos.

Desde el año 1985 los grupos indígenas se encuentran comprendidos en los alcances de la Ley N° 23.302, Ley sobre Política Indígena y de Apoyo a las Comunidades Aborígenes, la que tiene entre sus objetivos la implementación de planes y programas en pro de la defensa y desarrollo de la población indígena respetando sus valores y modalidades. Se crea para el cumplimiento de dichos fines y por la misma Ley, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Dicha Ley se encuentra reglamentada por el Decreto Ley N° 155/89.

En líneas generales puede señalarse que desde 1992 a la fecha se han verificado importantes avances en materia de legislación en el reconocimiento a los derechos indígenas.

La reforma de la Constitución Nacional, 1994, y en especial lo enunciado por el art. 75°, inciso 17° en cuanto reconoce la pre existencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos y establece la obligación de la participación indígena en los intereses que los afecten.

El dictado de la Resolución N° 4811/96 (ex Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación), por la cual se establecen criterios homogéneos de inscripción en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Ley N° 23.302, art.2°), respetando la peculiaridad cultural.

La creación del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), por medio de la sanción de la Ley N° 24.515, a fin de que elabore políticas y medidas concretas para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo.

La ratificación del Convenio sobre Biodiversidad, art. 8° j, por el que se establece la directa conexión entre diversidad biológica y diversidad cultural.

La ratificación del Convenio 169 OIT Sobre Pueblos Indígenas y Tribales, con fecha 3/7/00, el cual consagra los derechos históricamente demandados por las comunidades indígenas.

También se ha avanzado en el diseño y ejecución de planes y políticas indígenas, en particular a lo referido a proyectos de desarrollo sustentable en comunidades indígenas, el fortalecimiento institucional de las mismas con el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, el desarrollo de planes de co-manejo del medio ambiente entre las comunidades indígenas y organismos como la Administración de Parques Nacionales y la elaboración de una política orientada a la preservación de la biodiversidad con participación de las comunidades indígenas.

También debe señalarse que la apertura democrática iniciada a partir de 1983 produce una revalorización de las culturas indígenas existentes y plantea un desafío en la sociedad toda de reconocerse como integrante de un país pluricultural.

Esta consagración de derechos produce en la población indígena, especialmente en los integrantes jóvenes, una fuerte valorización que los lleva a propuestas de rescate cultural. Asimismo, distintas instancias indígenas organizadas se convirtieron en propulsoras de la gran reforma legislativa del año 1994.

Por su parte, la activa labor desarrollada por el INAI a través de la participación propuesta a las provincias con asentamientos aborígenes con las que se han firmado convenios de cooperación.

El INAI encara una política tendiente a la profundización del diálogo con las comunidades indígenas y los gobiernos provinciales atendiendo los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y en especial sobre personería jurídica, tierra, educación bilingüe e intercultural, participación y desarrollo sustentable.

Como consecuencia de dicha política el INAI ha promovido y promueve acuerdos intersectoriales oficiales provinciales y nacionales, y también internacionales (ver Anexos)

Pese a lo señalado ha habido retrasos en la constitución del INAI conforme la ley de creación la que en su art. 5°. Recién en agosto del 2000, por Decreto 677/00 se establece que será una entidad descentralizada con participación indígena, pero aun el Ministerio de Economía no ha aprobado una nueva estructura de funcionamiento y un presupuesto adecuado a su funcionamiento.

Esto dificulta el diseño y aplicación de una política indígena sostenida en el tiempo debido a los regulares cambios en la administración central que modifican la subordinación de la entidad y la irregular asignación de fondos para el cumplimiento de las labores específicas

Por último se señala que respecto de este grupo principal, el país prevé continuar con las tareas inherentes a:

- La regularización dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas;
- la divulgación de los derechos de los pueblos nativos;
- el reconocimiento de las personerías jurídicas aborígenes;
- la coordinación con distintas áreas del sector oficial tendientes a la aplicación de la Ley 23.302 mediante el aprovechamiento de recursos humanos y financieros, y con otros sectores de la sociedad civil con experiencia en la temática aborigen;
- el establecimiento de acciones conjuntas con organismos vinculados al manejo de los recursos naturales tendientes a la incorporación de familias y comunidades aborígenes que se sustentan de los mismos.

C. III. 5. Iniciativas de las Autoridades Locales

C. III. 5.a. Logros:

Respecto de las iniciativas de los gobiernos municipales las mismas han sido múltiples. Sin embargo, dado el escaso tiempo disponible para elaborar el presente Informe Nacional, no fue posible consultar a los mismos. En razón de lo expresado faltan transcribir los logros y las experiencias desarrolladas en dichos ámbitos desde 1992 a la fecha.

A pesar de lo señalado, en el ANEXO D.I. y D.II. se transcriben algunas experiencias sectoriales llevadas a cabo en el ámbito municipal a través de programas o proyectos (manejo de residuos domiciliarios, salud y medio ambiente, áreas protegidas etc.).

C. III. 5. b. Metas y Desafíos:

Pese a lo expresado en párrafo precedente, respecto de la falta de información sobre las actividades implementadas por los gobiernos locales para dar cumplimiento con los objetivos de la Agenda XXI, debe señalarse que la actual gestión de gobierno entiende que la protección ambiental y el desarrollo sustentable en los ejidos municipales del país, es un tema de gestión prioritaria. En tal sentido, se han concentrado los recursos y esfuerzos para optimizar la calidad de vida en los asentamientos urbanos y rurales del país, promoviendo la racionalidad en la gestión de los recursos físicos, económicos y sociales y fomentando la colaboración entre los municipios y los organismos ambientales provinciales. Para avanzar en tal sentido, se ha suscrito en el presente año un acuerdo, entre la SDS y PA del MDS y MA y la Secretaría de Asuntos Municipales del MI, tendiente a constituir una Comisión de Integración para Municipios Sustentables.

También se tiene proyectado incorporar un componente orientado al Desarrollo Sustentable para las Ciudades, dentro del marco de la 2da. Fase del Plan Nacional de Modernización de los Gobiernos Locales que ejecuta la Secretaría de Asuntos Municipales del MI. En el mismo se prevé aplicar metodologías de planificación estratégica en ciudades que conforman una micro-región, y promocionar emprendimientos económicos basados en el uso sustentable de los recursos naturales.

C. III. 6. Industria y Comercio

Con relación a este punto debe destacarse que el sector privado vinculado a la industria y al comercio, también ha realizado importantes esfuerzos a favor de la protección del medio ambiente. Sin embargo, dada la realidad imperante en el país, las iniciativas a favor del medio ambiente encuentran múltiples obstáculos para ser implementadas por el sector de las PyMES. Esto se debe a las escasas posibilidades que tienen las pequeñas y medianas empresas de medir la relación entre el desempeño económico y ambiental que involucra, entre otros aspectos, la prevención de la contaminación, la reducción en el origen, la minimización de residuos y la producción limpia. A esto debe sumarse que desde el ámbito oficial no existe una clara política que promueva instrumentos económicos suficientes que estimulen una gestión ambientalmente sustentable de las actividades productivas.

A pesar de lo señalado, es importante remarcar que desde el organismo ambiental nacional, se han llevado adelante múltiples experiencias y actividades con el sector de la industria y el comercio, los cuales han participado activamente de las convocatorias promovidas desde la SDS y PA, como también de las actividades impulsadas desde otras áreas de gobierno.

Dado que los ejemplos son muy diversos, se omite aquí su mención y se remite a las descripciones realizadas en los ANEXOS: D.II.1; D.II.4; D.II.5; D.II.6.2; D.II.7; D.II.8; D.II.10; D.II.11; D.II.13.2 y D.IV.4.

C.IV. SECCION IV – Medios de ejecución

C.IV.1. Mecanismos de financiación

En el último decenio hubo un aumento de recursos presupuestarios destinados a objetivos directa o indirectamente relacionados con lo ambiental, principalmente de origen externo, provenientes de donaciones y de créditos de organismos internacionales o de agencias de cooperación de algunos países.

Durante ese período gran parte de la masa de recursos fue orientada al saneamiento fiscal y al desarrollo económico, a la reestructura del Estado Nacional y demás jurisdicciones. Una porción de dichos recursos tuvo como destino el inicio de acciones de fortalecimiento institucional de estructuras relacionadas con los recursos naturales y el ambiente humano.

Como ejemplo de lo señalado se menciona: Programa de Desarrollo Institucional Ambiental (PRODIA); Programa de Mejoramiento de los Servicios Agropecuarios (PROMSA); Programa de Servicios Agropecuarios Provinciales (PROSAP); Proyecto de Desarrollo Forestal (FORESTAR); Proyecto Bosques Nativos y Areas Protegidas; Programa de Saneamiento Financiero y Desarrollo Económico de las Provincias Argentinas (denominados Provincias I y II); Programa de Asistencia al Sector Minero Argentino (PASMA), etc.

También es dable destacar la aplicación de donaciones procedentes del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM -GEF) y del Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal (FMPM), entre los más importantes, que han permitido el apoyo de proyectos con adicionalidad ambiental o para el cumplimiento de metas de emisión.

Otras fuentes que han participado con fondos en proyectos o en acciones ambientales concretas son la Cooperación Alemana (GTZ), la Cooperación Japonesa (JICA) y la Cooperación Canadiense (CIDA).

En los últimos años, y producto de la Convención sobre Cambio Climático, han incursionado instituciones o privados con fondos para el pago a la adicionalidad de secuestro de carbono que generan las plantaciones forestales comerciales.

C.IV.1.a. Logros:

- La creación de estructuras gubernamentales en las distintas jurisdicciones (Ministerios, Secretarías, Direcciones Generales, Departamentos o Unidades) cuya finalidad es la protección de los factores ambientales, en algunos casos han logrado ser fortalecidas a través de programas con financiamiento externo. A modo de ejemplo puede citarse el Programa de Caminos Provinciales, que ha dado lugar a la formación de Unidades Ambientales en la Direcciones Provinciales de Vialidad, modificando conductas no amigables con el medio, en el desarrollo de obras de infraestructura;

- el fortalecimiento institucional de estructuras administrativas, ya existentes, relacionadas con los bosques, la caza, la pesca y el manejo del agua, ha permitido una mayor presencia estatal y por lo tanto mejor regulación de las actividades humanas, mediante la incorporación de normas y procedimientos, mejora de la organización interna, capacitación y equipamiento;

- La incorporación de áreas específicas dentro de las estructuras gubernamentales destinadas a evaluar los estudios y evaluaciones de impacto ambiental de los proyectos públicos y privados;

- La puesta en marcha de Centros de Investigación y Extensión en puntos importantes del territorio como el CIEFAP (Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico) y el Centro de Salmonicultura en San Cabao (Provincia del Neuquén);

- La Administración Pública Nacional ha utilizado préstamos internacionales para efectuar, con complemento de sus propios recursos, programas orientados al fortalecimiento institucional, el desarrollo de su capacidad técnica, capacitación de recursos humanos y ejecución de experiencias demostrativas.

A los logros precedentes deben agregarse los aportes sectoriales efectuados por programas específicos, los cuales son descritos en el Item D.I., D.II. y D.III.

C.IV.1.b. Factores que contribuyeron a esos logros:

- Las responsabilidades asumidas por los países desarrollados, en oportunidad de la Cumbre de Río, a través de sus agencias de cooperación, y los compromisos de los organismos multilaterales de crédito (BM y BID) y de las agencias de desarrollo (PNUD, PNUMA), aunque los fondos que se hicieron efectivos no fueron coincidentes con los comprometidos por los países desarrollados;

- las actividades llevadas a cabo en la búsqueda de fondos para la implementación de proyectos ambientales por parte de las ONGs;

- la difusión, en los distintos medios de comunicación, de la temática ambiental;

- la decisión de los organismos de crédito, (BM, BIRF y BID), de incorporar los estudios y evaluaciones de impacto ambiental, según correspondiera, a los proyectos o programas a ser financiados, para lo cual establecieron directrices a seguir en las etapas de preinversión y ejecución de los mismos; esta decisión presionó sobre áreas gubernamentales de las distintas jurisdicciones, no acostumbradas a internalizar los aspectos ambientales en sus proyectos;

- la decisión de fortalecer, a través del Provincias I y II, áreas sustantivas provinciales relacionadas con el manejo de los recursos naturales.

C.IV.1.c. Limitaciones

- Las restricciones establecidas en el Presupuesto Nacional y los ajustes realizados en la administración pública en las distintas jurisdicciones, fundadas en el pago de las amortizaciones de la creciente deuda externa, limitan los fondos asignados a los proyectos ambientales con financiamiento externo, principalmente en los fondos de contraparte nacional; esto a su vez mengua la capacidad operativa en las áreas que ya fueron fortalecidas a través de proyectos y programas con financiamiento externo;

- la falta de un seguimiento ex post de los proyectos y programas, lo que dificulta la evaluación del movimiento de los indicadores establecidos;

- la no internalización de la importancia económica del cuidado de los factores ambientales en los diferentes niveles de las estructuras administrativas responsables de aplicar las normas;

- la ausencia de compromiso sobre los objetivos institucionales de los programas y proyectos, lo que acentúa las dificultades ya existentes y hace que los mismos sean poco sustentables;

- la escasa participación de los actores sociales en las acciones institucionales, en los proyectos y en los programas con financiamiento externo y en los estudios de impacto ambiental, genera en la sociedad situaciones de rechazo o indiferencia, reduciendo los beneficios que pueden aportar los instrumentos citados;

- los compromisos y la corrupción en los distintos niveles de las estructuras responsables de la aplicación de las políticas ambientales acotan, minimizan o anulan los resultados esperados;

- las deficientes metodologías de evaluación, y la tasa de corte aplicada por los organismos internacionales de crédito a los proyectos con fuerte impacto ambiental;

- las contradicciones existentes en los organismos internacionales, entre las políticas de ajuste estructural aplicadas, los proyectos financiados no amigables con el medio y los proyectos ambientales;

- las políticas gubernamentales que favorecen con instrumentos económicos, proyectos ambientalmente negativos.

C.IV.1.d. Metas y desafíos:

- Aumentar la participación de los actores sociales e institucionales, en las distintas etapas de los proyectos, para dar sostenibilidad a los objetivos enunciados, dado que ésta es una de las formas de garantizar la continuidad de las acciones establecidas y controlar su cumplimiento;

- capacitar en forma permanente a los recursos humanos institucionales y a los actores sociales involucrados en programas y proyectos, con o sin financiamiento externo;

- socializar los conocimientos y la información obtenida a través de los programas y proyectos, entre las instituciones gubernamentales y los centros de investigación;

- eliminar políticas que subsidian con instrumentos económicos, (por ejemplo los diferimientos impositivos), a las actividades productivas ambientalmente negativas;

- adecuar la metodología de formulación y evaluación de los programas y proyectos de los organismos de crédito; (por ejemplo en la evaluación económica de las externalidades, en el mediano y largo plazo poner como eje sustancial las cuestiones sociales y ambientales);

- lograr la incorporación de instrumentos de planificación y ordenamiento ambiental del uso del suelo, dado que éstos favorecen la realización de actividades o de proyectos no agresivos y amigables con el medio ambiente, y disminuyen los conflictos sociales.

C.IV.2. Tecnología Ecológicamente Racional

C.IV.2 .a. Logros:

- cooperación mediante numerosas actividades de acercamiento entre los actores locales vinculados a la producción limpia;

- conformación de la Mesa Redonda de Producción Limpia, como ámbito nacional propicio para el intercambio de ideas, experiencias y generación de

acciones conjuntas, con la participación del gobierno, el sector privado y las instituciones de ciencia y tecnología;

- establecimiento de relaciones de cooperación e intercambio de experiencias en el ámbito regional e internacional, con diversos centros nacionales de tecnología (Brasil, México, Chile, Colombia y con el PNUMA).

- aprobación de la Declaración de la Producción Limpia, firmada en la ciudad de Buenos Aires el 5 de octubre de 2000, por lo siguientes países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, EE.UU., México y Paraguay. La aludida Declaración también ha sido suscrita por las provincias de Mendoza, Chaco, Catamarca, Jujuy, Chubut, Santa Cruz, Tucumán, Neuquén, Santa Fe, Entre Ríos, Formosa, Buenos Aires, Tierra del Fuego, La Pampa y Salta.

C.IV.2 . b. Factores que contribuyeron a los logros:

Para diseñar y ejecutar políticas y acciones destinadas específicamente a la promoción de las tecnologías ecológicamente racionales, se creó en 1998 la Dirección de Tecnologías, Procesos y Servicios Ambientales, dependiente hoy de la SDS y PA.

A fin de llevar adelante los objetivos de la aludida Dirección, se puso en marcha el Programa Nacional para la Promoción de la Producción Sustentable, el cual es descrito en el ANEXO D.IV.2.

C.IV.2 . c. Limitaciones:

La escasa importancia dada al tema, dentro de las políticas públicas, impide la formulación de una estrategia en materia de tecnologías limpias. Como consecuencia de ello, tampoco se visualizan oportunidades reales para la implementación de dichas tecnologías, en el ámbito de las PyMES.

En numerosas oportunidades, los países de América Latina y el Caribe han señalado como una importante barrera para la aplicación de políticas de producción limpia, las dificultades para acceder a material informativo, manuales y documentos sobre el tema, dado que la mayor parte se encuentra disponibles únicamente en idioma inglés.

C.IV.2 . d. Metas y Desafíos:

- Profundizar el camino iniciado para promover la adopción de tecnologías limpias, la cooperación entre los actores y el aumento de la capacidad local, fortaleciendo asimismo, la estructura institucional de ciencia y tecnología, e integrando cada vez más las cuestiones del desempeño ambiental en el diseño de políticas económicas y sociales;

- fortalecer e incrementar la participación de todos los países de la región en el Consejo de Gobiernos de las Américas para la Producción Limpia, constituido en Buenos Aires el 6 de octubre de 2000, con el objetivo general de fomentar el diálogo y la cooperación entre los países respecto de la Producción Limpia con un horizonte de corto, mediano y largo plazo;

- conformar una red integrada por todos los Centros Nacionales de Producción Limpia de la Región y otros organismos e instituciones abocados al tema, para intercambiar experiencias, conocimientos y fortalecer la capacidad endógena local, a fin de generar y aplicar tecnologías ecológicamente racionales;

- formar un grupo de trabajo interregional, con el apoyo de algún organismo internacional, para realizar las traducciones de material informativo a las lenguas de la región (español y portugués);

C.IV.3. Ciencia y Tecnología

C.IV.3.a. Logros:

- Creación del Gabinete Científico y Tecnológico (GACTEC) como órgano de programación de políticas de ciencia y tecnología, con la participación de todos los ministerios del gobierno, como sustento marco del sistema científico y tecnológico nacional;

- nacimiento de un espacio institucional para la formulación y seguimiento de políticas federales de ciencia y tecnología (Consejo Federal de Ciencia y Tecnología);

- creación de una agencia nacional para la implementación de proyectos de ciencia y tecnología;

- ejecución de procesos orientados a la conformación y consolidación de ámbitos de coordinación de agentes e instituciones públicas y privadas de ciencia y técnica en los diferentes niveles de gobierno;

- sanción de la Ley de fomento a la innovación tecnológica;

- establecimiento de un fondo para financiar actividades relacionadas con la tecnología.

C.IV.3.b. Factores que contribuyeron a los logros:

En el campo de la ciencia y la tecnología se identificó claramente como un desafío clave para el logro de un desarrollo sustentable el coadyuvar a la incorporación sistemática de conocimientos científicos.

En ese contexto el rol del organismo ambiental nacional, adquirió las características de promotor y catalizador. Para ello viene participando en los procesos de identificación de prioridades tendientes a satisfacer las demandas de insumos científicos y tecnológicos, por parte de la sociedad en general y de los sectores productivos en particular. También integró el órgano ejecutivo del sistema científico tecnológico, en cuyo ámbito se elaboró una agenda de cuestiones ambientales de enfoque prioritario:

- Conservación de la diversidad biológica;
- cambio climático global;
- manejo integrado y gestión de cuencas hídricas;

- manejo y gestión de recursos naturales renovables;

Los temas citados integraron en su oportunidad, el Plan Nacional Plurianual de Ciencia y Tecnología, cuya ejecución fue coordinada por el Gabinete Científico Tecnológico (GACTEC) entidad dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, del Gobierno Nacional.

En el Plan Plurianual de Ciencia y Tecnología de 1998/2000 instrumentado por la ex Secretaría de Ciencia y Tecnología (SECYT), actual Secretaría para la Tecnología, la Ciencia y la Innovación Productiva (SETCIP), estableció como uno de los objetivos estratégicos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el desarrollo socio-económico sustentable del país. Dicho Plan debía contribuir a crear oportunidades para el empleo productivo de la población; acrecentar su nivel educativo y cultural; favorecer una mejor calidad de vida; aumentar la competitividad de la economía; propiciar un mayor cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales.

c. Limitaciones:

En el Plan Plurianual 1998/2000, se incluyó de forma sectorial los aspectos relativos a la sustentabilidad ambiental. Así por ejemplo se encuentran lineamientos específicos sobre biotecnología, mar argentino, minería y producción agroindustrial. Aún así, dicho Plan no hizo referencia alguna al objetivo estratégico de la contribución de la ciencia y la tecnología para el desarrollo sustentable.

En el Plan Plurianual 1999-2001, el objetivo estratégico sigue siendo el mismo que el Plan anterior. No obstante, incorpora de manera sectorial, por ejemplo en el ámbito de energía, la temática ambiental, al igual que en tecnologías limpias y en biodiversidad. También incorpora como temática sectorial, el cambio climático y sus implicancias sobre la vida social y productiva del país. No obstante carece de una planificación estratégica orientada a la sustentabilidad, tal como ocurrió con el Plan anterior.

d. Metas y Desafíos:

A partir de 2000, con el cambio de gobierno, se incorporaron nuevas áreas prioritarias que contienen algunos de los aspectos de las políticas para el sector previstas en la Agenda XXI.

Se definen áreas prioritarias tales como: ambiente y recursos energéticos; alimentos; industria y calidad de vida y desarrollo social y político. Estos grandes temas fueron sistematizados e integrados de forma tal de contener cada uno de ellos usos y manejos apropiados y sustentables, tanto desde el punto de vista de su preservación, su uso, su gestión y su producción, contemplando también las consecuencias para la vida social, económica y política del país.

La cuestión ambiental y el desarrollo sustentable se incorporan sintéticamente como eje transversal contenido en las diferentes áreas prioritarias.

En este sentido, los lineamientos políticos de la SETCIP han intentado hacerse eco de los contenidos de la Agenda XXI, marcando las prioridades políticas para el desarrollo del sector.

Asimismo se han comenzado a adoptar nuevas modalidades de dialogo para lograr una mejor integración entre diferentes actores socio-económicos, políticos y del conocimiento, con el objeto de establecer enfoques efectivos relacionados con el medio ambiente y el desarrollo sustentable.

Respecto del plano internacional, se ha intentado promover en los acuerdos de cooperación bilateral y multilateral, los temas vinculados a la temática de desarrollo sustentable.

A modo de síntesis puede señalarse que el país a través de sus organismos competentes en materia de ciencia y técnica, en los diferentes niveles de gobierno, se encuentra transitando un camino positivo. Si bien este es incipiente, se está fortaleciendo el desarrollo de trabajos de investigación científica de orden multidisciplinario que hacen a la esencia del enfoque de la Agenda XXI.

En el ANEXO D. IV.3. se brinda un detalle de las líneas de investigación promovidas.

C.IV.4. Educación

C.IV. 4. a. Logros:

- Se generaron modelos de gestión integrados, incluyéndose la realidad ambiental en los planes de estudio, bajo modalidades extracurriculares, y sujetas a la elección de comunidades educativas, mayoritariamente sensibilizadas;

- se realizaron encuentros de participación, ofreciéndose espacios de capacitación variada con el objetivo de difundir, con distintos grados de profundización, las ciencias ambientales y el compromiso de solidarizarse con el entorno;

- se incluyó a partir de la reforma de 1994 de la Constitución Nacional, en el artículo 41, el derecho a la información y a la educación ambiental, como herramientas para el logro del desarrollo sustentable;

- se incluyeron normativas específicas en las legislaciones provinciales, marcando una tendencia cada vez más vigorosa, respecto del conjunto de responsabilidades y derechos en materia de educación ambiental;

- se aprobó el Documento base de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental para la República Argentina (Resolución SRNyDS N° 1346/99), previamente puesto a consideración en un Encuentro Nacional de Educación Ambiental, del cual participaron expertos nacionales e internacionales, y representantes de sectores gubernamentales y no gubernamentales que integraron cinco grupos: Educación, Universidades, Areas Protegidas, ONGs con Municipios, y Medios de Comunicación;

- se establecieron Centros Regionales de Educación Ambiental, concebidos como unidades de gestión ubicadas en un espacio territorial estratégico para lograr una mayor articulación con todos los sectores sociales comprometidos con la educación formal, no formal e informal, constituyéndose en puntos focales para la implementación de la una estrategia nacional de educación ambiental;

- se institucionalizó, en el año 2000, la Comisión de Educación Ambiental, en el ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), donde se hallan representadas todas las instituciones provinciales con injerencia sobre el medio ambiente;

- se firmó el 3 de mayo de 2000, un Convenio Marco de Cooperación en materia de educación ambiental entre la SDS y PA y la CETERA.

C.IV.4. b. Factores que contribuyeron a los logros:

- El creciente interés y preocupación de la sociedad por las cuestiones ambientales apoyados por ciertos medios masivos de comunicación han jugado un rol importante en materia de educación informal;

- la relevancia que dentro de los ámbitos formales de la educación primaria, terciaria, universitaria y de posgrado le dan a la formación en temas vinculados al medio ambiente;

- las posibles salidas laborales que se ofrecen desde los ámbitos universitarios para la formación de profesionales en el área ambiental.

C.IV.4. c. Limitaciones:

- La regionalización en materia de educación ambiental, atendiendo al sistema federal de gobierno y a las disímiles realidades ambientales que presenta nuestro país, no tuvo el éxito esperado;

- los graves problemas de desempleo que enfrenta el país, merman las capacidades de formación en el área de la educación en general.

C.IV.4. d. Metas y Desafíos:

- Arraigar, desde los sectores primarios de la enseñanza en todo el ámbito nacional, la inclusión permanente de la dimensión ambiental en las escuelas y en el programa de formación docente en el último año de la carrera de magisterio;

- promover dentro del nivel terciario oficial, el Profesorado de Educación Ambiental, como solución efectiva al tratamiento de este enfoque en forma estrictamente profesional;

- afianzar el tema de la educación ambiental en forma masiva por los medios tecnificados de información y comunicación, y en los medios de comunicación en ciclos permanentes, que atraen el interés del público, y que inviten a una constante reflexión sobre la necesidad de preservar el medio ambiente;

- cooperar con la Red de Formación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente a fin de lograr el financiamiento de cursos de formación docente en educación ambiental, con técnicas metodológicas y didácticas ambientales, respetando la diversidad cultural de los distintas naciones y avanzar en la consolidación de la Red en la Argentina, para lograr un mayor involucramiento de las Universidades, fundamentalmente del interior del país, y sumar a otros ámbitos académicos para el próximo año;

- crear un ámbito participativo y articulado con los países de la región, para el traslado de enfoques, experiencias e iniciativas que surjan en la materia;

- concertar un trabajo cooperativo entre el organismo ambiental nacional y el Ministerio de Educación para actuar especialmente con el Programa Nacional de Escuelas Prioritarias en zonas urbanas y rurales ubicadas en sectores desfavorecidos, población con necesidades educativas especiales, población aborígen y población joven y adulta con bajos niveles educativos, tomando como eje transversal el desarrollo sustentable y el medio ambiente;

- **fortalecer, como parte de la política de la actual gestión de gobierno nacional bs nuevos procesos de coordinación e integración con el Ministerio de Educación de la Nación, la Confederación de Trabajadores de la Educación Argentina (CTERA) y la Federación Universitaria Argentina;**

- continuar, en el ámbito de la SDS y PA, con la propuesta de "Dialogo de Saberes" en el marco de la Universidad Argentina, a los efectos de lograr el compromiso de un debate epistemológico en el nivel mayor de la formación Argentina, con la finalidad de que la problemática ambiental penetre el conocimiento en todos los niveles de la educación formal.

C.IV.5. Arreglos Institucionales Internacionales (multilaterales, regionales y bilaterales)

C.IV.5.a. Logros:

- La Argentina integró los más importantes foros ambientales de carácter mundial (Consejo de Administración del PNUMA, CDS, Comité de Alto Nivel de Ministros y Altos Funcionarios del PNUMA), mediante la participación directa de las máximas autoridades ambientales y de la inserción de los organismos ambientales nacionales en dichos ámbitos;

- La Argentina sigue impulsando el Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, como el ámbito natural de encuentro de los ministros de la región, para el diseño de las líneas de acción prioritarias y la formulación de proyectos y políticas ambientales concertadas; también ha participado activamente de los mismos;

- la Argentina tuvo un rol fundamental en la constitución de un foro ambiental en el ámbito del MERCOSUR. En 1992 el Grupo Mercado Común (GMC) creó la Reunión Especializada de Medio Ambiente (REMA). Como hitos en el trabajo cumplido por la REMA merecen destacarse, entre otros: la Resolución N° 10/94 del GMC por medio de

la cual se aprobó las Directrices Básicas en Materia de Política Ambiental para el MERCOSUR. La coordinación alcanzada entre los Estados Parte sirvió de fundamento para la realización de la Primera Reunión de Ministros y Secretarios de Estado responsables del área de Medio Ambiente del MERCOSUR en junio de 1995 que concluyó con la firma de la Declaración de Taranco, de relevancia ambiental en el espacio regional. Tomando como fundamento toda esta labor, el GMC creó en el año 1995 el Subgrupo N° 6 Medio Ambiente MERCOSUR (SGT N° 6) logrando una jerarquización institucional de la temática ambiental, asegurando de tal forma el tratamiento permanente de la temática en el proceso de integración.

El organismo ambiental nacional viene ejerciendo desde 1995 a la fecha la Coordinación Nacional del aludido Subgrupo;

Como principal producto alcanzado, en el ámbito del SGT N° 6, debe remarcarse la reciente aprobación del Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del MERCOSUR, el cual fue elevado al GMC, para su consideración, mediante Rec. N° 1/01.

- La Argentina sigue fortaleciendo sus relaciones bilaterales con autoridades ambientales de otros países, mediante la suscripción de convenios de cooperación (Cuba, Haití, Francia, Méjico, Canadá, etc.) e integración de comisiones técnicas bilaterales (Comisión de Recursos Hídricos Compartidos con Chile; Subcomisión de Medio Ambiente de la Comisión Binacional Argentino – Chilena);

- la Argentina ha tenido un fuerte compromiso respecto del cumplimiento de la agenda ambiental internacional y sigue apoyando los procesos ambientales internacionales. En tal sentido el país fue sede de : la X Reunión de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe en 1996; la III Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica en 1996; la IV Conferencia de las Partes de la Convención sobre Cambio Climático en 1998; el Comité de Alto Nivel de Ministros del PNUMA en 1998; la VI Reunión de la Subcomisión de Medio Ambiente Argentino – chilena en el 2000 etc.).

C.IV.5. b. Factores que contribuyeron a tales logros:

- La jerarquización institucional del organismo nacional encargado de definir la política ambiental, mediante la creación de una Secretaría que dependió directamente de la Presidencia de la Nación (SRNyDS) hasta 1999 y luego a partir de 2000 se crea el Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente (MDSyMA);

- la creación de una dependencia en el MRECIC con jerarquía de Dirección General (DGAM) con responsabilidad específica en las negociaciones internacionales de carácter ambiental;

- las actividades y gestiones de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del PNUMA (ORPLAC) han favorecido y facilitado la participación de las máximas autoridades ambientales de los países de la región, en los procesos de toma de decisión en el ámbito internacional.

C.IV.5.c. Limitaciones:

- No existen recursos financieros suficientes para efectuar un adecuado seguimiento de la agenda ambiental internacional y como consecuencia de ello se dificulta la elaboración de propuestas e iniciativas con contenido estratégico;

- no se percibe a la agenda ambiental como una oportunidad para una mejor inserción del país en el concierto internacional;

- no se ha logrado que la agenda ambiental se integre debidamente con la agenda comercial del país;

C.IV.5. d. Metas y Desafíos:

- Dotar de continuidad y unidad de criterio a los negociadores argentinos en los foros internacionales de relevancia ambiental, mediante una actuación concertada de los mismos, en cada uno de esos ámbitos;

- establecer mecanismos que permitan evaluar los reales beneficios para el país, derivados de los avances en la agenda internacional en materia de política y legislación ambiental nacional;

- generar mayores canales de consultas, previas a los foros internacionales ambientales, entre los organismos nacionales y los provinciales;

- lograr una representación al mas alto nivel del área económica, en los foros ambientales internacionales;

- fortalecer los aspectos ambientales, en los procesos de integración regional.

C.IV.6. Instrumentos y Mecanismos Jurídicos internacionales

C.IV.6.a. Logros:

- Argentina es parte de los convenios y acuerdos ambientales multilaterales y regionales, con una participación activa en los Comités de Negociación de dichos acuerdos, a la vez que promueve la concreción de instrumentos jurídicos de carácter ambiental en el nivel regional y subregional;

- argentina asume con responsabilidad el cumplimiento de una parte sustantiva de los compromisos de la Agenda XXI, (su desafío pendiente para con la Agenda es alcanzar un desarrollo duradero social, ambiental y económico) y los convenios ambientales, mediante el desarrollo de legislación nacional y programas y proyectos, acordes;

- Argentina como país en desarrollo ha intentado favorecer, en la medida de lo posible, una actitud responsable y crítica ante la comunidad internacional respecto de los grandes problemas ambientales, promoviendo en todos los ámbitos en los cuales ha tenido ocasión de expresar la posición nacional, una visión superadora del dilema crecimiento económico - protección ambiental;

- Argentina cumple regularmente con las obligaciones impuestas a los países por los convenios ambientales en materia de provisión de información, presentando en debida forma y tiempo la Comunicación Nacional al Convenio

sobre Diversidad Biológica, el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero y el Informe Nacional a la Convención sobre Cambio Climático, entre otras obligaciones;

- Argentina viene realizando ingentes esfuerzos para ayudar a evitar el estancamiento de las negociaciones internacionales en temas claves, buscando alternativas de acercamiento entre países en desarrollo y países desarrollados, para avanzar en el tratamiento y solución de los mismos;

- Argentina ha evitado asumir una actitud pasiva ante las dificultades de los procesos de negociación, buscando un rol activo para el país y para la región en el debate y la adopción de decisiones;

C.IV.6.b. Factores que contribuyeron a tales logros:

- La relevancia otorgada por los organismos ambientales en los diferentes ámbitos de gobierno, a la agenda internacional ambiental;

- la participación directa de los organismos ambientales en los procesos internacionales y regionales con una visión integradora;

- la actuación coordinada del organismo ambiental nacional con el MREClYC en la elaboración de las posiciones del país ante los diferentes foros internacionales.

C.IV.6.c. Limitaciones:

- El escaso reconocimiento de lo ambiental como tema estratégico en las relaciones internacionales;

- la subsistencia, en algunos sectores, de una visión de lo ambiental como limitante del desarrollo y de la posibilidad de lograr mejoras en las condiciones económicas;

- la gran cantidad de compromisos de la agenda ambiental internacional, que impide lograr un seguimiento exhaustivo de todos los procesos;

- la intervención de organismos diversos en la definición de la posición nacional, que retrasa el logro de consensos;

- las dificultades presupuestarias de los organismos ambientales impide una representación suficiente en los foros ambientales regionales e internacionales;

- las dificultades para acceder a documentos técnicos y políticos para la preparación de las reuniones, con la debida anticipación y en el idioma nacional;

- la inadecuada distinción entre ámbitos técnicos y ámbitos políticos, en muchos casos, dificulta una adecuada representación del país en las diversas reuniones internacionales y regionales;

- el uso prioritario de una lengua distinta a la nacional en los grupos de consulta y en los documentos de sala, debilita las posibilidades de participar plenamente de las consultas; del mismo modo, la proliferación de grupos de contacto en la gran mayoría de las reuniones restringe la participación efectiva de las delegaciones menos numerosas, normalmente las de los países en desarrollo.

C.IV.6. Metas y desafíos:

- Lograr consenso nacional en los temas principales, a fin de dotar de continuidad a las posiciones que adopta el país en los procesos internacionales;

- establecer instancias permanentes de consulta y seguimiento de la agenda ambiental internacional, con una amplia participación de los sectores gubernamentales y de la sociedad civil, para que las propuestas e iniciativas a sostener en los ámbitos internacionales cuenten con la debida legitimidad interna;

- enmarcar las posiciones que se asumen en los procesos internacionales en la Estrategia Nacional de Desarrollo Sustentable, de modo que las mismas reflejen en todos los ámbitos las prioridades nacionales;

- generar, en todos los casos, instancias de consultas regionales previas a la participación multilateral, a fin de lograr acuerdos que fortalezcan la posición negociadora y logren una mejor inserción en el ámbito multilateral.

C.IV.7. Información para la Toma de Decisión

C.IV.7.a. Logros:

- Se creó el Sistema de Información Ambiental Nacional (SIAN), en el ámbito de la SDS y PA del MDS y MA, con la participación de organismos nacionales y provinciales. Está contemplada la participación de las organizaciones no gubernamentales. Se puso en funcionamiento los 23 nodos provinciales, proveyéndolos de equipamiento, lo cual permite a los nodos y a las áreas de la SDS y PA, desarrollar y actualizar el Sistema Referencial al nivel correspondiente, desarrollar páginas WEB, conectarse a Internet y procesar información gráfica y referenciada mediante la utilización de Sistemas de Información Georeferenciada;

- se está desarrollando, con un importante estado de avance, el Sistema de Información Ambiental del MERCOSUR, llevado a cabo en el marco del SGT N° 6 Medio Ambiente – MERCOSUR;

- se elaboró el Digesto Ambiental Nacional que permitió reunir y sistematizar la normativa proveniente de distintas fuentes con contenido ambiental.

C.IV.7.b. Limitaciones:

Si bien la información es adecuada en algunos temas, no cubre de manera homogénea todo el territorio nacional, presenta discontinuidades, se halla dispersa y en

algunos temas no se encuentra actualizada. Gran parte de las limitaciones se relacionan con la falta de recursos financieros, los cuales permitirían, entre otras posibilidades, contratar personal para entrar información y mantener una actualización permanente del sistema.

C.IV. 7.c. Metas y Desafíos:

En el nivel nacional, el Sistema espera incorporar la información ambiental disponible y aún dispersa en los nodos que de él participan tales como:

1. Nodos internos (áreas técnicas de la SDSyPA);
2. nodos externos (nodos provinciales y otros como PAN, INA, INIDEP, INTA, APN, SRH, hasta la fecha).

A tal efecto se ha previsto integrar dichos nodos en bases de datos y en un Sistema de Información Geográfica que permita efectuar, entre otros servicios los siguientes: análisis de información; generación de cartografía temática; mediciones e interpretaciones de fotos aéreas e imágenes de satélite; elaboración de modelos digitales de elevación del terreno; identificación e inventario de recursos naturales y estudios de impacto ambiental.

En el nivel regional, se esta trabajando para que el SIAN forme parte del Sistema de Información Ambiental del MERCOSUR (SIAM). En tal sentido, se implementará el Sitio Web del SIAM. Sobre la base de lo acordado con los Estados Parte, se ha previsto comenzar a trabajar en la sistematización de la información referida a emergencias ambientales. Esta temática, reviste fundamental importancia para los cuatro países, e integra una de las Tareas Prioritarias asignadas por el GMC, al SGT N° 6 - Medio Ambiente del MERCOSUR.